Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado

CONVENIO DE 29 DE MAYO DE 1993 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE NIÑOS Y A LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Texto adoptado por la Decimoséptima Sesión

Informe explicativo de

G. Parra- Aranguren

Editado por la Oficina Permanente de la Conferencia
Scheveningseweg 6, La Haya, Países Bajos

Informe explicativo de
G. Parra Aranguren

(traducción)

Contenido del Informe	página
INTRODUCCIÓN	1
<i>A Trabajos preparatorios</i>	1
<i>B Tres reuniones de la Comisión especial</i>	5
<i>C Decimoséptima Sesión</i>	10
TITULO DEL CONVENIO	12
PREAMBULO	13
<i>Frase introductoria</i>	13
<i>Primer párrafo</i>	13
<i>Segundo párrafo</i>	14
<i>Tercer párrafo</i>	14
<i>Cuarto párrafo</i>	16
<i>Quinto párrafo</i>	18
CAPÍTULO I- AMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO	19
<i>Artículo 1</i>	19
<i>Apartado a</i>	19
<i>Apartado b</i>	20
<i>Apartado c</i>	21
<i>Artículo 2</i>	21
<i>Párrafo 1</i>	21
<i>Párrafo 2</i>	26
<i>Artículo 3</i>	29
CAPITULO II- CONDICIONES DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES	30
<i>Artículo 4</i>	32
<i>Frase introductoria</i>	32
<i>Apartado a</i>	33
<i>Apartado b</i>	35
<i>Apartado c</i>	36
<i>Apartado c 1)</i>	36
<i>Apartado c 2)</i>	39

Apartado c 3)	40
Apartado c 4)	41
Apartado d	42
Frase introductoria	42
Apartado d 1)	43
Apartado d 2)	44
Apartado d 3)	44
Apartado d 4)	44
 Artículo 5	 45
Frase introductoria	45
Apartado a	46
Apartado b	47
Apartado c	47
 CAPÍTULO III- AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS ACREDITADOS	 48
 Artículo 6	 49
Comentarios generales	49
Párrafo 1	49
Párrafo 2	50
 Artículo 7	 51
Párrafo 1	51
Párrafo 2	51
Apartado a	52
Apartado b	53
 Artículo 8	 53
 Artículo 9	 55
Frase introductoria	55
Apartado a	56
Apartado b	57
Apartado c	58
Apartado d	58
Apartado e	58
 Artículo 10	 60
 Artículo 11	 62
Frase introductoria	62
Apartado a	62
Apartado b	62
Apartado c	63
 Artículo 12	 64
 Artículo 13	 65

CAPÍTULO IV- CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES	66
Artículo 14	68
Artículo 15	69
Párrafo 1	69
Párrafo 2	71
Artículo 16	72
Párrafo 1	72
Frase introductoria	72
Apartado a	72
Apartado b	74
Apartado c	74
Apartado d	75
Párrafo 2	75
Artículo 17	76
Frase introductoria	76
Apartado a	78
Apartado b	78
Apartado c	79
Apartado d	80
Artículo 18	81
Artículo 19	82
Párrafo 1	82
Párrafo 2	82
Párrafo 3	83
Artículo 20	83
Artículo 21	84
Párrafo 1	84
Frase introductoria	84
Apartado a	85
Apartado b	86
Apartado c	87
Párrafo 2	87
Artículo 22	87
Párrafo 1	88
Párrafo 2	89
Apartado a	90
Apartado b	90

Párrafo 3	91
Párrafo 4	91
Párrafo 5	92
CAPÍTULO V- RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE LA ADOPCIÓN	93
Artículo 23	93
Párrafo 1	93
Primera frase	93
Segunda frase	96
Párrafo 2	97
Artículo 24	98
Artículo 25	100
Artículo 26	101
Párrafo 1	101
Frase introductoria	101
Apartado a	102
Apartado b	103
Apartado c	104
Párrafo 2	106
Párrafo 3	108
Observaciones finales	109
Artículo 27	110
Párrafo 1	110
Apartado a	111
Apartado b	112
Párrafo 2	112
CAPÍTULO VI- DISPOSICIONES FINALES	113
Artículo 28	113
Artículo 29	115
Artículo 30	117
Observaciones generales	117
Párrafo 1	118
Párrafo 2	119
Artículo 31	120
Artículo 32	122
Párrafo 1	122
Párrafo 2	122

Párrafo 3	123
Artículo 33	124
Artículo 34	125
Artículo 35	126
Artículo 36	127
Frase introductoria	127
Apartado a	127
Apartado b	127
Apartado c	128
Apartado d	128
Artículo 37	128
Artículo 38	129
Artículo 39	129
Observaciones generales	129
Párrafo 1	131
Párrafo 2	132
Artículo 40	134
Artículo 41	134
Apartado 42	137
CAPÍTULO VII- CLAUSULAS FINALES	137
Artículo 43	137
Artículo 44	138
Artículo 45	138
Artículo 46	139
Artículo 47	139
Artículo 48	139
OBSERVACIONES FINALES	139
A Legalización	139
B Niños refugiados	141
C Formularios tipo	142
D Post- scriptum	143

INTRODUCCIÓN*

A Trabajos preparatorios

1 El 19 de enero de 1988 la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado sometió a la consideración de la Comisión especial de asuntos generales y política de la Conferencia el tema de la cooperación internacional en materia de adopción internacional. Teniendo en cuenta la propuesta formal de Italia¹ el Secretario general presentó el Documento preliminar núm. 9, preparado por la Oficina permanente, en el cual se ponía de relieve, junto a otras cuestiones, que existían dos posibles estrategias, o bien la elaboración de un Convenio limitado, elaborado exclusivamente dentro de la Conferencia, o bien un Convenio para cuya elaboración se invitara también a Estados no miembros con un interés directo en la materia².

2 Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que la adopción internacional crea en la actualidad muy serios problemas, de naturaleza y grado distintos a los que existían cuando se elaboró el *Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre competencia de autoridades, ley aplicable y reconocimiento de decisiones en materia de adopción* (en adelante "Convenio de La Haya de 1965"); y tras un largo debate se manifestó un amplio consenso en torno al mantenimiento de la cuestión en el orden del día. No obstante, "los expertos advirtieron que cualquier intento que emprendiera la Conferencia en aras de una mejora de la situación internacional existente se enfrentaría a dificultades debidas al delicado carácter del tema. En efecto, algunos expertos se preguntaron si la Conferencia de La Haya era el foro adecuado para tratar esta cuestión; se suscitaron además dudas en relación a cuál era la mejor forma de enfocar la materia y en relación a la financiación y organización de los trabajos, puesto que se

* Abreviaturas utilizadas en este Informe:

- proyecto: Anteproyecto de Convenio adoptado por la Comisión especial;
- Informe de la Comisión especial: Informe de G. Parra- Aranguren sobre el anteproyecto de Convenio;
- CDN: Convenio de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño.

¹ "Trabajos futuros- Propuesta del Gobierno de Italia", Doc. Prel. núm. 13, de enero de 1988 (a la atención de la Comisión especial de enero de 1988), en Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, *Actes et documents de la Seizième Session (1988)*, tomo I, *Matières diverses*, La Haya, 1991, p. 189.

² Hans van Loon, "Nota sobre la oportunidad de preparar un nuevo convenio sobre cooperación internacional en materia de adopción internacional", Documento preliminar núm. 9, de diciembre de 1989 (a la atención de la Comisión especial de enero de 1988), *ibidem*, pp. 164-184.

advirtió que cualquier actividad que la Conferencia emprendiera en relación a la adopción sin contar con la participación de los países de origen de los niños que no fueran en la actualidad Estados miembros de la Conferencia carecería de utilidad. Sería, por tanto, necesario hallar la fórmula para invitar a dichos países a colaborar con la Conferencia " ³.

3 Aunque la cuestión se adoptó con carácter prioritario, la Comisión especial de asuntos generales y política de la Conferencia presentó a la Decimosexta Sesión las siguientes recomendaciones:

(a) El orden del día de la Decimoséptima Sesión debería incluir dos materias, una en relación al Derecho de familia y otra en el ámbito de los contratos o las obligaciones extracontractuales;

(b) la Decimosexta Sesión debería elegir dos de los tres temas siguientes:

- adopción internacional, a condición de que los Estados no miembros afectados expresaran a la Oficina Permanente su voluntad de participar en los trabajos;

- ley aplicable a los contratos de licencia de tecnología y de transferencia de know-how, para lo cual la Oficina Permanente contactaría a la Oficina Mundial de propiedad industrial (OMPI) respecto a las modalidades de una posible cooperación;

- ley aplicable a determinados aspectos de la competencia desleal que la Oficina Permanente debería especificar en un informe suplementario que se sometiera a la Decimosexta Sesión.⁴

4 En la Decimosexta Sesión de la Conferencia el Secretario general informó acerca de los resultados positivos de sus contactos con (a) otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para coordinar la actividad internacional en materia de adopción internacional; (b) funcionarios de alto rango de Estados no miembros a fin de determinar el interés de sus Gobiernos en una cooperación con la Conferencia; y (c) organizaciones privadas y personalidades activas en el ámbito de la protección internacional de los niños y la adopción internacional así como autores interesados en dicha materia, a fin de establecer vías informales de coordinación, información y apoyo para los trabajos que la Conferencia pudiera emprender en el futuro en relación al tema de la adopción internacional. Estas reacciones

³ " Conclusiones de la Comisión especial de enero de 1988", formuladas por la Oficina Permanente, Documento preliminar núm. 14, de abril de 1988 (a la atención de la Decimosexta Sesión), *ibidem*, pp. 194-202 (p. 198).

⁴ *Ibidem*, p. 302.

iniciales habían convencido al Secretario general de que un número considerable de Estados de origen de los niños aceptaría una invitación formal de la Conferencia de La Haya para participar en las negociaciones de un nuevo Convenio sobre adopción internacional.⁵

5 La Primera Comisión de la Decimosexta Sesión discutió la cuestión el 10 de octubre de 1988 y todos los participantes se pronunciaron a favor del proyecto⁶. Inmediatamente después, en la mañana del día siguiente y sin ulterior discusión, la Sesión plenaria decidió "incluir en el orden del día de los trabajos de la Decimoséptima Sesión la preparación de un Convenio sobre la adopción de niños procedentes del extranjero" y encargó al Secretario general "la realización de los trabajos preliminares y la convocatoria de una Comisión especial a tal efecto". La Sesión plenaria también consideró "indispensable la participación en dicha Comisión especial de los Estados de origen de los que provienen muchos de estos niños" y por ello solicitó "que el Secretario general hiciera todo lo posible para obtener su participación en los trabajos en tanto que miembros ad hoc".⁷

6 La Oficina Permanente resumió de la siguiente forma las razones para incluir, con carácter prioritario, el tema de la adopción internacional en el orden del día de los trabajos de la Conferencia:

(i) un aumento espectacular de las adopciones internacionales que se ha producido en muchos Estados desde finales de los años sesenta, hasta el punto de que la adopción internacional ha pasado a ser un fenómeno mundial caracterizado por la migración de niños a través de grandes distancias geográficas y de una sociedad y cultura a un entorno social y cultural muy distinto;

(ii) la existencia de problemas humanos serios y complejos, algunos ya conocidos pero agravados a resultas de estos nuevos fenómenos y otros nuevos que plantean, entre otras, numerosas y delicadas cuestiones jurídicas; y

⁵ "Informe del Secretario General sobre la cuestión de la adopción internacional de niños", Doc. Prel. núm. 17, de septiembre de 1988 (a la atención de la Decimosexta Sesión) *ibidem*, pp. 219-221.

⁶ "Comisión I- Decimosexta Sesión- Asuntos generales", Acta núm. 1, *ibidem*, pp. 238-245.

⁷ Decimoséptima Sesión- Sesión Plenaria- Acta núm. 5, *ibidem*, pp. 271-272 y 234 y "Acta Final", 20 de octubre de 1988, punto B 1, *ibidem*, pp. 34-35.

(iii) la insuficiencia de los instrumentos legales internos e internacionales existentes y la necesidad de una aproximación multilateral.⁸

7 Una Memoria preparada por la Oficina Permanente en noviembre de 1989 reconoció la insuficiencia de los instrumentos jurídicos internacionales frente a los problemas que las adopciones internacionales crean actualmente. Se mencionaban las siguientes necesidades:

(a) la necesidad de establecer normas jurídicas de carácter vinculante que deberían observarse en las adopciones internacionales (¿ en qué circunstancias es adecuada una adopción de este tipo?; ¿ qué ley debe regir los consentimientos y consultas que no se refieran a los adoptantes?);

(b) la necesidad de crear un sistema de supervisión para asegurar el cumplimiento de tales normas (¿ qué puede hacerse para prevenir adopciones internacionales que no obedezcan a los intereses del niño?; ¿ cómo puede protegerse a los niños frente a las adopciones fraudulentas, dolosas u obtenidas mediante contraprestaciones económicas?; ¿ deberían adoptarse medidas de control sobre las agencias que trabajan en el ámbito de la adopción internacional, tanto en los Estados donde han nacido los niños como en aquellos hacia los cuales serán llevados?);

(c) la necesidad de establecer vías de comunicación entre las autoridades de los países de origen de los niños y de las de los países en los que van a vivir después de la adopción (Se podría concebir, por ejemplo, la creación, a través de un tratado multilateral, de un sistema de Autoridades centrales que pudieran comunicarse para la protección de los niños en los casos de adopción internacional); y finalmente

(d) la necesidad de cooperación entre los países de origen y de destino (relaciones de trabajo eficaces, basadas en el respeto mutuo y en la observancia de niveles profesionales y éticos elevados, podrían ayudar a promover la confianza entre dichos países, sin olvidar que tales formas de cooperación ya existen entre determinados países con resultados satisfactorios para ambas partes).⁹

⁸ J.H.A. van Loon, "Informe sobre la adopción internacional", Doc. Prel. núm. 1 de Abril de 1990, pp. 6-7; cfr. Actes et Documents de la Seizième Session (1988), tomo I, op. cit., pp. 180-184. N.T.: Existe una traducción al español de este importante informe.

⁹ "Memoria sobre la preparación de un nuevo Convenio sobre la cooperación internacional y la protección del niño en materia de adopción internacional", elaborada por la Oficina Permanente, noviembre de 1989, pp. 1-2.

8 La Decimocuarta Sesión aceptó el principio de participación de Estados no miembros en los trabajos de la Conferencia;¹⁰ se consideró que tal principio debía seguirse en relación con la adopción internacional porque existía una necesidad práctica evidente de un instrumento multilateral que no fuera, o no fuera exclusivamente, un convenio que unificara normas de Derecho internacional privado. De hecho, se consideró que una protección efectiva de los niños requería la definición de determinados principios de carácter sustantivo y el establecimiento de un marco jurídico de cooperación de autoridades entre los Estados de origen y los Estados de recepción.

B *Tres reuniones de la Comisión especial*

9 La primera reunión de la Comisión especial sobre la adopción internacional tuvo lugar entre los días 11 y 21 de junio de 1990 bajo la presidencia del Sr. T.B. Smith Q.C. (Canadá), con el Sr. J. Pirrung (Alemania) y el Sr. Mengesha Haile (Etiopía) como primer y segundo vicepresidente, respectivamente. El Sr. G. Parra Aranguren fue nombrado relator y la Sra. L. Balanón (Filipinas) relatora-consultora. Estuvieron representados treinta y un Estados miembros, dieciocho Estados no miembros, diez organizaciones internacionales especializadas en temas de infancia, de las cuales tres eran intergubernamentales y siete no gubernamentales¹¹. Los participantes examinaron el "Informe

¹⁰ Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Quatorzième session (1980), Acta final, D 1, tomo I, p. I-63.

¹¹ Estuvieron representados los siguientes Estados miembros: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. Los Estados no miembros que participaron fueron: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Honduras, India, Indonesia, Madagascar, Mauricio, Perú, Rumania, Senegal, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. En calidad de observadores asistieron a la Comisión Especial: (a) representantes de las organizaciones intergubernamentales: Instituto Internacional para la unificación del Derecho privado (Unidroit), Instituto interamericano del niño (IIN) y el Consejo de Europa; (b) representantes de organizaciones no gubernamentales: Asociación interamericana de Abogados (IBA), Servicio Social Internacional (SSI), Federación interamericana de abogados (IABA), Federación Internacional "Tierra de hombres" (FITDH), Defensa de los niños-internacional (DEI), Academia internacional de abogados matrimonialistas (IAML) y el *Committee for Cooperation within the Nordic Adoption and Parent Organizations (NCA)*.

sobre la adopción internacional"¹², que había sido excepcionalmente bien preparado por el Primer Secretario de la Oficina Permanente, Sr. J.H.A. Van Loon, así como diecinueve otros documentos que posteriormente se agruparon en el "Documento Preliminar núm. 2" y que contenían observaciones sobre cuestiones específicas así como información fáctica y jurídica sobre el tema. Las conclusiones a las que se llegó fueron recogidas por la Oficina Permanente y distribuidas como "Documento Preliminar núm. 3" en Agosto de 1990.¹³

10 La primera reunión de la Comisión especial sobre la adopción internacional decidió también que un Comité informal de asesoramiento *ad hoc* asistiera a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado en la tarea de redactar en forma de artículos las conclusiones a las que se pudiera llegar y designó como miembros del mismo a los señores: Sr. G. Parra-Aranguren (Venezuela), relator, Sra. L. Balanon (Filipinas), relatora-consultora, miembros de oficio; Sra. C.F.G. Sunayarti Hanorto (Indonesia), Sr. W.R. Duncan (Irlanda), Sr. M.J.P. Verwilghen (Bélgica), Sr. J.C. Schultsz (Países Bajos) y Sr. D. Opertti (Uruguay). Se reunieron, con la excepción de la Sra. C.F.G. Sunayarti Hartono (Indonesia) entre los días 5 y 10 de noviembre de 1990 bajo la presidencia del Sr. J.C. Schultsz (Países Bajos) y prepararon el Documento Preliminar número 4.¹⁴

11 Once Estados de habla hispana participaron en la primera reunión de la Comisión especial sobre adopción internacional¹⁵ y todos sus representantes pudieron al menos entender de forma pasiva las observaciones hechas en francés e inglés y leer los textos presentados en las dos lenguas oficiales de la Conferencia. Sin embargo, el Secretario General constató que un considerable número de dichos participantes tenía extremas dificultades para expresarse de manera activa en francés e inglés, creándose

¹² J.H.A. van Loon, "Informe sobre la adopción internacional", Doc. Prel. núm. 1, Abril 1990. N.T.: Existe una traducción al español de este importante Informe.

¹³ "Conclusiones de la Comisión Especial de Junio de 1990 sobre la adopción internacional" establecidas por la Oficina Permanente, Adopción, Doc. Prel. Núm. 3, Agosto de 1990.

¹⁴ "Borrador de artículos para un Convenio sobre la protección de niños y la cooperación internacional en materia de adopción internacional, preparada por la Oficina Permanente con la asistencia de un Comité *ad hoc* y comentarios generales", Adopción, Doc. Prel. núm. 4, Diciembre de 1990.

¹⁵ Los Estados miembros de habla hispana que asistieron a la reunión fueron: Argentina, México, España, Uruguay y Venezuela y los Estados no miembros representados fueron: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú.

por ello " en dichas delegaciones cierto malestar y un sentimiento de frustración"; por ello en su carta de 25 de julio de 1990 consultó a los órganos nacionales de los Estados miembros acerca de la posibilidad de permitir a los países de habla hispana expresarse en su propia lengua con traducción simultánea al francés e inglés.

12 Los resultados de dicha consulta fueron favorables y la decisión de facilitar la participación de los países de habla hispana fue muy acertada, puesto que los Estados latinoamericanos mostraron un extraordinario interés en la materia. De hecho se celebró, durante los trabajos preparatorios, un seminario en Quito, Ecuador, durante los días 2 y 6 de abril de 1991, en el que participaron Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Perú, Uruguay y Venezuela así como un representante de la Oficina Permanente, con la finalidad de examinar los problemas relativos a la adopción internacional desde la perspectiva de la elaboración de un Convenio elaborado por la Conferencia de La Haya. Las conclusiones se transmitieron a la Oficina Permanente a través del Instituto interamericano del niño.

13 La segunda reunión de la Comisión especial sobre la adopción internacional tuvo lugar entre los días 22 de abril y 3 de mayo de 1991 y asistieron a la misma treinta y tres Estados miembros y veinte Estados no miembros, así como un número sustancial de observadores representando a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales especializadas en temas de infancia¹⁶. Los participantes examinaron el Documento Preliminar núm. 4 en conexión con el Documento Preliminar núm. 3. Se distribuyeron 123

¹⁶ Los Estados miembros que participaron fueron: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de América del Norte, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela. Los Estados no miembros representados fueron: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Honduras, India, Indonesia, Líbano, Madagascar, Malasia, Mauricio, Nepal, Perú, República de Corea, Santa Sede, Sri Lanka y Tailandia. Como observadores asistieron: (a) representantes de organizaciones intergubernamentales: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), Consejo de Europa, Comisión internacional del estado civil (CIEC) Instituto internacional para la unificación del Derecho privado (UNIDROIT), Instituto interamericano del niño (IIN), Secretariado de la Commonwealth; (b) representantes de organizaciones no gubernamentales: Academia internacional de abogados matrimonialistas (IAML), Asociación internacional de abogados (IBA), Asociación internacional de magistrados de juventud e infancia (AIMJF), Federación internacional- "Tierra de hombres", Defensa de los niños-internacional (DEI), Federación internacional de abogados (IASA), International Association of Voluntary Adoption Agencies and NGOs (IAVAAN), Servicio Social internacional (IIS), el *Committee for Cooperation within the nordic Adoption and Parent Organizations* (NCA).

documentos de trabajo y se consideraron asimismo dos informes muy útiles preparados por Defensa de los niños-internacional, la Federación internacional "Tierra de hombres" y el Servicio Social internacional¹⁷. Finalmente, la segunda reunión aprobó el "Proyecto de artículos para un Convenio sobre la protección de los niños y la cooperación internacional en materia de adopción internacional", que se incorporó al Documento de Trabajo final, distribuido en la última Sesión de trabajo bajo el entendimiento de que tal documento debía de ser objeto de revisión por parte de un Comité de redacción teniendo en cuenta los comentarios y observaciones de los Estados invitados a participar. Se nombró a los siguientes expertos miembros del Comité de redacción: el Sr. J. Pirrung (Alemania), primer Vicepresidente de la Comisión especial, presidente de oficio; Sr. G. Parra-Aranguren (Venezuela), Relator y miembro de oficio, Sra. L. Balanón (Filipinas), Relatora-consultora, miembro de oficio, Sr. P. Pfund (Estados Unidos), Sra. K. Buure-Hägglund (Finlandia), Sr. Zhang Kening (China), Sr. I. Fadlallah (Líbano), Sr. D. Opertti (Uruguay), Sr. W. Duncan (Irlanda) y Sr. M. Verwilghen (Bélgica).

14 Todos los miembros del Comité de redacción, con la excepción de la Sra. L. Balanón (Filipinas) y el Sr. I. Fadlallah (Líbano), se reunieron durante la primera semana de septiembre de 1991 y redactaron un "Borrador de proyecto de Convenio", distribuido como Documento Preliminar núm. 6 y acompañado de unas "Notas explicativas", para ilustrar las soluciones adoptadas en los artículos, y de comentarios complementarios de la Oficina Permanente¹⁸.

15 La tercera reunión de la Comisión especial tuvo lugar entre los días 3 a 14 de febrero de 1992. Estuvieron representados treintaytres Estados miembros, veinticuatro Estados no miembros y quince organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, especializadas en temas de infancia¹⁹. La Comisión especial examinó

¹⁷ "Conclusiones preliminares de una encuesta común acerca del período de prueba en las adopciones internacionales" y "Conclusiones preliminares de una encuesta común sobre las adopciones internacionales independientes".

¹⁸ "Borrador de proyecto de Convenio sobre la cooperación internacional y la protección de los niños en materia de adopción internacional (artículos redactados por el Comité de redacción, septiembre de 1991) y Nota explicativa", Adopción, Doc. Prel. núm. 6, septiembre de 1991.

¹⁹ Los Estados miembros que participaron fueron: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de América del Norte, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, República federal checa y eslovaca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela. Los Estados no

el Documento Preliminar núm. 6, así como un importante número de documentos de trabajo (hasta el núm. 265), pero no hubo tiempo suficiente para completar totalmente el texto articulado. Por este motivo se pidió al Comité de redacción que terminara la versión final del anteproyecto de Convenio.

16 Un número reducido de los miembros del Comité de redacción (el Sr. J. Pirrung, la Sra. K. Buure- Hågglund, el Sr. W. Duncan y el Sr. M. Verwilghen) se reunió durante los días 9 y 10 de marzo de 1992 para revisar el texto aprobado en la tercera reunión de la Comisión especial, suprimir las discordancias lingüísticas entre la versión francesa e inglesa y concretar determinadas decisiones para su ulterior consideración. Para finalizar, el Comité de redacción terminó sus trabajos elaborando el "Anteproyecto de convenio sobre la cooperación internacional y la protección de los niños en materia de adopción internacional elaborado por la Comisión especial de febrero 1992" precedido por una "Nota explicativa".

17 Inmediatamente después de la tercera reunión de la Comisión especial, el autor del presente Informe redactó su Informe sobre el anteproyecto de Convenio que fue distribuido, junto al texto del anteproyecto, en el Documento Preliminar núm. 7 de septiembre de 1992 respecto al cual se solicitaron los comentarios y observaciones de los Estados miembros, Estados no miembros invitados a participar y las organizaciones internacionales interesadas especializadas en temas de infancia²⁰. En adelante nos referiremos al Informe sobre el Anteproyecto de Convenio como el "Informe de la Comisión especial" y al anteproyecto de Convenio como "el proyecto".

miembros representados fueron: Albania, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Federación rusa, Filipinas, Haití, Honduras, Indonesia, Líbano, Madagascar, Malasia, Mauricio, Nepal, Panamá, Paraguay, República de Corea, Santa Sede, Senegal, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Los observadores asistentes fueron: (a) representantes de organizaciones intergubernamentales: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), Instituto internacional para la unificación del Derecho privado (Unidroit), Instituto interamericano del niño (IIN), Comisión internacional del estado civil (CIEC); (b) representantes de organizaciones intergubernamentales: Asociación internacional de abogados (IBA), Servicio social internacional (SSI), la Sociedad internacional de Derecho de familia (ISFL), Asociación internacional de magistrados de juventud e infancia (AIMJF), Federación Interamericana de abogados (IABA), Federación internacional "Tierra de hombres" (FITDH), Defensa de los niños-internacional (DCI), Academia internacional de abogados matrimonialistas (IAML), *International Association of Voluntary Adoption Agencies and NGOs* (IAVAAN), *Committee for Cooperation within the Nordic adoption and Parent Organizations* (NCA) y Euroadopt.

²⁰ Anteproyecto de Convenio adoptado por la Comisión especial e Informe del Sr. G. Parra Aranguren, Doc. Prel. núm. 7 de septiembre de 1992 a la atención de la Decimoséptima Sesión con información más detallada sobre los trabajos preparatorios (núm. 1-19, pp. 32-51).

18 Bolivia, Chipre, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Luxemburgo, Polonia, Rumania, Santa Sede, Suecia, Uruguay, el *Committee for Cooperation within the Nordic Adoption and Parent Organizations* (NCA), Defensa de los niños- internacional (DCI), el Servicio Social internacional (SSI) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) remitieron sus comentarios antes del 1 de marzo de 1993 y se distribuyeron inmediatamente como "Documento Preliminar núm. 8; posteriormente se recibieron comentarios de Australia, Austria, Madagascar, Noruega, los Países Bajos y el Reino Unido (Doc. Prel. núm. 8, Add. I), Alemania (Doc. Prel. núm. 8, Add. II), Sri Lanka y la Unión internacional del Notariado latino (Doc. Prel. núm. 8, Add. III) y de Albania, Turquía y el Instituto interamericano del niño (Doc. Prel. núm. 8, Add. IV).

C Decimoséptima Sesión

19 La Decimoséptima Sesión tuvo lugar en La Haya entre los días 10 y 29 de mayo de 1993; el Sr. J.C. Schultsz (Países Bajos) fue elegido presidente y la Sra. I.M. de Magalhaes Collaço (Portugal), el Sr. T. Bán (Hungría), el Sr. Tang Chengyuan (China), el Sr. J.L. Siqueiros (México) y el Sr. P.H. Pfund (Estados Unidos) fueron elegidos vice-presidentes. Fueron elegidos Presidentes de honor los Ministros de Asuntos Exteriores y Justicia de los Países Bajos, el Excmo. Sr. D. P.H. Kooijmans y el Excmo. Sr. D. E.M.H. Hirsch Ballin.

20 Se constituyeron dos Comisiones. La Primera, encargada de examinar los asuntos generales bajo la presidencia de la Sra. K.H. Buure-Hägglund (Finlandia), se reunió en cuatro ocasiones. A la Segunda Comisión se le encomendó la preparación del "Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional"; fue presidida por el Sr. T.B. Smith Q.C. (Canadá), el Sr. K.J. Pirrung actuó como Vicepresidente (Alemania), el Sr. G. Parra Aranguren como relator (Venezuela) y la Sra. L. Balanon (Filipinas) como relatora-consultora.

21 Estuvieron representados los siguientes Estados miembros: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Egipto, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República checa, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela.

22 Los Estados no miembros que participaron fueron: Albania, Benín, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador,

Federación rusa, Filipinas, Haití, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Líbano, Madagascar, Mauricio, Nepal, Panamá, Perú, República de Corea, Santa Sede, Senegal, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam.

23 Estuvieron representadas las siguientes organizaciones intergubernamentales: Naciones Unidas (ONU), Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), Organización internacional de policía criminal (Interpol), Instituto interamericano del niño (IIN) y Comisión internacional del estado civil (CIEC). Participaron asimismo las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación internacional de abogados (IBA), Servicio social internacional (SSI), Sociedad internacional de Derecho de familia (ISFL), Asociación internacional de magistrados de juventud y familia (AIMJF), Federación interamericana de abogados (IABA), Federación internacional "Tierra des hombres", Defensa de los niños-internacional (DEI), Unión internacional del notariado latino (UINL), *International Academy of matrimonial Lawyers* (IAML), *International Association of Voluntary Adoption Agencies and NGOs* (IAVAAN), Euroadopt, *Committee for Cooperation within the Nordic Adoption and Parent Organizations* (NCA) y el *North American Council on Adoptable Children* (NACAC).

24 El Comité de redacción lo integraron el Sr. K.J. Pirrung (Alemania) en calidad de presidente, la Sra. C. Jacob (Francia), la Sra. R.K. Buure-Hägglund (Finlandia), el Sr. W. Duncan (Irlandia), el Sr. P.H. Pfund (Estados Unidos), el Sr. Tang Chengyuan (China), el Sr. M.J.P. Verwilghen (Bélgica), el relator Sr. G. Parra Aranguren (Venezuela) y la Sra. L. Balanon (Filipinas), relatora consultora.

25 Se constituyó un Comité sobre el reconocimiento con el Sr. A. Bucher (Suiza) en la presidencia. Los otros miembros fueron la Sra. Ripoll de Urrutia (Colombia), la Sra. I.M. de Magalhaes Collaço (Portugal), la Sra. G.F. DeHart (Estados Unidos de América), el Sr. P. Picone (Italia), el Sr. J.L. Siqueiros (México) y el Sr. R.G.S. Aitken (Reino Unido).

26 Se constituyó asimismo un Comité sobre las cláusulas federales con la Sra. A. Borrás (España) en la presidencia y los siguientes miembros: el Sr. R.F. Wagner (Alemania), el Sr. H. Povos y el Sr. J.R. Figueredo Santoro (Brasil), la Srta. L. Lussier (Canadá), el Sr. G. Nahme (Líbano) y la Srta. A. Dzougueva y el Sr. I. Berestnev (Federación rusa).

27 La segunda Comisión tuvo veintiuna sesiones y se distribuyeron 201 documentos de trabajo; el Comité de redacción, el Comité sobre reconocimiento y el Comité sobre cláusulas federales se reunieron en numerosas ocasiones en el transcurso de la misma al igual que un grupo especial

creado para examinar los artículos 6, 7 y 17 del proyecto de Convenio.

28 La Oficina Permanente prestó un apoyo inapreciable a los trabajos; cabe destacar al Sr. J.H.A. van Loon siendo asimismo excepcional la contribución del Sr. G.A.L. Droz, del Sr. M.L. Pelichet y del Sr. C.A. Dyer. Los delegados se beneficiaron del excelente trabajo tanto de los Secretarios redactores, Sr. G. Carducci, Sra. N. Meyer-Fabre, Sra. C. van den Muijsenbergh-Cissé, Sr. T.G. Portwood, Srta. S.E. Roberts, Srta. A. Vallez, Sr. W.P. Vogt y Sra. K.S. Williams, y de los Secretarios adjuntos, Srta. C. González Beilfuss, Sra. C. Lima Marques y Sr. M. Pestman como del equipo de intérpretes, Sra. M. Misrahi, Sra. M. Rühl, Sr. P. Spitz, Sra. C. Hare y Sr. C. Lord.

29 El Convenio se examinó en dos Sesiones plenarias antes de ser aprobado por unanimidad el 28 de Mayo de 1993. La firma del Acta final que contenía el texto del Convenio tuvo lugar al día siguiente, el 29 de mayo de 1993, tras efectuarse algunas correcciones lingüísticas. La Conferencia diplomática celebró su Sesión de clausura en la Sala del Tribunal de Justicia del Palacio de la Paz.

TITULO DEL CONVENIO

30 El título sirve usualmente para dar una idea concisa de las cuestiones reguladas en un Convenio y suele mencionar únicamente a las de mayor importancia, en el presente caso, la protección del niño y la cooperación entre los Estados contratantes en materia de adopción internacional.

31 El título del proyecto fue modificado, puesto que la Conferencia diplomática decidió mencionar en primer lugar la protección del niño para poner de relieve su importancia como principal objeto del Convenio.

32 La denominación inglesa "intercountry adoption" fue aceptada sin dificultades, porque indica claramente las cuestiones reguladas por el Convenio y por su conformidad con el artículo 21 del Convenio de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño (en lo sucesivo CDN).

33 En cambio la expresión francesa "adoption transnationale" halló objeciones desde los inicios de los trabajos de la Comisión especial. Se señaló que la palabra "transnationale" se utiliza sobre todo en el derecho de las transacciones internacionales, y que no se ha utilizado en ningún Convenio multilateral sobre relaciones familiares.

34 En el Documento de trabajo núm. 6 Bélgica recordó que la misma dificultad surgió con ocasión de la elaboración del Convenio de La Haya sobre la adopción de 1965. Se tradujo la expresión "intercountry adoption" por "adoption sur le plan international". No obstante, no se consideró adecuada esta denominación para el presente Convenio puesto que éste no se refiere a todos los supuestos de adopción internacional, sino tan solo a una clase de la misma: la indicada en el art. 2, es decir, la adopción de un niño con residencia habitual en un Estado (el "Estado de origen") por cónyuges o por una persona con residencia habitual en otro Estado (el "Estado de recepción").

35 Se propusieron las siguientes soluciones: "adoption transfrontière" porque el procedimiento de adopción ultrapasa las fronteras geográficas de los Estados afectados; "adoption interétatique", porque las personas interesadas residen en distintos Estados, y "adoption internationale" siendo este último término el que halló mayor aceptación. Finalmente se aprobó esta última propuesta, puesto que, si bien no resulta enteramente satisfactoria, tiene a su favor la tradición y el que no exista una alternativa mejor.

PREAMBULO

Frase introductoria

36 El Preámbulo del Convenio es muy largo si lo comparamos con el de otros Convenios aprobados por la Conferencia de La Haya, pero desde el principio los expertos que participaron en las reuniones de la Comisión especial insistieron en la importancia del Preámbulo como guía para el interprete que aplique el Convenio a casos concretos. Esto explica porqué la Conferencia diplomática añadió dos párrafos al proyecto.

Primer párrafo

37 El primer párrafo es nuevo y fue aprobado por consenso, puesto que su finalidad es resaltar el papel de la familia en el mantenimiento, la educación y el desarrollo del niño. Se reconoce el derecho del niño a una familia en la que se forme y desarrolle su personalidad. La idea fue propuesta inicialmente por la delegación sueca y el *Committee for Cooperation within the Nordic Adoption and Parent Organizations* en sus comentarios al proyecto (Doc. Prel. núm. 8, p. 4) y fue recogida por Indonesia en el Documento de trabajo núm. 46 con la siguiente redacción: "Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión". Esta propuesta complementaba a la del Documento de trabajo núm. 15, presentado por Colombia, que proponía la siguiente redacción: "Recordando

que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe crecer en un medio familiar"; la misma idea se expresaba también en el Documento núm. 24, presentado por Austria, que decía lo siguiente: "Recordando que para el desarrollo armónico de su personalidad el niño debe crecer en un medio familiar".

Segundo párrafo

38 En el Documento de trabajo núm. 21 Defensa de los niños-internacional y el Servicio social internacional, firmemente convencidos de la importancia que hay que otorgar a la familia biológica tanto por razones psico-sociales como por razones jurídicas, propusieron el texto del segundo párrafo, que implícitamente subraya el carácter subsidiario de la adopción. La propuesta fue recogida por Indonesia en el Documento de trabajo núm. 46. Italia propuso que se añadiera: "cada Estado deberá adoptar las medidas adecuadas para que el niño pueda permanecer en su familia biológica" a fin de subrayar en el Preámbulo del Convenio la obligación de los Estados contratantes de hacer todo lo posible para mantener al niño en su familia biológica. Sin embargo, esta adición no fue aceptada.

39 La propuesta indonesia se aprobó por una amplia mayoría, a pesar de que algunos participantes la consideraron innecesaria, porque el principio de la subsidiariedad de la adopción internacional ya se consagra en el Artículo 4, apartado b) y el Preámbulo iba a ser demasiado largo y complejo si reproducía todos los principios enunciados en el Convenio de Naciones Unidas.

Tercer párrafo

40 El tercer párrafo del Preámbulo reproduce el texto del proyecto (primer párrafo del proyecto) y confirma las ideas expresadas en el art. 21 apartado b) CDN, en virtud del cual todos los Estados parte que reconocen o permiten el sistema de adopción "reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen".

41 Sin embargo, la formulación del tercer párrafo del Preámbulo no es literalmente idéntica, porque solamente se refiere a una de las posibilidades de cuidar del niño previstas en el art. 20.3 CDN: "entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores".

42 En este sentido conviene recordar que en segunda lectura Egipto presentó el Documento de trabajo núm. 124 que proponía que se añadiera un nuevo párrafo al Preámbulo

que dijera lo siguiente: "Recordando otras posibilidades y modalidades de protección del niño, tales como la colocación en hogares de guarda- la kafala consagrada por el derecho islámico y la necesidad de promover la cooperación internacional a tal efecto". Para apoyar esta propuesta el delegado egipcio hizo hincapié en la necesidad de una cooperación internacional en relación a formas de protección del niño distintas de la adopción, tales como la custodia, la colocación en hogares de guarda y la kafala mencionadas en la Declaración de Naciones Unidas de 3 de diciembre de 1986 sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y el bienestar de los niños, con especial referencia a la colocación en hogares de guarda y la adopción nacional e internacional, así como en el CDN. Puso de relieve, además, el hecho de que estas alternativas se reconocen en todo el mundo y, aunque resulten defectuosas en relación a la adopción plena, aseguran frecuentemente al niño las mismas ventajas sanitarias, sociales y educativas que la adopción. La consideración de tales alternativas en el Convenio permitiría también evitar el tráfico y los abusos así como asegurar la adecuada protección de los niños en los países en los que no se reconoce la adopción. No obstante, la propuesta egipcia no pudo ser considerada por falta de apoyos.

43 El tercer párrafo del Preámbulo, al referirse a la ventaja de dar a un niño una familia permanente no niega ni ignora otras posibilidades de protección del mismo. Tan solo subraya la importancia de una vida familiar permanente como la mejor alternativa al cuidado del niño por la familia de origen.

44 El tercer párrafo del Preámbulo indica de manera expresa que la adopción internacional es una de las formas de protección del niño y en este sentido hay que recordar que, de acuerdo con el art. 3 de la Declaración de Naciones Unidas de 3 de diciembre de 1986, "el interés prioritario del niño es ser cuidado por sus padres". El tercer párrafo del Preámbulo reproduce, por tanto, la idea expresada por el segundo párrafo del Preámbulo al insistir en la naturaleza subsidiaria de la adopción internacional, también puesta de relieve en el art. 4 apartado b del Convenio.

45 El tercer párrafo corrige el texto del proyecto, porque se refiere a "dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su Estado de origen" en lugar de a "un niño que no puede ser cuidado de una manera apropiada en su Estado de origen". Esta modificación había sido inicialmente solicitada, sin éxito, por Colombia en el Documento de trabajo núm. 2, que pretendía asegurar que el niño fuera siempre colocado en una familia antes que internado en una institución o en otro tipo de medio no familiar.

46 En segunda lectura el Documento de trabajo núm. 186 presentado por Bolivia y Colombia retomó esta cuestión para

señalar que el tercer párrafo no debería dar la impresión de que los Estado de origen no tienen capacidad para cuidar de sus niños; recordaron también que el derecho a una familia es un derecho fundamental del niño que ha de alcanzarse a través de la adopción internacional, si bien como solución alternativa y subsidiaria. Esta vez la propuesta fue aprobada por una clara mayoría, sin discusión de fondo. La idea que subyace a esta enmienda es que la colocación del niño en una familia, incluyendo la adopción internacional, es la mejor alternativa entre todas las formas de cuidado del niño y, en particular, ha de preferirse al internamiento en una institución. La nueva redacción refuerza los términos empleados en el Preámbulo que son idénticos en el proyecto y en el texto definitivo: "Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño". Se hace, por tanto, hincapié en los beneficios que para el niño pueden derivar de la adquisición de una familia adoptiva.

47 La modificación del tercer párrafo del Preámbulo y la introducción de los dos primeros párrafos son muy importantes para una adecuada interpretación del Convenio, en particular de su artículo 4. De hecho, dichas disposiciones confirman un principio fundamental expresado en la "Declaración" hecha por la Santa Sede a la Conferencia de La Haya, a saber, que "los niños no son individuos aislados sino que nacen y pertenecen a un determinado entorno. Sólo si ese entorno nativo no puede, de una u otra forma, proveer un mínimo de cuidados y educación, debería contemplarse la adopción. La posibilidad de proporcionar un mejor futuro desde el punto de vista material no es, en si misma, razón suficiente para recurrir a la adopción."

Cuarto párrafo

48 El cuarto párrafo del Preámbulo reproduce el texto del proyecto (segundo párrafo del Preámbulo) y repite las ideas expresadas por el art. 21, párrafo introductorio y por el art. 35 CDN que exige a los Estados parte "cuidar de que el interés superior del niño sea la consideración primordial" y "tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma".

49 La frase "el interés superior del niño debe ser la consideración primordial" demuestra claramente que deben considerarse también los intereses de otras personas, como por ejemplo, los de los padres biológicos o de los futuros padres adoptivos. Sin duda alguna sus intereses también merecen protección y por ello debe lograrse un equilibrio entre los intereses de todas las personas afectadas, tal como prevé el art. 3 párrafo 2 CDN: "Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en

cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas".

50 En este sentido han de recordarse las observaciones hechas por Grecia, según las cuales todas las adopciones realizadas al amparo del Convenio deben obedecer al "interés del niño" aunque las normas convencionales se refieran en algunas ocasiones al "interés superior del niño" y en otras a los "intereses del niño", creando la impresión de que se trata de dos conceptos distintos, el primero de mayor vigor que el segundo. Se señaló, asimismo, que una interpretación estricta de la palabra "superior" podría imposibilitar algunas adopciones satisfactorias, por lo cual, para evitar resultados indeseables, se debería interpretar como equivalente a los intereses "reales" o "verdaderos" del niño.

51 La mención en el cuarto párrafo del Preámbulo al respeto a "sus derechos fundamentales" se inspira en la propuesta aprobada por los Estados latinoamericanos en la reunión de Quito (Abril 1991, *supra* núm. 12), que se reproduce en el art. 1, apartado a, al establecer los objetivos del proyecto de Convenio. El apartado a del art.1 se corrigió añadiendo la frase " que le reconoce el Derecho internacional", pero el cuarto párrafo del Preámbulo se mantuvo inalterado. A pesar de la diferente formulación, el significado de ambas disposiciones es idéntico.

52 A pesar de la última parte de cuarto Párrafo, no hay que perder de vista que los objetivos principales del Convenio son el establecimiento de determinadas garantías para proteger al niño en caso de adopción internacional y la instauración de un sistema de cooperación entre los Estados parte para garantizar la observancia de dichas garantías. El Convenio no previene, por tanto, de manera directa, sino tan solo de forma indirecta, "la sustracción, la venta o el tráfico de niños" , tal y como se reitera en el apartado b del primer artículo. Se espera que la observancia de las reglas del Convenio evitará tales abusos.

53 Por este motivo la Comisión especial no aceptó la propuesta de denominar al Convenio de manera expresa "un instrumento contra las actividades ilícitas e irregulares en este ámbito". El tratado no regula ni los aspectos penales ni de los abusos sufridos por los niños ni otras actividades ilícitas o irregulares, que pueden ser muy variadas como el ocultamiento del estado civil o el recurso a las madres de alquiler, a las que se aludía al principio de los trabajos en el Documento preliminar núm. 1 (Núm. 80 y *supra*, nota 12) y en el Documento preliminar núm. 3 (Núm. 3, p. 21; *supra*, nota 13). Esto explica también el fracaso del Documento de trabajo núm. 73 presentado por Bielorusia y la Federación rusa, que proponían que se especificara en

el Preámbulo y en el artículo 1, apartado b que el Convenio también tiene como objetivo prevenir "la explotación del trabajo del niño y su utilización en investigaciones científicas, sin el consentimiento de las autoridades competentes del Estado en el que el niño reside habitualmente".

54 Hay que recordar que en la fase preparatoria del Convenio se contactó con la Organización internacional de la Policía criminal (Interpol) y que el Secretario general de dicha organización expuso su apoyo a un Convenio de este tipo, porque " el establecimiento de procedimientos internacionales estrictos de carácter civil y administrativa dificultaría que las personas utilizaran los cauces de la adopción internacional para traficar con niños o como tapadera para desplazar a niños de un país al otro". En dicha ocasión se estimó también que, en particular, el sistema de la autoridad central ofrecería la posibilidad denunciar las infracciones penales "al departamento correspondiente dando lugar a una cooperación policial o judicial, en caso de que fuera necesario" (Doc. Prel. núm. 5 de abril de 1991). Tras completarse el Convenio, la 62ª. Asamblea General de la Organización internacional de la Policía criminal (Interpol) tomó abiertamente partido por el Convenio (ver. *Post-Scriptum, infra* núm. 615).

Quinto párrafo

55 El quinto párrafo del Preámbulo reproduce el texto del proyecto (tercer párrafo del Preámbulo). Aunque no existe ninguna disposición expresa a tal efecto, hubo un consenso en torno a que el Convenio debía considerarse un instrumento internacional elaborado en virtud de la sugerencia del art. 21, apartado e, CDN que exige a los Estados parte "promover los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales".

56 El quinto párrafo del Preámbulo sólo alude de manera expresa al Convenio y a la Declaración de Naciones Unidas por su carácter universal y prescribe que se "tomen en consideración" los principios enunciados en ellos. Está, por tanto, claro que el Convenio no ha de reproducir todas sus disposiciones, aunque sean muy importantes, sino que ha de tomarlas como el punto de partida para la mejor regulación posible de las adopciones internacionales.

57 El quinto párrafo del Preámbulo prescribe, además, en términos generales que se "tomen en consideración" "los principios reconocidos por instrumentos internacionales". Aunque no se especifican, los trabajos preparatorios demuestran que la referencia es al Convenio de La Haya de adopción de 1965, al Convenio europeo de 24 de abril de 1967 sobre la adopción de niños y al Convenio

interamericano de 24 de mayo de 1984 sobre los conflictos de leyes en materia de adopción de menores.

58 A pesar de que al iniciarse los trabajos preparatorios hubo cierta oposición, se aprobó por consenso que los mentados instrumentos internacionales han de ser únicamente "tomados en consideración", lo que expresa un generalizado deseo de evitar conflictos entre este Convenio y otros Convenios actualmente en vigor entre los Estados contratantes.

CAPITULO I- AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO

59 El objeto del Convenio se definió por consenso en el primer artículo; desde los inicios de los trabajos se entendió que no se podían resolver todos los problemas relativos a los niños, por más importantes que éstos fueran. Por ello los objetivos a alcanzar se limitan al establecimiento de garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño, a la instauración de un sistema de cooperación entre los Estados y a asegurar el reconocimiento de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio en los Estados contratantes.

60 El Capítulo I regula también el ámbito de aplicación del Convenio, especificándose en el artículo 2 cuando se considera que una adopción es una adopción internacional y en el artículo 3 el momento del procedimiento en que el Convenio cesa de aplicarse por haber cumplido el niño dieciocho años durante dicho procedimiento.

Artículo primero

Apartado a

61 El apartado a reproduce el texto del proyecto (apartado a, artículo 1), con la adición de las palabras " que le reconoce el Derecho internacional" propuesta en el Documento de trabajo núm. 4, presentado por Suiza.

62 Esta enmienda pretendía determinar con mayor precisión los derechos fundamentales del niño sin limitarlos, al situarlos en el plano internacional, a los definidos por el CDN. Se intenta prevenir que se produzcan interpretaciones divergentes en los distintos Estados contratantes y evitar que el concepto de los derechos fundamentales del niño se circunscriba a los derechos reconocidos en las respectivas normas constitucionales. Aunque hubo acuerdo sobre el fondo, la propuesta se consideró algo vaga y para mayor claridad se sometió a

consideración la siguiente formulación: "que le reconoce el Derecho internacional en los instrumentos mencionados en el Preámbulo". La propuesta suiza se aprobó, sin embargo, por una amplia mayoría, a pesar de que no desaparecen todas las incertidumbres, salvo que se consideren fundamentales todos los derechos reconocidos al niño por el Derecho internacional.

63 El apartado a del artículo primero enuncia, por tanto, uno de los principales objetos del Convenio, esto es, el establecimiento de garantías para asegurar el interés superior del niño y el respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional. Esta idea se expresa también en el cuarto párrafo del Preámbulo, por lo cual las observaciones hechas en ese contexto son igualmente válidas aquí; en particular, que se ha de considerar al "interés superior del niño" como la consideración principal, si bien se habrán de tener en cuenta también los derechos de las demás personas implicadas en una adopción.

64 El establecimiento de determinadas garantías asegura, sin lugar a dudas, la protección del interés del niño, como principal consideración y el respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional. Todas las adopciones a las que se aplique el Convenio deben respetar estas exigencias. Por ello no basta que los Estados contratantes observen el principio de igualdad de trato entre las adopciones nacionales e internacionales, que es el mínimo previsto por el apartado c del art. 21 CDN que establece que los Estados parte "velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardas y normas equivalentes a las existentes respecto a la adopción en el país de origen".

Apartado b

65 El apartado b reproduce el texto del proyecto (apartado b, artículo 1) y pretende "instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes", lo que demuestra que el Convenio no pretende resolver todos los problemas que suscita la adopción internacional, en particular, no pretende determinar la ley aplicable a la constitución de la adopción o a sus efectos. Sin embargo, estas cuestiones de competencia se abordan de manera indirecta al distribuir responsabilidades entre el Estado de origen y el Estado de recepción.

66 El apartado b especifica que el sistema de cooperación establecido ha de asegurar el respeto a las garantías convencionales puesto que a través de las mismas se previene la sustracción, la venta y el tráfico de niños. Como esta idea se refleja también en el cuarto párrafo del Preámbulo las observaciones hechas al respecto son también

válidas aquí, especialmente que el Convenio no pretende combatir directa, sino indirectamente, estos abusos y otras actividades ilegales o ilícitas, por lo que la regulación de estas cuestiones se deja a otros instrumentos internacionales o a las legislaciones nacionales.

67 Por esta razón, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos elaboró un proyecto de Convenio sobre el tráfico internacional de menores, que fue aprobado en Oaxtepec, México, en octubre de 1993. Este proyecto será examinado por la Quinta Conferencia interamericana especializada en Derecho internacional privado que tendrá lugar en México en marzo de 1994.

Apartado c

68 El apartado c del artículo primero tiene como objeto "asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio". Se trata, sin lugar a dudas, de una cuestión muy importante en la vida cotidiana puesto que no tiene mucho sentido establecer garantías para la protección del niño e instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes si la decisión de adopción no se reconoce en el extranjero.

69 El apartado c ha de relacionarse con el artículo 23 que establece el principio del reconocimiento de pleno derecho de las adopciones constituidas de acuerdo con el Convenio. Está, por tanto, claro que el objeto del Convenio no es tan solo "promover" sino "asegurar" el reconocimiento de dichas adopciones.

Artículo 2

Párrafo 1

70 El primer párrafo reproduce el texto del proyecto (artículo 2) e incluye las palabras "se aplica" para poner de relieve el carácter vinculante del Convenio y resaltar que toda adopción internacional constituida en los Estados contratantes debe respetar las reglas convencionales. Se aceptó por consenso que únicamente el establecimiento de ese carácter vinculante permite que se cumplan algunos de los principales objetivos del Convenio, tales como la protección del interés superior del niño y el respeto a sus derechos fundamentales (apartado a del artículo 1), la prevención de abusos tales como el secuestro, la venta o el tráfico de niños y otras actividades ilegales o ilícitas respecto a los niños (apartado b del artículo 1) y el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio (apartado c del artículo 1).

71 El artículo 2 no tiene en cuenta la nacionalidad de las partes para determinar el ámbito de aplicación del Convenio, entre otras razones porque el Estado de la nacionalidad no está en condiciones de cumplir con muchas de las obligaciones impuestas por las reglas del Convenio, como puede ser, especialmente, la preparación de los informes requeridos por los artículos 15 y 16. No debería, sin embargo, olvidarse que, si bien la nacionalidad de las partes no debe erigirse en un obstáculo para las adopciones internacionales, puede ser uno de los elementos, junto a otras características personales, a tener en cuenta por el Estado de origen y el Estado de recepción antes de aceptar que se siga el procedimiento de adopción, de acuerdo con lo que establece el apartado c del artículo 17.

72 No obstante, el Documento de Trabajo núm. 124, presentado por Egipto en segunda lectura, propuso que se añadiera un nuevo artículo al Capítulo I con la siguiente redacción: "*Este Convenio no se aplicará a ciudadanos de Estados en los que se considere que la adopción es contraria al Derecho interno*". Al someterse a examen dicho texto fue enmendado en los siguientes términos: "*Este Convenio no se aplicará a ciudadanos de Estados en los que la adopción se considere contraria al orden público, salvo que la adopción internacional sea necesaria de acuerdo con el interés superior del niño*". El delegado de Egipto explicó que la propuesta se refería al supuesto de que el niño adoptado fuera ciudadano de un Estado que considerara que la adopción es contraria a su orden público y tuviera su residencia habitual en un Estado contratante que sí admitiera la adopción. La constitución de una adopción en tales circunstancias "podría causar al individuo graves perjuicios y colocarlo en una situación intolerable", porque el Estado de su nacionalidad podría continuar considerando al niño su nacional y no proporcionar información en relación a su persona "si se sintiera humillado por no habersele consultado en relación a la adopción". Además el Estado de la nacionalidad consideraría al niño responsable de la violación de sus leyes y a su regreso el niño se vería perjudicado en materias como la fiscal. Por ello, la fórmula propuesta se proponía conseguir un compromiso razonable, en la línea de la excepción de orden público en materia de reconocimiento de las adopciones extranjeras, puesto que seguiría existiendo la posibilidad de adoptar a niños ciudadanos, o bien de Estados que aunque no reconozcan la adopción no la consideraran contraria a su orden público, o bien de Estados que considerando la adopción contraria a su orden público estuvieran dispuestos a reconocerla en casos de necesidad. Esta propuesta no pudo, sin embargo, ser considerada por falta de apoyo, de acuerdo con lo dispuesto en las reglas de procedimiento.

73 Aunque el Convenio no toma en consideración de manera expresa la nacionalidad de las partes interesadas en la adopción, el artículo 2 se refiere a los Estados en los que residen el niño y los futuros padres adoptivos como

el "Estado de origen" y el "Estado de recepción", respectivamente. La expresión "Estado de origen" fue criticada porque puede inducir a confusión si se interpreta como "Estado de la nacionalidad". Sin embargo se mantuvo porque se consideró que su significado específico dentro del Convenio queda muy claro y no puede razonablemente suscitarse ningún malentendido.

74 El Salvador presentó el Documento de trabajo núm. 28 para especificar que el procedimiento de adopción debe necesariamente realizarse en el Estado de origen y propuso una modificación del artículo 2 en el sentido siguiente: "El Convenio se aplicará cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante (el Estado de origen) ha de desplazarse a otro Estado contratante después de haberse concluido el procedimiento legal de adopción en el Estado de origen por parte de cónyuges o una persona con residencia habitual en el Estado de recepción". No hubo, sin embargo, acuerdo en torno a la idea de que el interés del niño está mejor protegido cuando la adopción no puede constituirse más que en el Estado de origen, puesto que un número importante de países, por ej. en Asia, aceptan que la adopción tenga lugar en el Estado de recepción. Por otra parte, el Convenio no afecta a ley alguna del Estado de origen que exija que la adopción tenga lugar en ese Estado (artículo 28). Por esta razón el Convenio se aplica cualquiera que sea el lugar en el que se constituya la adopción, tanto si se trata del Estado de origen como si se trata del Estado de recepción. Consiguientemente el artículo 2 se refiere a los siguientes supuestos: (a) que la adopción se constituya, bien en el Estado de origen, bien en el Estado de recepción, antes del desplazamiento del niño al Estado de recepción; (b) que el niño sea desplazado al Estado de recepción y la adopción se realice, bien en el Estado de origen, bien en el Estado de recepción tras su llegada a este último Estado; y (c) que el niño sea trasladado al Estado de recepción en vista de su adopción, aunque no se produzca la adopción ni en el Estado de origen ni en el Estado de recepción.

75 El Convenio no regula un supuesto especial al que se refiere el Convenio interamericano de 1984 que dispone en su artículo 20: *"Cualquier Estado Parte podrá, en todo momento, declarar que esta Convención se aplica a las adopciones de menores con residencia habitual en él por personas que también tengan residencia habitual en el mismo Estado Parte, cuando, de las circunstancias del caso concreto, a juicio de la autoridad interviniente, resulte que el adoptante (o adoptantes) se proponga constituir domicilio en otro Estado Parte después de constituida la adopción"*. Aunque todos los elementos relevantes se conecten exclusivamente con una ley en el momento en el que la adopción tiene lugar, se consideró oportuna la introducción de esta disposición puesto que las reglas del Convenio pueden servir para la protección del interés superior del niño en el supuesto de que, posteriormente, la adopción se

transforme en una adopción internacional, para, por ejemplo, supervisar la adaptación del niño a su nueva familia.

76 En virtud del artículo 2, los futuros padres adoptivos deben tener su residencia habitual en el Estado de recepción cuando presentan una solicitud de adopción en virtud del artículo 14. Debe cumplirse, asimismo, la condición de que el niño resida en el Estado de origen cuando las autoridades centrales realicen las funciones prescritas en el artículo 16. Las reglas convencionales deberán, por tanto, observarse incluso en el caso de que posteriormente los futuros padres adoptivos o el niño establezcan su residencia habitual en otro Estado contratante.

77 El artículo 2 establece además como condición para la aplicación del Convenio que el niño y sus futuros padres adoptivos residan habitualmente en distintos Estados contratantes. El Convenio no se aplica, por tanto, al supuesto en el que el niño reside habitualmente en un Estado contratante y los futuros padres adoptivos residen habitualmente en un Estado no contratante y viceversa. Es irrelevante el hecho de que el Estado no contratante pase a ser un Estado contratante una vez constituida la adopción.

78 El Convenio no contiene regla alguna para determinar cuando se ha de considerar que el niño o los futuros padres adoptivos tienen su residencia habitual en un Estado contratante. No obstante, esta cuestión no se suscitará a menudo debido al carácter fáctico de la residencia habitual y, si se suscitara, la cuestión no creará grandes dificultades prácticas ya que, tal como establece el apartado c del artículo 17, es preciso el acuerdo de ambos Estados para la continuación de la adopción.

79 En la Comisión especial se discutió extensamente respecto a qué personas que pueden ser futuros padres adoptivos, en particular, sobre si el Convenio debe aplicarse a solicitudes de adopción presentadas por personas no casadas de diferente sexo que cohabitan de manera estable o por homosexuales o lesbianas que viven solos o en pareja. A pesar de que estos casos se examinaron a fondo, los problemas que suscitan pueden considerarse falsos problemas, puesto que el Estado de origen y el Estado de recepción colaboran desde el inicio del proceso y pueden finalizarlo en cualquier momento en virtud de, por ejemplo, las condiciones personales de los futuros padres adoptivos. Además, en caso de que dieran su consentimiento a este tipo particular de adopciones, los demás Estados contratantes podrían denegar el reconocimiento de tales adopciones por razones de orden público, tal como prevé el artículo 24.

80 Tratándose, sin embargo de una cuestión muy delicada, el artículo 2 del proyecto se limitó a aprobar

el planteamiento menos problemático consistente en contemplar tan sólo las adopciones por "cónyuges" (hombre y mujer) y por "una persona", casada o no. Adicionalmente, el Informe de la Comisión especial aclaró que el artículo 2 se refiere, en primer término, a los "cónyuges" puesto que se trata de un supuesto más frecuente que las adopciones constituidas a favor de "una persona", hombre o mujer, y no porque se considere que la adopción por una persona individual sea "anormal".

81 A pesar de los extensos debates en el seno de la Comisión especial, la cuestión volvió a suscitarse en la Conferencia diplomática. De hecho, el Documento de trabajo núm. 54 presentado por Corea, propuso la supresión de las palabras "cónyuges o por una persona" y su sustitución por "marido y mujer o una persona soltera", puesto que " dicha modificación se hace necesaria por motivos de claridad al haber países que han promulgado leyes permitiendo a los cónyuges ser del mismo sexo"; los términos "una persona" deben modificarse para " evitar los problemas creados por el hecho de que una persona casada adopte sin contar con el consentimiento de su marido o mujer". El tenor literal del proyecto permitiría además "que se utilizara el Convenio como vehículo para la legalización de los así denominadas acuerdos de " madres de alquiler", en virtud de los cuales la esposa adopta al hijo de su marido, un niño nacido de una mujer a la que se ha pagado para que se dejará inseminar por el marido.

82 La supresión de la palabra "persona" fue también defendida para precisar que, en principio, la adopción sólo debería tener lugar dentro de una familia, pero se señaló que dicha supresión no resolvería todos los problemas, porque en tal caso el Convenio no se aplicaría a las adopciones por homosexuales y los niños adoptados en tales circunstancias no se beneficiarían de las normas convencionales. Además, puede ocurrir que una pareja heterosexual adopte a un niño y tras el divorcio uno de los miembros de la misma forme una pareja con una persona de su mismo sexo. De hecho, la única solución sería prohibir la adopción por homosexuales, individualmente y en pareja, y establecer la revocación de la adopción si tras la constitución de una adopción "normal" se produjera un caso así. Todos estos problemas exceden el ámbito del Convenio y deberían ser resueltos por el Derecho interno de cada Estado contratante.

83 El Documento de trabajo núm. 15 presentado por Colombia propuso que se especificara que el término "cónyuges" se refiere a una pareja formada por un hombre y una mujer y que no puede aplicarse a una pareja de homosexuales. En este sentido se recordó que la palabra francesa "époux" se aplica únicamente a parejas heterosexuales, puesto que a las parejas homosexuales se las conoce como "partenariat" y que sucesivas adopciones individuales

pueden producir el resultado final de una adopción por parejas homosexuales.

84 A pesar de que la propuesta colombiana no prosperó, la idea que la inspiraba fue aceptada por consenso y se decidió que el Informe incluyera una declaración clara en tal sentido. En segunda lectura el delegado de la Santa Sede solicitó que el Informe reflejara que la Segunda Comisión había reconocido la importancia de la adopción por cónyuges como la forma más común de adopción internacional. Esta observación se apoya, sin duda alguna, en los párrafos 1º y 2º del Preámbulo, que se añadieron al proyecto para subrayar que la colocación en una familia es la primera de las prioridades. Dicha idea ya se expresaba en el primer párrafo del proyecto que pasó a ser el tercero del Preámbulo habida cuenta de que se modificó para resaltar el hecho de que en el Estado de origen no se encuentre una " familia adecuada" para cuidar al niño.

85 Las enmiendas al Preámbulo también ponen de relieve que, como decía la declaración de la Santa Sede a la Conferencia de La Haya, "la unión estable de la pareja es vital y esencial para la educación de los niños. La desgracia evidente que sufren los niños víctimas de matrimonios rotos y las dificultades análogas que se presentan a un elevado número de niños criados por progenitores solteros o parejas no casadas nos dan una señal clara en este sentido. No puede justificarse que los riesgos adicionales a los que se exponen los niños que no se crían en un ambiente familiar normal responden al interés superior del niño o, utilizando los términos del Convenio que examinamos, ha de entenderse que la colocación en una familia estable es inherente al interés superior del niño."

86 El primer párrafo del artículo 2 debe relacionarse con el artículo 26, párrafos 2 y 3, puesto que el Convenio no se aplica tan sólo a la constitución de la adopción, cuando el niño es trasladado del Estado de recepción a otro Estado contratante, sino también determina sus derechos como hijo adoptivo. Ocurre lo mismo con el Artículo 27, puesto que el ámbito de aplicación del Convenio también abarca la posible conversión de la adopción.

Párrafo 2

87 El artículo c del Documento preliminar núm. 4 que se presentó a la consideración de la Comisión especial definía "la adopción" a los efectos del Convenio como cualquier institución jurídica que cree un vínculo de filiación permanente de carácter social y jurídico . A pesar de la importancia de esta cuestión, no pudo alcanzarse ningún consenso en torno a la misma, puesto que determi-

nados participantes manifestaron que no era necesario definir un término cuyo significado ya era suficientemente claro. Otros señalaron que la adopción puede o no romper el vínculo de filiación en relación a los padres biológicos, según cual sea el contenido de la ley en vigor en los distintos países, e incluso si dicho vínculo se rompe no hay acuerdo en relación a las demás consecuencias de la adopción. La falta de consenso explica la ausencia de una definición en el proyecto de Convenio.

88 La cuestión fue nuevamente examinada en la Conferencia diplomática, donde se formularon distintas propuestas: (a) el Documento de trabajo núm. 7, presentado por los Estados Unidos proponía la adición de un segundo párrafo que dijera: " A los efectos del presente Convenio, por adopción se entiende cualquier procedimiento legal que termine de manera irrevocable el vínculo de filiación con los padres biológicos y que cree un vínculo de filiación con los padres adoptivos"; (b) el Documento de trabajo núm. 16, presentado por España proponía que se especificara que "a los efectos del presente Convenio la "adopción" se refiere al establecimiento de un vínculo de filiación entre el niño y los padres adoptivos y, en este caso, a la ruptura del vínculo de filiación entre el niño y su familia de origen"; y (c) el Documento de trabajo núm. 54, presentado por Corea, proponiendo el siguiente texto: " a los efectos del presente Convenio se entiende por adopción el acto jurídico que pone fin a todos los derechos y responsabilidades de los padres biológicos en relación al niño y que transfiere todos esos derechos y responsabilidades a los padres adoptivos".

89 El delegado de Corea explicó esta última propuesta en los siguientes términos: "La adopción de niños a través de las fronteras nacionales requiere la protección de su interés superior. Los niños se protegen de la mejor manera si sus nuevos padres adoptivos gozan de todos los derechos y responsabilidades necesarios para un correcto ejercicio de su papel de padres. Tanto psíquica como físicamente el elemento de la distancia presente en las adopciones a través de las fronteras nacionales requiere que el niño tenga un sentido de permanencia en la familia adoptiva. Eso no quiere decir que no puedan existir variaciones según las respectivas leyes nacionales. El Convenio debería respetar las variaciones corrientes, incluyendo restricciones en el uso de apellidos y en relación a los derechos sucesorios en respecto a la familia adoptiva. Dicho respeto no debe, no obstante, interferir en los objetivos del Convenio respecto a los niños de Estados de origen cuyas leyes autoricen adopciones plenas sin restricciones".

90 Hay que recordar además que desde los inicios de la Conferencia diplomática el delegado egipcio insistió en que se solucionaran los problemas que el proyecto de Convenio crea a países que, como Egipto, si bien no recono-

cen un sistema de adopción, tienen otros sistemas de protección de los niños, tales como la kafalah, la colocación familiar y la tutela. En su opinión, que no fue compartida por las demás delegaciones, la noción de adopción debía ser lo suficientemente amplia como para abarcar a dichas posibilidades.

91 Aunque algunos participantes se mostraron contrarios a una definición de "adopción", la gran mayoría estuvo "a favor de una definición muy amplia antes que de una definición limitada a la adopción plena". Por ello se prefirió adoptar una definición amplia de adopción y no establecer que han de romperse los vínculos de filiación preexistentes entre el niño y sus padres. Como consecuencia de ese concepto amplio, el artículo 27 regula la conversión de la adopción.

92 El Documento de trabajo núm. 13 presentado por Alemania propuso que se excluyeran del ámbito de aplicación del Convenio los casos en que los futuros padres adoptivos y el niño (a) sean parientes directos o colaterales hasta el [cuarto] grado o (b) posean la misma nacionalidad que el niño. La exclusión de la adopción entre parientes o dentro de la familia pretendía permitir la aplicación de reglas más flexibles, pero se defendió la aplicación del Convenio a todas las adopciones, porque nada garantiza que no se abuse de los niños con ocasión de adopciones en el seno de la familia. No obstante, el Convenio les dispensa un trato especial en relación a determinadas cuestiones: (a) el apartado c del artículo 26, admite la posibilidad de la ruptura del vínculo de filiación entre el niño y su padre y su madre, pero no con los demás miembros de la familia y (b) el artículo 29 exceptúa a la adopción entre familiares de la prohibición de contactos entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda del niño.

93 El texto propuesto por el Comité de redacción en segunda lectura (Doc. trab. núm. 179) fue criticado porque la versión inglesa ("*permanent parent-child relationship*") emplea la palabra "permanent" y va por tanto más allá que el texto francés. Sin embargo no se introdujeron cambios debido a las dificultades para traducir al inglés la expresión francesa "*lien de filiation*".

94 El segundo párrafo del artículo 2 clarifica que el Convenio se aplica a todas las adopciones que establecen un vínculo de filiación, sin tener en cuenta si el vínculo jurídico preexistente entre el niño y sus padres se rompe completamente (adopción plena) o tan sólo de manera parcial (adopción simple o limitada). El Convenio no se aplica, sin embargo, a las "adopciones" que son tan sólo de nombre son adopciones y que no establecen ningún vínculo de filiación.

Artículo 3

95 El artículo 3 establece cuáles son los niños a los que se aplica el Convenio, cuestión que dio lugar a opiniones divergentes en el seno de la Comisión especial. Algunos participantes mantuvieron que no debía haber una disposición específica sobre esta cuestión y que, como hace el Convenio interamericano, la decisión debería corresponder al Estado de origen, lo que permitiría a cada Estado contratante definir lo que entiende por "minoridad", pero se llegó al consenso general de fijar un límite de edad máximo para la aplicación del Convenio a fin de evitar ambigüedades e interpretaciones divergentes en torno a una cuestión de tal importancia. Como se había decidido seguir en la medida de lo posible los principios enunciados en el CDN se aceptó finalmente que la edad de dieciocho años determina cuando una persona cesa de ser menor. Esta cuestión no fue objeto de discusión en la Conferencia diplomática y por este motivo el artículo 3 del Convenio reproduce el texto del proyecto (artículo 3), que fijaba la edad de 18 años para determinar cuando una persona cesa de ser menor.

96 El artículo 3 solo pretende determinar el ámbito de aplicación del Convenio, es decir precisar a qué niños se aplican las reglas convencionales. No pretende establecer la edad máxima de un niño para poder ser adoptado. Esta última cuestión se refiere a la adoptabilidad del niño y sigue rigiéndose por la ley aplicable determinada a través de las normas de conflicto de cada Estado, al igual que todas las cuestiones de fondo relativas a la adopción. En consecuencia, si la ley aplicable tan sólo permite la adopción de niños de una edad menos avanzada, como doce años o menos de doce años, esta exigencia debe respetarse y la adopción no puede tener lugar, no obstante el artículo 3 del Convenio.

97 Además, la cuestión regulada por el artículo 3 ha de diferenciarse claramente del reconocimiento de la adopción. Esta distinción es muy importante y ha de tenerse en cuenta para evitar malentendidos. Una vez se han obtenido los acuerdos a los que se refiere el apartado c del artículo 17 antes de que el niño haya cumplido los dieciocho años, el reconocimiento se producirá automáticamente en virtud del artículo 23 si se han observado las reglas convencionales. No debe cuestionarse el hecho de que el niño haya cumplido los dieciocho años o porque la adopción se haya constituido después de haberse llegado a esta edad.

98 El artículo 3 del proyecto prescribía que el Convenio dejaba de aplicarse si el niño alcanzaba la edad de dieciocho años sin que se hubiera constituido una adopción en el Estado de origen o en el Estado de recep-

ción. No obstante, tanto en la Comisión especial (ver Informe preliminar, núm. 58), como en la Conferencia diplomática algunos participantes consideraron aconsejable que se extiendan en determinados casos los beneficios del Convenio, a pesar de que el niño haya alcanzado la edad de dieciocho años antes de la constitución de la adopción.

99 De hecho, el Documento de trabajo núm. 60, presentado por Uruguay, propuso una nueva redacción del artículo 3: " Se seguirá aplicando el Convenio si el niño alcanza la edad de dieciocho años tras su desplazamiento al Estado de recepción y antes de haber sido adoptado, bien en el Estado de origen, bien en el Estado de recepción". El Documento de trabajo núm. 166, presentado por Italia, propuso que se estableciera que se aplicará el Convenio "si el niño no ha alcanzado la edad de dieciocho años en el momento en el que las autoridades centrales de los Estados afectados han acordado que puede seguirse el procedimiento de adopción conforme a lo dispuesto en el art. 17 del Convenio ". Ambas propuestas pretenden facilitar la adopción internacional, porque no se consideró aceptable que tras el traslado al Estado de recepción, el niño no pueda ser protegido por el Convenio por la simple razón de haber alcanzado la edad de dieciocho años antes de que finalizara el procedimiento de adopción. Una amplia mayoría estuvo a favor de la propuesta italiana que se adoptó en el artículo 3, a pesar de que, como se señaló, permite que el niño sea mucho mayor de dieciocho años, es decir sea un adulto, en el momento en que el que sea adoptado.

100 El Documento de trabajo núm. 15 presentado infructuosamente por Colombia propuso la adición de un nuevo párrafo que estableciera: "No obstante, el Convenio también se aplicará si el o los futuros padres adoptivos hubieran asumido la guarda del menor antes de que hubiera alcanzado los dieciocho años ". Se trataba de extender la protección del Convenio a los casos en que el niño haya vivido con el padre que le adopta antes de cumplir dieciocho años.

CAPITULO II- CONDICIONES DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES

101 En el proyecto el Capítulo II se titulaba "Disposiciones fundamentales"; la Comisión especial había examinado y rechazado una eventual modificación de ese título (Informe de la Comisión especial núms. 61-65).

102 Bélgica suscitó, no obstante, nuevamente la cuestión en la Conferencia diplomática al presentar el Documento de trabajo núm. 36 proponiendo que se reemplazara por "Condiciones de la adopción". La propuesta fue modificada por la propia Bélgica en el Documento de trabajo núm. 133 proponiéndose la expresión : " Condiciones fundamenta-

les de las adopciones internacionales ". Según el delegado belga convenía evitar los malentendidos que podría generar el título adoptado en el proyecto, en primer lugar porque podría parecer que todas las disposiciones fundamentales se incluían en el Capítulo II, conclusión errónea, puesto que hay otras disposiciones "fundamentales" en otros capítulos y, en segundo término, porque podría dar la falsa impresión de que el Capítulo II es más importante que otros.

103 Sin embargo, la cuestión del título se pospuso hasta conocer el contenido de varios capítulos. El Comité de redacción presentó entonces el Documento de trabajo núm. 179 proponiendo la siguiente fórmula, "Condiciones de las adopciones internacionales", que fue aprobada sin ulteriores comentarios.

104 En virtud del artículo 1, apartado b, uno de los objetivos del Convenio es "instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños". El Convenio se estructura, por tanto, como un instrumento de cooperación y, a tales efectos, establece la distribución de responsabilidades entre los Estados más afectados por la adopción internacional, el Estado de origen y el Estado de recepción.

105 El artículo 4 determina las obligaciones del Estado de origen en relación a las condiciones de fondo que sus autoridades competentes deben verificar antes de constituir una adopción en virtud del Convenio, en relación a (a) la adoptabilidad del niño, (b) el respeto al principio de subsidiariedad, (c) los necesarios consentimientos de personas distintas al niño y (d) los deseos, opiniones y consentimientos del niño.

106 Las responsabilidades del Estado de recepción se enumeran en el artículo 5. Antes de constituirse una adopción conforme al Convenio sus autoridades competentes deben verificar que (a) los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar, (b) los futuros padres adoptivos han sido convenientemente asesorados y (c) se ha constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en su territorio.

107 El Documento de trabajo núm. 18 presentado por España propuso añadir un nuevo artículo al capítulo II con el siguiente texto: "Las Autoridades centrales del Estado de origen del niño y del Estado de recepción participarán en todas las acciones previstas por el presente Capítulo para asegurar la protección del niño y la realización de los demás objetivos del Convenio". Esta enmienda fue, sin embargo, retirada sin haber sido examinada.

Artículo 4

Frase introductoria

108 La frase introductoria reproduce, sin modificación alguna, el texto del proyecto (frase introductoria del artículo 5); el artículo 4 se incluye en el Capítulo II porque establece las condiciones que han de observarse en cualquier caso, sea cual sea el contenido de la ley aplicable. Conforme a la estructura del Convenio, este precepto define las responsabilidades que corresponden al Estado de origen, de forma que no podrá constituirse ninguna adopción en virtud del Convenio ni en el Estado de origen ni en el Estado de recepción hasta que las autoridades competentes del Estado de origen hayan verificado la observancia de condiciones específicas en relación a (a) la adoptabilidad del niño, (b) el respeto al principio de subsidiariedad, (c) la obtención de los consentimientos necesarios de personas distintas al niño, y (d) en su caso, los deseos, opiniones, consentimientos de niño. Estas condiciones representan garantías mínimas que no pueden descartarse, entendiéndose que el Estado contratante en el que tenga lugar la adopción puede exigir condiciones suplementarias para su constitución.

109 Las condiciones establecidas en el artículo 4 pretenden realizar uno de los principales objetivos del Convenio, enunciado en el apartado a del artículo primero y representa el mínimo necesario "para [garantizar] que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a [sus] derechos fundamentales".

110 La regulación establecida por el artículo 4 especifica los principios rectores del art. 21, apartado a CDN en virtud del cual los Estados parte "velarán por que la adopción del niño solo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario".

111 La verificación de las garantías establecidas por el artículo 4 no corresponde necesariamente a la Autoridad central prevista en el Capítulo II del Convenio si no a las "autoridades competentes" del Estado de origen. El Estado de origen es, por tanto, libre de determinar cuáles son las autoridades competentes; puede tratarse de autoridades administrativas, judiciales e incluso de la Autoridad central.

112 La frase introductoria del primer párrafo ha de ponerse en relación con el apartado c del artículo 36 para determinar cuál es la autoridad competente en el caso de que el Estado contratante tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

113 El artículo 4 solo establece unas garantías mínimas. Por consiguiente, como ya hemos dicho, tanto el Estado de origen como el Estado de recepción pueden imponer condiciones suplementarias, tal y como se deduce del primer párrafo del artículo 4 en relación al apartado a del artículo 17.

114 La cuestión de si cabe una nueva verificación por parte de las autoridades competentes del Estado de recepción, una vez las autoridades competentes del Estado de origen han verificado las condiciones prescritas por el artículo 4, será abordada *infra*, núms. 324-342 (art. 17). En virtud del apartado c del artículo 17 el Estado de recepción es libre de otorgar o denegar su acuerdo a que siga el procedimiento de adopción y, de esta forma, tiene la posibilidad, no de imponer al Estado de origen adopciones que no sean aceptables para ese Estado, sino de negar su cooperación en adopciones que no estén de acuerdo con sus propias reglas (incluyendo a sus normas de Derecho internacional privado) o de condicionar tal cooperación a que el Estado de origen respete sus reglas.

115 El lector del presente artículo debería tener presente asimismo el artículo 29, que, con carácter general, prohíbe los contactos personales entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño o cualquier otra persona que tenga la guarda del mismo hasta que no se respeten las disposiciones del artículo 4, apartados a-c y el artículo 5, apartado a.

Apartado a

116 El apartado a recoge el texto propuesto en el artículo 5, apartado a, del proyecto y subordina la constitución de la adopción a una decisión previa acerca de la adoptabilidad del niño, un requisito también previsto en el apartado a del artículo 21 CDN. Dicha disposición ha de ponerse en relación con el apartado b del artículo 16 que prescribe que el Informe que se prepare contenga información acerca de la adoptabilidad del niño.

117 Durante las reuniones de la Comisión especial muchos participantes criticaron la utilización del término "adoptable" que consideraron inadecuado porque sugiere la idea de "disponibilidad", como si el niño fuera una mercancía que los futuros padres adoptivos pudieran adquirir, y también porque se puede interpretar como referido únicamente a las condiciones legales de la adopción. Sin embargo

se mantuvo el término por la simple razón de que no se pudo hallar uno más adecuado. La expresión "necesitando una adopción" es menos adecuada porque el niño puede necesitar una adopción y no reunir las condiciones legales, y "libre para ser adoptado" no tiene en cuenta los distintos aspectos a examinar en relación a la constitución de la adopción, que se refieren, no solo a exigencias jurídicas, sino también a las características psico-sociales del niño.

118 A pesar de las exhaustivas discusiones en la Comisión especial, la cuestión volvió a suscitarse durante la Decimoséptima Sesión. El Documento de trabajo núm 21, presentado por Defensa de los niños-internacional y el Servicio social internacional, recordaba que el seminario regional celebrado en Manila en abril de 1992 sobre la "Protección de los derechos de los niños en las adopciones internacionales y la prevención del tráfico y la venta de niños" había solicitado que se reconsiderara la adecuación del término, puesto que "adoptable" tiene la connotación de "disponible" o "libre", lo que significaría que el niño se percibe como el objeto en lugar del sujeto de la adopción. Grecia hizo un comentario similar en segunda lectura al resaltar que el término "adoptable" ha de entenderse en sentido jurídico, es decir *prima facie* de acuerdo con lo dispuesto por la ley aplicable, y no en sentido fáctico, de manera que un niño puede necesitar una adopción sin ser adoptable por no reunir las condiciones legales. El texto aceptado por la Comisión especial se mantuvo, sin embargo, sin ulterior examen de la cuestión, por la misma razón, es decir, porque no se pudo encontrar un término mejor, después de que Alemania retiró su propuesta (Doc.trab. núm. 14) consistente en decir "puede ser adoptado", por las varias interpretaciones a las que puede dar lugar.

119 Las autoridades competentes del Estado de origen determinarán la adoptabilidad del niño de acuerdo tanto a los criterios de la ley aplicable como a factores psico-sociales y culturales. Esto se reconoció de manera expresa durante la discusión del Documento de trabajo núm. 49, presentado por Perú, que proponía la adición de las siguientes palabras. "de acuerdo con su ley nacional", porque la ley peruana requiere una declaración previa de abandono antes de que el niño pueda ser considerado "adoptable". La propuesta no prosperó puesto que el Estado de origen debe determinar la adoptabilidad de acuerdo a sus normas de conflicto, que pueden prever la aplicación de una ley distinta; se señaló, además, que la unificación de las normas de conflicto no era un objetivo del Convenio y que el artículo 2 no determina el ámbito de aplicación del Convenio en virtud de la nacionalidad sino de la residencia habitual.

Apartado b

120 El apartado b reproduce sin modificarlo el texto del artículo 5 apartado b del proyecto; confirma el principio de subsidiariedad de la adopción internacional ya enunciado en el tercer párrafo del Preámbulo, de manera que las observaciones hechas en dicho contexto son también válidas aquí (*supra*, núms. 40-47).

121 La cuestión de cómo determinar cuándo no es posible una adopción "interna" o "nacional" no se volvió a discutir durante la Decimoséptima Sesión y, en consecuencia, el Estado de origen es responsable de la observancia del principio de subsidiariedad que el Convenio consagra. El Documento de trabajo núm. 51, presentado por Polonia, propuso que se añadieran las palabras "y es admisible" al apartado b; la idea subyacente era que las condiciones de la adopción internacional pueden diferir de las requeridas para la adopción interna, pero, de acuerdo con las reglas de procedimiento, la propuesta no se tomó en consideración en segunda lectura por falta de apoyo.

122 La razón para confiar esta responsabilidad al Estado de origen radica en que usualmente el Estado de origen estará en mejor posición para determinar si no existe una solución "nacional" o "interna" para el niño del que se trate en un caso concreto. El Estado de recepción puede, no obstante, controlar tal determinación porque, de acuerdo con el apartado c del artículo 17 (*cfra. supra*, núm. 114), su Autoridad central tiene la facultad de aceptar o no que prosiga la adopción internacional.

123 Aunque se aceptó de manera expresa el principio de subsidiariedad, hubo consenso en torno a que el interés superior del niño puede en determinadas circunstancias recomendar que, aunque exista una familia en el Estado del niño, el niño sea colocado en vistas de una adopción internacional, por ejemplo, en el supuesto de que se trate de una adopción entre parientes o cuando el niño padezca alguna disminución que requiera cuidados especiales que no puedan ser dispensados en el Estado de origen.

124 De acuerdo con el apartado b del artículo 4, el principio de subsidiariedad de la adopción internacional debe tener en cuenta el interés superior del niño, un principio ya expresado en el cuarto párrafo del Preámbulo y en la apartado a del artículo 1. En este sentido hay que entender, como ya hemos señalado, que el interés superior del niño ha de ser la consideración primordial, de acuerdo con las directrices enunciadas por el artículo 21 primer párrafo del CDN que establece que "los Estados parte que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial".

Apartado c

125 El apartado c del artículo 4 desarrolla los principios enunciados en el apartado a del artículo 21 CDN, que impone a los Estados parte la obligación de asegurar que, en su caso, los padres, parientes y representantes legales "hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario".

126 Como lo hacía el proyecto, el Convenio regula de forma separada el consentimiento del niño y el de las demás personas que intervienen en la adopción. Por ello el apartado c del artículo 4 establece las garantías mínimas en relación al consentimiento de estas otras personas y el apartado d se refiere únicamente a los deseos, opiniones y/o el consentimiento del niño. Ello implica la existencia de ciertas repeticiones que no crean perjuicio alguno y, en cambio, pueden evitar malentendidos.

127 El Convenio también diferencia entre los consentimientos requeridos para la adopción, que han de obtenerse en nombre del niño de personas, instituciones y autoridades, y que se regulan en el artículo 4, y el acuerdo de los futuros padres adoptivos al que se refiere el artículo 17, que no puede ser calificado de consentimiento en términos estrictamente jurídicos.

128 El apartado c del artículo 4 ha de ponerse en relación con la Decisión adoptada por la Decimoséptima Sesión de la Conferencia de La Haya expresando el deseo de que los expertos que participen en la primera reunión de la Comisión especial convocada en virtud del artículo 42 del Convenio, establezcan formularios modelo para la expresión de los consentimientos previstos en el apartado c del artículo 4 (así como para los certificados previstos por el artículo 23, párrafo 1) a fin de favorecer la aplicación correcta y uniforme de estas disposiciones.

Apartado c 1)

129 La ley aplicable determina las personas cuyo consentimiento es necesario en nombre del niño: usualmente se trata tanto de los padres biológicos del niño como de sus parientes y representantes legales, con la intervención de las autoridades competentes, si así se requiere.

130 De acuerdo al apartado c (1) los consentimientos deben otorgarse después de un asesoramiento adecuado y para facilitar la realización de tal condición el apartado c del artículo 9 establece que las Autoridades centrales de los Estados contratantes habrán de tomar, directamente o a través de autoridades públicas u otros organismos acreditados en sus Estados todas las medidas adecuadas para, en

particular, "promover el desarrollo de servicios de asesoramiento en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones".

131 El apartado c (1) emplea el adverbio "convenientemente" puesto que el asesoramiento previo no tiene que producirse siempre, por ejemplo, en el caso de que intervengan instituciones o autoridades, que se supone no lo necesitan.

132 Los consentimientos requeridos (independientemente de las instituciones y autoridades) a los que se refiere el apartado c (1) se expresarán de ordinario en términos generales, puesto que estas personas no conocerán, salvo en los casos de adopciones entre familiares, a los futuros padres adoptivos (Vease el artículo 29 prohibiendo los contactos personales entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda de éste).

133 La última frase del apartado c 1) contiene una modificación sustancial del artículo 5 c) (i) del proyecto, que requería asesoramientos e información no sólo en relación "a las consecuencias de su consentimiento" sino también acerca de la adopción misma, mientras que el apartado c (v) del Proyecto preveía la verificación de que "los consentimientos se hubieran dado con el pleno conocimiento de los efectos de la adopción en el Estado de recepción". Como explicaba el Informe de la Comisión especial, esta condición era inadecuada por varias razones: (a) en el momento en el que se otorgan los consentimientos, no se sabe todavía cuál va a ser el Estado de recepción; (b) el proyecto no regulaba cuál era la ley aplicable a los efectos de la adopción; (c) un asesoramiento e información completa y detallada en relación a las consecuencias de la adopción supondría impartir un curso, siquiera breve, sobre la adopción que el ciudadano medio no estaría en condiciones de entender; y d) sería imposible asesorar e informar sobre los eventuales cambios de la ley del Estado de recepción, caso de que éste fuera conocido.

134 El Documento de trabajo núm. 11 presentado por Bélgica, Irlanda y Suiza insistió en los inconvenientes de la solución del Proyecto y propuso que no se exigiera un asesoramiento e información en torno a los efectos de la adopción sino tan sólo "en particular acerca de si el consentimiento implica la ruptura de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen". Los autores de esta enmienda resaltaron que se trata de la cuestión de mayor importancia que ha de ser objeto de asesoramiento e información antes del otorgamiento del consentimiento, puesto que en Derecho comparado existen tres posibles relaciones: (a) Estados que, como Ruanda, mantienen tales vínculos a pesar de la adopción; (b) otros Estados, como Nicaragua, en los que la adopción implica necesariamente la ruptura de los vínculos jurídicos entre el niño y su

familia de origen; y (c) la gran mayoría de los Estados que, como Bélgica, Rumanía y Chile, admiten varias clases de adopción, en función de si se produce el mantenimiento o la ruptura de dichos vínculos jurídicos. El Documento de trabajo núm. 11 concluía diciendo que el asesoramiento y la información sólo podrían otorgarse en relación a la ley del Estado de origen y respecto a los efectos genéricos y no a las consecuencias particulares de la adopción, es decir a la eventual transmisión del derecho de custodia, a los derechos sucesorios del niño adoptado en relación a los padres adoptivos, al posible cambio de nombre, a sus eventuales derechos a la percepción de prestaciones de la Seguridad social en el Estado de recepción, etc.

135 Hubo consenso en torno a que el Convenio no debía contener una norma de conflicto sobre los efectos de la adopción y, por esta razón, se suprimió el artículo 5 c) (v) del proyecto, puesto que sometía dichos efectos a la ley del Estado de recepción.

136 Se decidió también que el asesoramiento y la información no debía referirse a todas las consecuencias que, en definitiva, tiene el consentimiento otorgado, puesto que, como observó la delegación suiza, tal requisito sería "ilusorio e impracticable", sino tan solo a las consecuencias consideradas más importantes.

137 Por ello, de acuerdo con lo que proponía el Documento de trabajo núm. 11, el apartado c) (1) tan sólo establece expresamente que el asesoramiento y la información han de referirse a si la adopción supone "el mantenimiento o la ruptura...de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen". En caso de una adopción entre parientes convendrá precisar que la ruptura de los vínculos jurídicos se producirá únicamente respecto al padre y a la madre del niño, pero no en relación a otros parientes. Si las personas, cuyo consentimiento es necesario, tienen en mente una adopción que mantiene vínculos jurídicos permanentes, la adopción no puede comportar su ruptura, puesto que ésto supondría la violación de una de las condiciones fundamentales para que una adopción tenga lugar.

138 El asesoramiento y la información han de tener por objeto explicar a aquellos, cuyo consentimiento es necesario, cuáles son los efectos de la adopción, de acuerdo con el artículo 26 del Convenio, y la posibilidad de conversión prevista por el artículo 27. Puede también ser aconsejable hacer referencia a la posible revocación y nulidad de la adopción.

139 El apartado c) 1) ha de relacionarse con el artículo 16 apartado c), que requiere que la Autoridad central del Estado de origen, una vez se ha asegurado de que el niño es adoptable, vele por que los consentimientos hayan sido otorgado de acuerdo al artículo 4. Debería ponerse en relación también con el artículo 29, porque la

obtención de los consentimientos es una de las condiciones que han de cumplirse antes de que se permitan los contactos entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño o cualquier otra persona que tenga la guarda del mismo.

Apartado c (2)

140 El apartado c 2) reproduce sustancialmente el texto del proyecto (artículo 5 c) (ii)) y establece determinadas condiciones que necesariamente han de cumplirse, sean cuales sean las prescripciones de la ley aplicable, para que el consentimiento dado a la adopción sea válido. Se introdujeron, no obstante, algunas enmiendas para clarificar su sentido, la primera de tipo lingüístico porque la palabra "ellas" inicial fue sustituida en la ceremonia de clausura de la Conferencia diplomática por la expresión "tales personas, instituciones y autoridades".

141 El proyecto requería que "ellas hubieran dado su consentimiento de forma libre e incondicional". El consentimiento debía por tanto ser libre y no estar afectado por ningún vicio, por ejemplo por fraude, falsa representación, dolo, coacciones o error. El apartado c (3) es una regla material establecida por el Convenio que ha de ser observada por todos los Estados parte. Todas las demás cuestiones relativas a la validez de los consentimientos otorgados se determinan a través de las normas de conflicto del Estado de origen, puesto que no se consideró adecuado que el Convenio estableciera muchas reglas materiales.

142 El Documento de trabajo núm. 71 presentado por Bielorrusia propuso infructuosamente que se exigiera de forma expresa que los consentimientos no se obtuvieran bajo amenazas o violencia a fin de evitar vicios en los consentimientos otorgados. A pesar de que todo el mundo estuvo de acuerdo en cuanto al fondo se consideró superflua tal propuesta dada la existencia de un principio general del Derecho que establece que el consentimiento afectado por un vicio no genera ninguna obligación.

143 El apartado c (ii) del proyecto requería asimismo que el consentimiento fuera incondicional, es decir que no estuviera sometido a ningún tipo de condición y que, consiguientemente, no dependiera de un acontecimiento futuro de carácter incierto. Sin embargo, el Documento de trabajo núm. 8, presentado por los Estados Unidos de América, puso de manifiesto que existen circunstancias en las que el Estado de origen puede considerar adecuada y autorizar la imposición de ciertas condiciones en relación a los padres adoptivos, por ejemplo, que el niño sea adoptado por una familia de la misma religión, caso al que también hacía referencia el Documento de trabajo núm. 40 presentado por Irlanda. Los Estados Unidos propusieron que se suprimiera la palabra "incondicional" y que se utilizara

el término "voluntario" en lugar de "libre" para calificar al consentimiento. La propuesta se aceptó por consenso, pero el término "voluntario" no fue finalmente considerado adecuado, puesto que no significa lo mismo que la expresión francesa "libre". Finalmente se retuvo la expresión "freely" ("librement" en francés).

144 El proyecto exigía que el consentimiento se otorgara "por escrito". En la Decimoséptima Sesión se criticó esta condición, porque se podía malinterpretar en los supuestos de personas analfabetas, una situación muy frecuente en muchos de los Estados de origen, como subrayaron en diversas ocasiones delegados de distintas zonas geográficas. El Documento de trabajo núm. 49, presentado por Perú, llamaba la atención sobre "el alto porcentaje de personas que son analfabetas y que sólo pueden otorgar su consentimiento de forma verbal" y, en segunda lectura, el delegado de Nepal también llamó la atención de la Comisión acerca de que "las tasas de alfabetización de ciertos Estados son muy bajas".

145 Muchos participantes estimaron que se trataba de un falso problema, porque la objeción se basaba en la confusión de dos cuestiones de distinta naturaleza: la expresión del consentimiento ante la autoridad competente, que puede ser escrita u oral, y la prueba de dicho consentimiento que ha de ser consignada por escrito a pesar de haberse expresado oralmente. Sin embargo, en aras de la claridad y para evitar malentendidos, se sustituyeron las palabras "por escrito" por la expresión "ha sido dado o constatado por escrito".

146 El Documento de trabajo núm. 190, presentado por el Reino Unido en segunda lectura, propuso que las palabras "en la forma legalmente prevista" se sustituyeran por "en la forma requerida" a fin de proporcionar una mayor flexibilidad, no sometiendo el consentimiento a una forma prescrita. A pesar de que Alemania observó que la ausencia de forma también constituye una forma, la delegación suiza recordó que, de acuerdo con el artículo 4 c) (2), la forma escrita es obligatoria (al menos en relación a la prueba del consentimiento). La propuesta del Reino Unido no se consideró por falta de apoyo.

Apartado c (3)

147 El apartado c (3) reproduce el texto del proyecto (artículo 5 (c) (iii)), que requiere que los consentimientos "no se han obtenido mediante pago o compensación de clase alguna".

148 El artículo 5 (c) (iii) del proyecto también requería que los consentimientos otorgados "fueran irrevocables", condición ésta que algunos participantes conside-

raron inadecuada. De hecho, los Documentos de trabajo núm. 22 y 25, presentados, respectivamente, por el Reino Unido y Australia, propusieron que se añadieran las palabras "conforme a la ley del Estado de origen", pero la propuesta no prosperó puesto que se hubiera podido interpretar, de manera errónea, como referencia a la ley aplicable, lo que excedería el ámbito del Convenio. Suecia presentó el Documento de trabajo núm. 26, que mantenía que no permitir a los padres biológicos revocar su consentimiento en tanto no se haya constituido la adopción sería contrario a sus derechos fundamentales, si bien admitía que la posibilidad de tal revocación no debía ser determinada por el Convenio, sino por la ley aplicable.

149 El Documento de trabajo núm. 40, presentado por Irlanda, proponía que las palabras "fueran irrevocables" se sustituyeran por la expresión "no han sido revocados", puesto que en determinados países el consentimiento a la adopción sólo pasa a ser irrevocable cuando se produce la decisión de constitución de la adopción. Esta propuesta fue aceptada y el apartado c 3) se modificó en dicho sentido.

150 La enmienda al apartado c (3) no establece cuál es la ley aplicable a la eventual revocación de la adopción. Esta cuestión ha de ser resuelta de acuerdo con las normas de conflicto del Estado de origen.

151 La condición establecida en la apartado c (3) se estipula igualmente en la apartado d (3) en relación al consentimiento del niño y ha de ser puesta en relación con el artículo 32, párrafo 1, que, de forma general, prohíbe que se obtengan beneficios materiales indebidos a partir de una intervención relativa a una adopción internacional. Por tanto, la adopción no debe tampoco generar ningún beneficio material distinto a un pago o contrapartida de cualquier tipo.

152 El apartado c (3) ha de relacionarse con los artículo 16, apartado c y 29, por las razones expuestas *supra*, núm. 139, puesto que la Autoridad central del Estado de origen, una vez ha comprobado que el niño es adoptable, ha de asegurarse de que los consentimientos se han obtenido de acuerdo con el artículo 4 y también con el Artículo 29. Ésta es una de las condiciones que han de cumplirse antes de que se permitan los contactos entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otra persona que tenga la guarda de éste.

Apartado c (4)

153 El apartado c (4) reproduce el texto del proyecto (artículo 5 (c) (iv)) y representa un compromiso alcanzado en la Comisión especial tras una largo debate acerca del momento en el que se han de otorgar los consentimientos

necesarios para la adopción, en especial en el caso de la madre. Algunas opiniones iban en el sentido de que la ley aplicable ha de decidir acerca de la validez de los consentimientos antes del nacimiento de niño y su posible revocación, pero una amplia mayoría quiso evitar los abusos en relación a las madres solteras, garantizar la seriedad de su consentimiento, y asegurar que se tomen medidas para prevenir que las madres tomen decisiones precipitadas por causa del estrés, la ansiedad y las presiones ejercidas sobre ellas, exigiendo que el consentimiento se otorgue después del nacimiento del niño.

154 El Documento de trabajo núm. 17, presentado por España, proponía que, cuando fuera necesario, el consentimiento de la madre se otorgara " después de haber transcurrido al menos treinta días desde el nacimiento del niño". El Documento de trabajo núm. 41, presentado por Italia, permitía que el consentimiento de la madre se otorgara antes del nacimiento del niño, pero requería su confirmación posterior. No obstante, ninguna de dichas propuestas prosperó. Se señaló que el texto del proyecto representaba un compromiso y que una solución flexible sería mejor que una exigencia rígida, puesto que hay que tener en cuenta las diferencias culturales, sociológicas y psicológicas que indudablemente pueden tener repercusiones en relación al tiempo recomendable para aceptar la revocación del consentimiento otorgado por la madre. De ahí que se mantuviera la solución aceptada en el proyecto, por lo cual la ley aplicable determinada por las normas de conflicto del Estado de origen determinará el periodo posterior al nacimiento del niño durante el cual es posible revocar el consentimiento materno.

155 Las palabras "cuando sea exigido" se refieren a los casos en los que no es necesario el consentimiento de la madre para la validez de la adopción, por ejemplo, por haber fallecido, porque se han suspendido sus derechos parentales o porque la autoridad competente ha declarado que el niño ha sido abandonado.

Apartado d

Frase introductoria

156 La frase introductoria del apartado d reproduce el texto del proyecto (frase introductoria del artículo 5 d) que pretendía desarrollar los principios del artículo 12 CDN. La obligación de verificar los deseos, opiniones y el consentimiento del niño se regula, por tanto, en un apartado distinto al que se ocupa del consentimiento que, para que la adopción sea válida, ha de obtenerse de otras personas, instituciones y autoridades. Se especifica además que, para cumplir con dicha obligación, las autoridades competentes del Estado de origen han de tener en cuenta "la edad y grado de madurez del niño".

157 En la Comisión especial algunos participantes propusieron que se fijara un límite de edad, tal y como establecen ciertas leyes nacionales en relación a la participación obligatoria del niño en los procesos judiciales y administrativos que afecten a su futuro. Se aprobó, sin embargo, una formulación más amplia y flexible que no determina cuál debe ser la edad del niño para que sea oído y sus deseos, opiniones y consentimientos sean tenidos en cuenta, sino que deja dicha decisión a las autoridades competentes del Estado de origen.

158 El Documento de trabajo núm. 17, presentado por España, proponía que se exigiera el consentimiento de los niños mayores de doce años, pero esta propuesta no prosperó, porque se consideró más realista una fórmula más flexible que además se correspondía en mayor grado con el art. 12 (1) CDN.

Apartado d (1)

159 El apartado *d (1)* repite el texto del proyecto (artículo 5 (d) i). Reproduce sustancialmente el requisito prescrito por el artículo c (1) en relación a las personas, instituciones y autoridades, cuyo consentimiento es necesario para la adopción y, por este motivo, los comentarios hechos en ese contexto valen también aquí.

160 Conviene, sin embargo, observar que el apartado *d (1)* mantiene la redacción del proyecto y requiere un asesoramiento y una información convenientes acerca de las "consecuencias de la adopción", a pesar del hecho de que esta condición se rechazara en el apartado c (1) debido a la imposibilidad o las dificultades prácticas que el cumplimiento de dicho requisito crearía. A pesar del mantenimiento de la redacción original, el apartado *d (1)* ha de interpretarse de la misma forma que el apartado c (1), es decir, que los consentimientos e informaciones deben versar acerca de los efectos previstos en el artículo 26, apartados a y b, y también sobre si la adopción significa o no la ruptura del vínculo jurídico preexistente entre el niño y su padre y madre y, en su caso, con la familia, tal y como menciona el apartado c de éste mismo artículo, y acerca de la posibilidad de conversión prevista en el artículo 27.

161 Como hemos visto, el consentimiento del niño, atendiendo a su edad y madurez, debe referirse no a la adopción en general sino a una adopción específica, puesto que sería contrario a sus derechos fundamentales que el niño fuera adoptado sin ni siquiera saber quienes van a ser sus padres adoptivos.

162 El apartado *d (1)* sólo impone que se obtenga el consentimiento del niño " cuando éste sea necesario". Será,

por tanto, la ley aplicable la que determinará cuáles son los casos en los que ha de obtenerse dicho consentimiento.

163 El apartado *d* (1) ha de ponerse en relación con el artículo 16, apartado *c*, que prevé que, una vez la Autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que el niño es adoptable, ha de velar por que se hayan obtenido los consentimientos previstos en el artículo 4.

Apartado d (2)

164 El apartado *d* (2) reproduce el texto del proyecto (artículo 5 (d) (ii) y prescribe que, a pesar de que no se exija en todos los casos el consentimiento del niño, la autoridad competente del Estado de origen ha de tomar en consideración "los deseos y opiniones del niño", entendiéndose que no es suficiente permitir que el niño se exprese, sino que han de tenerse en cuenta tales deseos y opiniones.

165 Cuando se discutió esta cuestión en la Comisión especial, se observó que el apartado *d* (2) no era tan explícito como los artículos 12 y 13 CDN, que establecen la libertad de opinión y expresión del niño. Se decidió, no obstante, que el Convenio se limitara a regular las cuestiones de Derecho material más esenciales, dejando las demás a la ley aplicable.

166 El apartado *d* (2) ha de ponerse en relación con el artículo 16, apartado *c*, por las razones apuntadas supra, núm. 163.

Apartado d (3)

167 El apartado *d* (3) reproduce la primera parte del artículo 5 (d) (iii) del proyecto, con algunas enmiendas similares a los cambios introducidos en relación al artículo 4 (c) (2). Por consiguiente, y por idénticas razones, no se exige que el consentimiento sea incondicional, sino que ha de otorgarse libremente y ha de haberse "dado o constatado" por escrito.

168 El apartado *d* (3) ha de ponerse en relación con el artículo 16, apartado *c*, por las razones apuntadas supra, núm. 163.

Apartado d (4)

169 La apartado *d* (4) reproduce sin modificaciones la última frase del artículo 5 (d) (iii) del proyecto, porque se consideró aconsejable tener una disposición separada sobre esta cuestión específica.

170 La misma condición figura en el apartado c (3) en relación a las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento es necesario para la adopción; estas disposiciones han de ponerse en relación con el artículo 32, párrafo 1 que establece una prohibición general de obtener beneficios materiales indebidos como consecuencia de una intervención relacionada a una adopción internacional. Por lo tanto, los consentimientos no han de haber sido inducidos por ningún beneficio material distinto al pago o compensación.

171 Aunque no se diga expresamente, ha de entenderse que los consentimientos otorgados no han sido revocados, tal y como estipula de manera expresa el artículo 4 (c) (3).

172 El apartado d (4) ha de ponerse en relación con el artículo 16, apartado c, por las razones expresadas supra, núm. 163.

Artículo 5

Frase introductoria

173 De acuerdo con el sistema de cooperación y distribución de la responsabilidad previsto por el Convenio, el artículo 5 enuncia las obligaciones del Estado de recepción anteriores a que tenga lugar una adopción de acuerdo con el Convenio. Consiguientemente, las autoridades competentes del Estado de recepción han de verificar que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar, que los futuros padres adoptivos han sido convenientemente asesorados y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en dicho Estado.

174 La frase introductoria del artículo 5 reproduce el texto del proyecto con una única modificación por lo que respecta a las últimas palabras ("han determinado") que fueron suprimidas para tener en cuenta, desde el punto de vista lingüístico, la inclusión del nuevo apartado b.

175 Las condiciones establecidas en el artículo 5 han de cumplirse de forma acumulativa, pero se ha de tener presente que se trata tan solo de unas garantías mínimas y que, por ese motivo, el Estado de recepción es libre de imponer la verificación de condiciones suplementarias.

176 De acuerdo con el artículo 5, la verificación ha de ser realizada por las "autoridades competentes". Corresponde, por tanto, al Estado de recepción determinar cuáles son esas autoridades, que pueden ser judiciales o administrativas, o incluso la Autoridad central prevista en el Capítulo III del Convenio.

177 El artículo 5 ha de relacionarse con el artículo 36 apartado c, para determinar a las autoridades competentes en caso de que un Estado contratante tenga en materia de adopción dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

178 El Documento de trabajo núm. 19, presentado por España, propuso la inclusión de un nuevo artículo con la siguiente redacción: "A los fines de los artículos 6 y 7 (del proyecto de Convenio) se considerará a los cónsules autoridades competentes del Estado de recepción, siempre que su intervención no haya sido prohibida por el Estado de origen". La propuesta responde a las reglas del Derecho interno español así como al artículo 5 f del Convenio de Viena de relaciones consulares. Sin embargo, la propuesta no prosperó porque se consideró que era inadecuado profundizar en la cuestión de qué autoridades han de considerarse autoridades competentes.

179 El Documento de trabajo núm. 149, presentado por Bélgica, España y Suiza, propuso que se incluyera una condición adicional para el caso de que la adopción se constituyera en el Estado de origen, consistente en que se hubieran cumplido los requisitos previstos para la colocación del niño con sus futuros padres adoptivos, lo que significaría la necesidad del acuerdo de ambos Estados en relación a la colocación del niño. A pesar de que dicha propuesta no fue formalmente aprobada, la idea que la inspiraba reaparece en el artículo 17 del Convenio.

Apartado a

180 El apartado a repite el texto del proyecto (artículo 6, apartado a) y ha de relacionarse con el artículo 15, primer párrafo. Establece que las autoridades competentes del Estado de recepción han de determinar que los futuros padres adoptivos cumplen con dos tipos de condiciones: (a) que son adecuados, es decir, que cumplen todas las condiciones jurídicas de la adopción; y (b) que son aptos, es decir que poseen las cualidades socio-psicológicas necesarias.

181 Las autoridades competentes del Estado de origen pueden, sin embargo, proceder a esta verificación antes de consentir respecto a la continuación del procedimiento de adopción, de acuerdo con lo previsto en el apartado c del artículo 17.

182 El apartado a ha de relacionarse con el artículo 29 que prohíbe, con carácter general, los contactos personales entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda del mismo hasta que se hayan cumplido los requisitos del artículo 4, apartados a- c, y del artículo 5, apartado a.

Apartado b

183 El apartado b se corresponde con el requisito establecido por la primera frase del artículo 4 (c) (1) y se incluyó en el artículo 5, porque se trata de una tarea que se puede realizar con mayor facilidad en el Estado de recepción, donde tienen su residencia habitual los futuros padres adoptivos. Ha de tenerse presente, sin embargo, que las autoridades competentes del Estado de origen han de verificar, de acuerdo con el apartado a del artículo 17, el acuerdo de los futuros padres adoptivos a la adopción.

184 El apartado b exige que se asesore convenientemente a los futuros padres adoptivos. Para facilitar el cumplimiento de dicha condición, el artículo 9, apartado c, prescribe que las Autoridades centrales de los Estados contratantes tomen, directamente o a través de autoridades públicas u otros organismos acreditados en sus Estados, las medidas adecuadas, en particular, para "promover en sus respectivos Estados el desarrollo de servicios de asesoramiento en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones."

Apartado c

185 El apartado c reproduce el texto del proyecto (artículo 6, apartado b) y ha de ponerse en relación con el artículo 18, que establece que las Autoridades centrales de ambos Estados tomarán las medidas necesarias para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen así como de entrada y residencia permanente en el Estado de recepción.

186 El apartado c define una condición material de la adopción y la idea que lo inspira fue aceptada por consenso. No tiene, efectivamente, ningún sentido que se constituya la adopción, si no se permite al niño entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción, donde los futuros padres adoptivos tienen su residencia habitual. El artículo 18 se explica por la misma razón.

187 Generalmente, la familia adoptiva se instalará en el mismo Estado en el que los futuros padres tenían su residencia habitual cuando iniciaron el procedimiento de adopción, pero si en el interim se trasladan a otro Estado contratante parece que hay que considerar que a los efectos del apartado c este último país ha de ser considerado Estado de recepción.

188 La fórmula "que el niño ha sido o será autorizado" es lo suficientemente amplia como para cubrir también los casos en los que no se requiere ninguna autorización o visado para entrar o residir permanentemente en el Estado de recepción como ocurre, por ejemplo, entre los Estados que pertenecen a la Unión europea.

189 Las autoridades del Estado de recepción han de verificar la constatación hecha de acuerdo con el apartado c antes de confiar al niño a los futuros padres adoptivos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17, apartado d.

CAPITULO III- AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS ACREDITADOS

190 El título del Capítulo III reproduce el texto del proyecto y no menciona específicamente a las autoridades públicas que pueden realizar algunas de las funciones asignadas a las Autoridades centrales, lo cual se explica porque son "menos visibles" en la regulación del Convenio (Informe de la Comisión especial, núm. 144).

191 Debido a las grandes diferencias existentes entre las legislaciones respecto a los métodos para estructurar y controlar las adopciones internacionales, se admitió desde los inicios de los trabajos que "sería probablemente muy difícil coordinar su utilización bajo el Convenio, a menos que éste estableciera un sistema de Autoridades centrales como el previsto en el Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y comercial, en el Convenio de La Haya de 18 de marzo de 1970 relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil y en particular, del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (en adelante, Convenio de La Haya sobre sustracción de menores) y sus equivalentes europeos y americanos (el Convenio europeo de 20 de mayo de 1980 relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia y el Convenio interamericano de 14 de julio de 1989 sobre el retorno internacional de niños), en los que se establecen ciertos poderes y obligaciones específicos de dichas Autoridades centrales.

192 Como el Convenio sobre la adopción internacional pretende básicamente ser un instrumento de cooperación entre las autoridades judiciales y administrativas de los Estados contratantes, se tuvo que elegir entre las ventajas de la cooperación directa y los beneficios derivados de la designación por cada Estado contratante de una Autoridad central para coordinar y encauzar la cooperación deseada. Se decidió imponer a los Estados contratantes el deber de designar, que no de crear, una Autoridad central, aunque se admitió que determinadas funciones no pueden ser realizadas en todos los Estados parte por las propias Autoridades centrales, por ejemplo la constitución de la adopción, que habitualmente requiere la intervención de los tribunales.

193 Las diferencias que existen entre los Estados explica la solución dada al problema de si las obligaciones impuestas por el Convenio a cada Estado contratante pueden ser desarrolladas directamente por la Autoridad central o si pueden ser ejercitadas también a través de otras autoridades competentes u organismos debidamente acreditados en el Estado. Se propuso que cada Estado contratante decidiera por sí mismo si las obligaciones impuestas a las Autoridades centrales pueden delegarse, entendiéndose que las Autoridades centrales son, en todo caso, el principal agente de la cooperación entre los Estados contratantes. Se acordó, no obstante, que determinadas funciones deben ser desarrolladas por las Autoridades centrales directamente (artículo 7) y que otras pueden delegarse (Artículos 8 y 9). El Convenio difiere, sin embargo, del proyecto porque restringe la posibilidad de delegación, puesto que existen casos en los que las funciones asignadas solo pueden ser realizadas o bien por las Autoridades centrales directamente o bien a través de autoridades públicas (artículo 8), mientras que las obligaciones definidas por el Artículo 9 también pueden ser realizadas por organismos debidamente acreditados.

Artículo 6

Comentarios generales

194 El artículo 6 reproduce sustancialmente el artículo 6 del Convenio de La Haya de secuestro de menores, de manera que los comentarios hechos a esta disposición son también aplicables al Artículo 6.

195 De acuerdo con el artículo 6, no es necesario crear sino tan solo designar una "Autoridad central", cuestión ésta que ha de tenerse presente para evitar malentendidos. De hecho sería erróneo creer que la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Convenio causa necesariamente a los Estados contratantes costes administrativos extraordinarios en virtud del papel que corresponde a las Autoridades centrales. En muchos Estados ya existe un organismo gubernamental que actúa como "Autoridad central" en cuestiones de adopción internacional; en otros puede designarse como tal a un servicio existente o a una división de un Ministerio.

Párrafo 1

196 El primer párrafo reproduce el texto del proyecto (artículo 8, primer párrafo) y prescribe que la Autoridad central ha de cumplir con las obligaciones que el Convenio le impone. El primer párrafo ha de relacionarse, no obstante, con los artículos 8 y 9 que, en función de las tareas que han de realizarse, permite la delegación de las

funciones asignadas a la Autoridad central a otras autoridades públicas y organismos acreditados, dentro de los límites y condiciones determinados por el Derecho de cada Estado contratante. Ha de tenerse también en cuenta el artículo 22 que permite que, dentro de ciertos límites y en determinadas condiciones, se deleguen las funciones asignadas a la Autoridad central por el Capítulo IV a otras autoridades públicas u organismos acreditados e incluso a organismos o personas no acreditados.

197 Al examinarse, durante las reuniones de la Comisión Especial, el primer párrafo, se propuso que cada Estado contratante pudiera designar como Autoridad central no a un organismo gubernamental sino a un organismo de carácter semigubernamental o no gubernamental. Se admitió entonces que cada Estado es libre para decidir cumplir con las obligaciones que le impone el Convenio de la manera que considere más adecuada. Aunque la propuesta no prosperó, no se ha de perder de vista la posibilidad de delegación de funciones confiadas a la Autoridad central en la medida permitida por los artículos 8, 9 y 22 del Convenio.

Párrafo 2

198 El artículo 8, segundo párrafo del proyecto se ocupaba de los Estados federales y reproducía sustancialmente la misma fórmula utilizada en el Convenio de La Haya de sustracción de menores. La Comisión especial aceptó, sin embargo, una referencia a "los Estados con unidades territoriales autónomas" en lugar de con "organizaciones territoriales autónomas".

199 Durante la primera lectura del proyecto, la delegación belga apuntó que la formulación era incompleta puesto que no permite a los Estados contratantes determinar el ámbito "personal" de actuación de las distintas Autoridades centrales. Por ello, el Documento de trabajo núm. 3 propuso completar la primera frase del segundo párrafo permitiendo a los Estados contratantes "especificar la extensión personal" de las funciones de sus Autoridades centrales. Sin embargo, para evitar posibles malentendidos, se decidió, sin que hubiera objeciones, obtener el mismo resultado haciendo tan solo referencia a la "extensión" de las funciones y suprimir la cualificación de "territorial" que figuraba en el proyecto.

200 No obstante esta aprobación unánime, la cuestión volvió a suscitarse en segunda lectura por la delegación canadiense, que insistió en la importancia extrema que para los Estados federales tiene la inclusión de una referencia a la extensión territorial de las funciones que han ser desarrolladas por más de una Autoridad central. Su Documento de trabajo núm. 185 propuso, por tanto, que se volviera a insertar la palabra "territorial" después de "extensión", de forma que el artículo se adecuara a la fórmula aprobada en otros Convenios de La Haya, en particular al

Convenio de la Haya sobre sustracción de menores. La propuesta no pudo, no obstante, considerarse puesto que de acuerdo con las reglas de procedimiento no obtuvo el suficiente apoyo, pero se acordó que el Informe explicaría que la alteración no pretende modificar la sustancia del artículo.

201 La cuestión se sometió de nuevo a la Sesión plenaria de la Conferencia, porque el Documento de trabajo núm. 5 presentado por Alemania, Australia, Belgica, Brasil, Canadá, España, los Estados Unidos de América, México, la Federación rusa y Suiza, propuso que se insertaran en la primera frase del párrafo 2 del artículo 6 las palabras "territorial y personal" después de la palabra "extensión". En esta ocasión la propuesta se aprobó por amplia mayoría.

Artículo 7

Párrafo 1

202 El primer párrafo no modifica el texto del proyecto (artículo 9, primer párrafo), que reproduce, con los ajustes necesarios, el tenor literal del artículo 7 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores. Prevé, en términos generales, que las Autoridades centrales han de cooperar entre ellas y promover la colaboración con las autoridades competentes de sus Estados para asegurar la protección de los niños y realizar los demás objetivos del Convenio. Algunas de estas tareas han de ser realizadas directamente por la Autoridad central, pero la mayoría de ellas pueden ser llevadas a cabo, con algunas restricciones, a través de otras autoridades públicas u organismos acreditados.

203 El primer párrafo del artículo 7 ha de ser relacionado con el apartado c del artículo 36, que determina las autoridades competentes en los Estados que tengan, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

Párrafo 2

204 El segundo párrafo reproduce sustancialmente el texto del proyecto (artículo 9, segundo párrafo) y enumera las tareas que han de ser realizadas directamente por la Autoridad central, excluyéndose su delegación a otras autoridades públicas u organismos acreditados.

205 En la segunda lectura del proyecto, Bélgica presentó el Documento de trabajo núm. 176 proponiendo la inclusión de la palabra "directamente" para evitar malentendidos y clarificar que las funciones enumeradas en el segundo párrafo del artículo 7 no pueden ser delegadas.

206 Por este motivo, el segundo párrafo del artículo 7 difiere del artículo 6 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores, ya que esta norma no prescribe que la Autoridad central realice directamente las funciones prescritas por el Convenio. Sin embargo, el resultado práctico es bastante similar, porque las tareas que imponen los apartados a y b son de carácter general.

207 Durante las reuniones de la Comisión especial, se propuso extender la lista de obligaciones que la Autoridad central ha de realizar directamente, por ejemplo, para prevenir beneficios materiales indebidos, el secuestro, la venta y el tráfico de niños y, de manera general, todos los actos y prácticas contrarios al Convenio. Se presentó una propuesta análoga en la Decimoséptima Sesión que condujo a la adopción del artículo 8.

Apartado a

208 El apartado a reproduce el texto del proyecto (artículo 9, apartado a) y exige que las Autoridades centrales tomen las medidas adecuadas para proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de adopción. Este tipo de información es muy importante, puesto que permite a los Estados contratantes aceptar que el procedimiento de adopción prosiga, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17, apartado c en relación al párrafo 1 del artículo 19.

209 El apartado a prevé también que se tomen todas las medidas adecuadas para proporcionar informaciones generales, tales como estadísticas y formularios. Esta obligación ha de interpretarse teniendo en cuenta el artículo 16, párrafo 2, que prescribe que en el informe sobre el niño no se revele la identidad del padre y la madre, si en el Estado de origen no puede divulgarse su identidad. Ha de tenerse en cuenta el artículo 30 que impone a los Estados miembros la responsabilidad de conservar la información relativa a los orígenes del niño así como con el artículo 31 que regula la protección de los datos personales que se hayan recopilado o transmitido.

210 La referencia a los formularios en el apartado a enfatiza la importancia futura de éstos de cara a facilitar el funcionamiento del Convenio y ha de relacionarse con el deseo expresado por la Decimoséptima Sesión de que los expertos que participen en la primera reunión de la Comisión especial que ha de convocarse de acuerdo con el artículo 42 establezcan formularios modelo, en particular para los consentimientos exigidos por el artículo 4, apartado c y para el certificado previsto en el artículo 23.

211 La obligación que, según el apartado a, ha de ser ejercitada por la Autoridad central directamente consiste únicamente en "tomar todas las medidas adecuadas" para

proporcionar la información requerida. Por ello, la recopilación y preparación de la información puede ser y habitualmente será- efectuada por personas, organismos y autoridades especializadas y no por la propia Autoridad central.

Apartado b

212 El apartado *b* reproduce el texto del proyecto (artículo 9, apartado *b*) e impone a las Autoridades centrales la obligación de tomar todas las medidas adecuadas para informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y, en la medida de lo posible, suprimir los obstáculos para su aplicación. La disposición ha de relacionarse con el artículo 33, que impone a la Autoridad central la responsabilidad de asegurar que se tomen las medidas adecuadas para evitar que no se respeten las disposiciones del Convenio o que exista un riesgo manifiesto de que no se respeten.

213 La obligación impuesta por el apartado *b* a la Autoridad central consiste simplemente en obtener, de otras fuentes y si ha lugar, información sobre el funcionamiento del Convenio. No es tarea de la Autoridad central eliminar directamente los obstáculos para la aplicación del Convenio, sino tomar todas las medidas adecuadas a tal fin.

Artículo 8

214 Las funciones atribuidas por el artículo 8 a las Autoridades centrales se mencionaban en el proyecto, en el apartado *c* del artículo 10, entre las tareas que podían ser ejercitadas a través de otras autoridades públicas u organismos acreditados. Sin embargo, el Documento de trabajo núm. 26, presentado por Suecia, señaló que los organismos acreditados estaban ellos mismos bajo supervisión de acuerdo con el artículo 11, apartado *c*. En consecuencia, no es adecuado permitir la delegación de dichas tareas de supervisión a los organismos acreditados. Por esta razón, se propuso que se separara esta función, restringiendo su posible delegación a otras autoridades públicas y no permitiéndola en ningún caso a los organismos acreditados. La idea fue aceptada y por razones de claridad se esta obligación figura en una disposición independiente, el artículo 8, a pesar de las observaciones hechas por las delegaciones de Finlandia y Bélgica de que en sus países las tareas de supervisión se atribuyen a organismos acreditados, que conocen mejor los problemas prácticos.

215 Por ello, la función prevista en el artículo 8 ha de ser ejecutada directamente por la Autoridad central o por otras autoridades públicas, entendiéndose que la delegación de la misma por la Autoridad central a otras autoridades públicas es solo posible en la medida permitida

y de acuerdo con las condiciones establecidas en cada Estado contratante.

216 El artículo 8 no hace distinción alguna en relación a las autoridades públicas a las que se refiere en su frase introductoria. Pueden por tanto ser autoridades judiciales o administrativas, de acuerdo con la ley de cada Estado contratante. El artículo 8 ha de ponerse en relación con el artículo 36, apartado c para determinar cuales son las autoridades públicas en caso de que un Estado contratante tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

217 Como en los artículos 7 y 9, la obligación impuesta a la Autoridad central consiste tan solo en tomar "todas las medidas adecuadas" que, en este caso, han de ser tomadas directamente o a través de otras autoridades públicas, y no a través de organismos acreditados y personas u organismos no acreditados, siempre en los términos y condiciones prescritas por la ley del Estado contratante.

218 El artículo 8 ha de relacionarse con el artículo 32 que prohíbe la obtención de beneficios materiales indebidos como consecuencia de una intervención relativa a una adopción internacional y con el artículo 33 que pretende prevenir cualquier violación o cualquier riesgo serio de violación del Convenio.

219 El Documento de trabajo núm. 48, presentado por Alemania, propuso la supresión de la palabra "improper" del texto inglés para evitar que se concluyera que existen beneficios que pueden considerarse "debidos" y que, por tanto, pueden obtenerse. Una propuesta similar, la supresión de la palabra "indu" del texto francés, fue hecha en el Documento de trabajo núm. 86, presentado por Francia, a pesar de que este término se utiliza en el CDN, puesto que para un francófono dicha expresión resulta "chocante", comentario éste que compartió también el observador de Defensa de los niños-internacional. En este sentido, la delegación de Colombia expresó sus temores de que tal supresión, tanto en el artículo 8 como en el artículo 32, pudiera afectar a las donaciones hechas con ocasión de la visita de los futuros padres adoptivos a los centros de adopción, haciéndose hincapié en que dichas donaciones han contribuido a la consecución de una mejor protección de los niños en Colombia. Tras considerar la cuestión debidamente, se decidió que el artículo 8 debía mantener los términos del Convenio de Naciones Unidas a fin de evitar la posibilidad de que se produjeran interpretaciones divergentes en relación a ambos Convenios basadas en el diferente tenor de los textos aprobados (veanse los comentarios sobre los artículos 32, núms. 526-534, *infra*)

220 Como las obligaciones que resultan del artículo 8 se formulan en términos muy genéricos, cada Estado

contratante es libre de determinar a partir de qué momento una práctica ha de considerarse "contraria a los objetivos del Convenio". Sin embargo, en caso de interpretaciones divergentes, la cuestión podría examinarse durante la reunión de la Comisión especial que se convoque de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 para examinar el funcionamiento práctico del Convenio.

Artículo 9

Frase introductoria

221 La frase introductoria retoma el proyecto (frase introductoria del artículo 10) y permite a cada Estado contratante decidir como se ejercitan las obligaciones que el Convenio atribuye a las Autoridades Centrales, exceptuando aquellas que han de realizarse directamente y enumeradas en el artículo 7, y aquellas que sólo pueden ejecutarse directamente o a través de autoridades públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8. La libertad no es, sin embargo, ilimitada, puesto que la delegación sólo puede ser a otras autoridades públicas u organismos acreditados y excepcionalmente a personas y organismos no acreditados, que sólo pueden ejecutar todas o algunas de las funciones atribuidas a las Autoridades Centrales en el Capítulo IV del Convenio, dentro de los límites y las condiciones fijadas en el artículo 22.

222 Aunque no se declare de manera expresa, está implícito en la frase introductoria del artículo 9 que la delegación de responsabilidades sólo es posible en la medida permitida y en las condiciones establecidas por la ley de cada Estado contratante.

223 La frase introductoria del artículo 9 ha de ponerse en relación con las apartados c y d del artículo 36 para determinar las autoridades públicas u organismos acreditados en caso de un Estado contratante que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

224 El artículo 9 introduce mucha flexibilidad en el funcionamiento del Convenio y cada Estado contratante habrá de decidir cómo se han de cumplir las obligaciones de las Autoridades Centrales. Puede prohibir toda delegación o permitir una delegación parcial o general en la medida de lo permitido en los artículos 7 y 8, pero en cualquier caso para el Derecho internacional público el Estado contratante seguirá siendo responsable de cualquiera violación del Convenio.

225 De acuerdo con los artículos 8, 9 y 22 del Convenio, las responsabilidades atribuidas a la Autoridad Central por el Convenio pueden ser ejecutadas, dependiendo de la función de la que se trate, por otras autoridades

públicas, organismos acreditados y, en determinados casos, hasta por organismos y personas no acreditados. Consiguientemente las Autoridades Centrales no son necesariamente los únicos "ejecutores" del Convenio, y la cooperación puede realizarse a través de otras vías, en función de la legislación de cada Estado contratante. Este aspecto diferencia al presente Convenio del Convenio de La Haya de sustracción de menores, en el que la Autoridad Central es la única institución responsable de la observancia de las obligaciones impuestas por el Convenio. Por esta razón, el Convenio es más flexible y puede implicar una descentralización "de facto" de las funciones atribuidas a la Autoridad Central.

226 Debido a la descentralización *de facto* que puede producirse en caso de delegación, el Informe de la Comisión Especial (núm. 166) propuso que se exigiera a cada Estado contratante que transmitiera al Secretario General de la Conferencia la información pertinente indicando las autoridades públicas y organismos acreditados y, si no se ha efectuado la declaración del segundo párrafo del artículo 22, los organismos y personas no acreditados que pueden ejercitar algunas de las funciones atribuidas a la Autoridad Central por el Convenio, precisando en qué medida se ha hecho la delegación. Esta propuesta fue aceptada por la Decimoséptima Sesión y se refleja en el artículo 13 respecto a los organismos acreditados y en el tercer párrafo del artículo 22 respecto a los organismos o personas no acreditados. Es, sin embargo, aconsejable transmitir también toda la información relevante sobre las autoridades públicas a las que se refieren los artículos 8, 9 y 22, primer párrafo.

227 La enumeración del artículo 9 no pretende ser una lista exhaustiva de las obligaciones impuestas a las Autoridades Centrales, tal y como ponen de manifiesto las palabras "en especial" al final de la frase introductoria y el hecho de que a la Autoridad Central también se le atribuyan funciones en el Capítulo IV del Convenio. Pueden delegarse, por tanto, en los términos y condiciones fijadas por la legislación de cada Estado contratante, las funciones no mencionadas en los apartados a y b del artículo 7, con la excepción del artículo 33 y con las restricciones establecidas en el artículo 8. El primer párrafo del artículo 22 confirma esta posibilidad de delegación respecto a las funciones atribuidas a las Autoridades centrales en el Capítulo IV.

228 Al igual que el artículo 8, el artículo 9 no hace ninguna distinción, de manera que las autoridades públicas a las que se refiere su frase introductoria pueden ser judiciales o administrativas, según disponga la ley de cada Estado contratante.

Apartado a

229 El apartado a reproduce el texto del proyecto (artículo 10, apartado a)), con la enmienda propuesta por Francia en el Documento de trabajo núm. 86, consistente en suprimir la última frase que se refería de forma expresa al artículo 30. La supresión se aprobó, porque el texto confundía dos cuestiones distintas: (1) la recopilación e intercambio de información para la adopción proyectada, a las que se refería la apartado a y (2) el acceso del niño a dicha información, una vez se ha constituido la adopción, cuestión ésta que regulaba el artículo 30.

230 El apartado a impone a la Autoridad Central la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción. Sin embargo, para no sobrecargar a la Autoridad Central, se entiende que esta obligación ha de cumplirse dentro de los límites y bajo las condiciones establecidas por la ley de cada Estado contratante.

231 Los Documentos de trabajo núms 22 y 25, presentados, respectivamente, por el Reino Unido y Australia proponían que la obligación de reunir, conservar e intercambiar información se refiriera también a los "padres biológicos" puesto que, como de acuerdo al artículo 30 el niño tiene derecho a acceder a la información relativa a sus orígenes, ésta debería ser lo más completa posible. Se señaló a este respecto que, no obstante la importancia de la información que se proponía añadir, sería imposible cumplir con este requisito cuando los padres biológicos del niño fueran desconocidos y que sería mejor restringirla a la información que no comportara datos identificatorios. La propuesta se rechazó por una ligera mayoría.

Apartado b

232 El apartado b reproduce el texto del proyecto (artículo 10, apartado b)) y se refiere a las medidas a tomar para facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción. Otras disposiciones del Convenio, como por ejemplo los artículos 18, 19 (primer párrafo), 20 y, con carácter general el artículo 35, aluden a dicha obligación en relación a todos los Estados contratantes.

233 La importancia del apartado b como mecanismo para la protección del interés del niño y para alcanzar uno de los principales objetivos del Convenio fue generalmente reconocida. Por esta razón, el Documento de trabajo núm. 20, presentado por España, propuso la siguiente formulación: " Las Autoridades Centrales tomarán, directamente o a través de autoridades públicas u otros organismos debidamente acreditados en sus Estados, todas las medidas apropiadas para facilitar, seguir y activar los procedimientos para la obtención de la adopción, desarrollando las funciones establecidas en el Capítulo IV, e intervendrán

a tal efecto ante las autoridades judiciales o extrajudiciales". Sin embargo, la propuesta no prosperó, puesto que se objetó que el término "intervención" tiene un significado claramente distinto en el Derecho procesal civil, por lo que el texto propuesto interferiría de manera excesiva en el Derecho constitucional de los Estados contratantes.

Apartado c

234 De acuerdo con el apartado c, las Autoridades centrales tomarán todas las medidas apropiadas para promover el desarrollo de servicios de asesoramiento en sus Estados. Es fácil comprender que se mencione de manera expresa esta responsabilidad, habida cuenta de la importancia atribuida por el artículo 4, apartados c y d, y por el artículo 5, apartado b, a un adecuado asesoramiento como condición de la adopción.

235 El apartado c reproduce el texto del proyecto (artículo 10, apartado d), pero se añadieron las palabras "para el seguimiento de las adopciones" a requerimiento de Corea en el Documento de trabajo núm. 91, con modificaciones de Irlanda. La enmienda se aprobó en aras de la claridad y por la importancia de los servicios de seguimiento de la adopción " para asegurar la adaptación del niño a su nuevo hogar o entorno y para que la adopción tenga éxito". La misma idea había sido expresada por Filipinas cuando propuso que el Convenio promoviera la protección social y cultural de los niños adoptivos y que se debería hacer un esfuerzo deliberado, a través de las Autoridades centrales, para no tan sólo proteger a los niños, sino integrarlos en su nuevo entorno.

Apartado d

236 El apartado d reproduce el texto del proyecto (artículo 10, apartado e) y exige que las Autoridades centrales tomen todas las medidas apropiadas para intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias en materia de adopción internacional. Esta disposición ha de relacionarse con el párrafo 2 del artículo 16 y con el artículo 30 relativo a la protección de datos.

Apartado e

237 El apartado e reproduce el Documento de trabajo núm. 192, presentado por Japón, que representa una solución de compromiso para atender a la petición formulada en la Conferencia diplomática por los Estados de origen de los niños.

238 El Documento de trabajo núm. 94, presentado por Colombia, Costa Rica y El Salvador, que fue posteriormente retirado, propuso que se impusiera a las Autoridades

Centrales la obligación de tomar todas las medidas apropiadas " para obtener informaciones acerca del seguimiento de la adopción en el Estado de recepción hasta la nacionalización del niño". Otros delegados latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Mexico), así como la Federación rusa, argumentaron que los niños continúan siendo nacionales del Estado de origen y que, por este motivo, éste tiene un interés en conocer los resultados de la adopción. El delegado de Sri Lanka también observó que los Estados de origen tienen sentimientos muy fuertes en relación a este tema, a pesar de que la experiencia ha mostrado que nunca se rechazan solicitudes de información posteriores a la adopción, y Polonia propuso en el Documento de trabajo núm. 50 que "se controlara que tras la adopción el niño tiene la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales".

239 Algunos participantes se opusieron a esta propuesta, en virtud de razones constitucionales, puesto que podría significar una ingerencia en la soberanía del Estado de recepción, pero no hubo ninguna objeción a un seguimiento voluntario de la adopción. La delegación de los Estados Unidos señaló que a veces puede ser muy difícil obtener información acerca de una persona, puesto que en ese país los particulares no están obligados a inscribirse en la policía. Se puso de relieve también que el control no podría ser ejercido por los Estados de origen, habida cuenta del número de niños adoptados cada año en algunos de ellos, y que si se detectaran abusos, el Convenio no proporcionaría sanción alguna, puesto que el Derecho penal no entra en su ámbito de aplicación.

240 Se propuso, por ello, en el Documento de trabajo núm. 90 presentado por Uruguay, que las Autoridades centrales tomaran todas las medidas apropiadas "para contestar a toda petición de información respecto a una determinada adopción", esta propuesta se completó con las precisiones de que se respondería "en la medida de lo posible". De acuerdo con esta idea, el Documento de trabajo núm. 101, presentado por Italia, imponía la obligación de contestar "en la medida en que lo permitiera la ley del Estado requerido" y Canadá presentó el Documento de trabajo núm. 102 proponiendo que la respuesta se remitiera "después de consultar con las autoridades competentes".

241 El texto final se aprobó por una amplia mayoría. El Reino Unido se opuso, no obstante, al carácter imperativo de la norma, a pesar de indicar que en todos los casos recomendaría que se remitiera la información al Estado de origen.

Artículo 10

242 La cuestión de si las responsabilidades atribuidas por el Convenio a las Autoridades centrales pueden ser ejercitadas por individuos y organizaciones privadas es muy delicada, puesto que, de acuerdo a la experiencia, la mayoría de los abusos en materia de adopción internacional resultan de la intervención de "intermediarios" de este tipo en las diversas etapas del procedimiento. Por esta razón, muchos de los participantes en la Comisión especial no quisieron aceptar que las Autoridades centrales puedan delegar sus responsabilidades a organismos acreditados, mientras que otros insistieron en que cada Estado contratante pudiera determinar la forma en la cual ejecutar las obligaciones convencionales.

243 La solución aceptada en el proyecto (artículo 11) representaba un compromiso, en la medida en que sólo se permitía la delegación a las autoridades públicas y a organismos debidamente acreditados que cumplieran, al menos, ciertas condiciones mínimas establecidas por el Convenio. Sin embargo, como ya hemos puesto de relieve, este compromiso se restringió aún más cuando la cuestión se discutió en la Conferencia diplomática, puesto que el artículo 8 del Convenio no permite la delegación a los organismos acreditados. No obstante, dentro de los límites del Convenio, cada Estado contratante es libre de decidir como se han de ejecutar las obligaciones atribuidas a la Autoridad central, así como de permitir o no la eventual delegación de sus funciones.

244 El artículo 10 reproduce el texto del proyecto (Artículo 11), pero se suprimieron las palabras "administrativas y sociales" que calificaban a las "tareas", de acuerdo con la propuesta de Austria en el Documento de trabajo núm. 67, porque es mejor que los Estados contratantes determinen ellos mismos la naturaleza de las obligaciones que han de realizar los organismos acreditados.

245 La acreditación exigida por el artículo 10 ha de ser otorgada en la forma determinada por cada Estado contratante y no necesariamente por la Autoridad central. Como la acreditación no es una función específica de la Autoridad central, no se incluyó ni en el artículo 7 ni en los artículos 8 y 9.

246 El artículo 10 ha de ser puesto en relación con el apartado c del artículo 36 para determinar cuáles son las autoridades públicas competentes en los Estados que tengan, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

247 El artículo 10 ha de relacionarse además con el apartado c del artículo 11 que atribuye a cada Estado contratante no sólo el derecho a otorgar la acreditación,

sino también el de revocarla si de la supervisión resulta que el organismo en cuestión no cumple ya las condiciones del Convenio y los demás requisitos legales de la acreditación. En tal caso, de acuerdo con el artículo 10, no se puede "conservar" la acreditación, que por tanto ha de revocarse.

248 A pesar de que se reconoce una gran libertad a los Estados contratantes para establecer condiciones adicionales que los organismos que solicitan la acreditación habrán de observar, el Convenio prescribe determinados mínimos que han de respetarse en todo caso, por ejemplo: la demostración de su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárseles, tal como dispone el artículo 10; el artículo 11 que establece determinados requisitos mínimos que han de respetarse y el artículo 32 que no prohíbe tan sólo los beneficios materiales indebidos como consecuencia de una intervención relativa a una adopción internacional, sino que también, en su tercer párrafo, prescribe que los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas en relación a los servicios prestados.

249 El artículo 10 se refiere a "organismos" y, por ello, las personas físicas no pueden ser acreditadas de acuerdo con el Capítulo III del Convenio. Esta restricción fue objeto de críticas, porque los "organismos", tengan o no personalidad jurídica, no necesariamente ofrecen mejores garantías que los particulares en relación a la ejecución de las obligaciones que el Convenio impone a las Autoridades centrales.

250 El artículo 10 se refiere tan sólo a "organismos", lo que deja abierta la cuestión de si, para otorgar la acreditación, han de poseer una personalidad jurídica propia. La ley de cada Estado contratante aportará la respuesta a esta cuestión.

251 La acreditación de organismos, de acuerdo con el Capítulo III, es una condición necesaria para la posible delegación de funciones atribuidas por el Convenio a la Autoridad central. No es, por tanto, necesaria cuando los organismos y personas no acreditados intervienen para asistir o colaborar con el cumplimiento de las obligaciones que el Convenio impone a los Estados contratantes, por ejemplo, cuando se trate de preparar estadísticas, cooperar en la recopilación de las leyes en vigor y actividades de carácter similar.

252 Aunque la acreditación sólo puede otorgarse a "organismos", el segundo párrafo del artículo 22 admite que bajo determinadas condiciones, a título opcional y mediante una declaración especial del Estado, las personas u organismos no acreditados sean autorizados a ejercitar determinadas funciones atribuidas a la Autoridad Central

por el Capítulo IV. Esta disposición es, no obstante, excepcional y tiene por objeto resolver los delicados problemas que presentan las adopciones "privadas" o "independientes".

253 La acreditación otorgada de acuerdo con el artículo 10 no ha de ser general, y cada Estado contratante es libre de decidir qué tareas (administrativas, sociales o de otra naturaleza) pueden confiarse a dichos organismos. En consecuencia, la acreditación puede referirse a la ejecución de determinadas responsabilidades y no a otras, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Artículo 11

Frase introductoria

254 La frase introductoria reproduce el texto del proyecto (Frase introductoria del artículo 12). El artículo establece ciertas normas mínimas para la acreditación de organismos que han de observarse en todos los casos. En consecuencia, cada Estado es libre de precisar y completar estas normas, añadiendo o no condiciones complementarias. Puede, por ejemplo, inspirarse en las recomendaciones formuladas por la Reunión latinoamericana sobre la adopción y el tráfico de niños (Quito, 1991) o por el Seminario regional sobre la protección de los derechos de los niños en la adopción internacional (Manila, 1992).

Apartado a

255 El apartado a reproduce el texto del proyecto (artículo 12, apartado a), porque hubo un acuerdo generalizado en el sentido de que los organismos acreditados han de perseguir únicamente fines no lucrativos. Corresponde al Derecho interno de los Estados contratantes determinar quién (qué individuos o qué categorías de individuos) pueden crear una persona jurídica o entidad con fines no lucrativos, para cumplir con lo dispuesto en el apartado a del artículo 11.

256 La obligación impuesta por el apartado a de "perseguir únicamente fines no lucrativos" se formula en términos generales si bien se somete a " las condiciones y...los límites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado". Existe, por tanto, un amplio margen de regulación que puede diferir en los distintos Estados contratantes, si bien se habrán de respetar los objetivos del Convenio.

Apartado b

257 El apartado b reproduce el texto del proyecto (artículo 12, apartado b), suprimiéndose tan solo el

adverbio " especialmente" antes de la palabra "cualificadas", puesto que el artículo 22 (2) (b), al regular las condiciones que han de reunir los organismos y personas no acreditados para poder ser autorizados a ejecutar algunas de las funciones que el Convenio atribuye a las Autoridades Centrales, establece estas mismas exigencias.

258 La supresión de la palabra "especialmente", que propuso el Documento de trabajo núm. 30, presentado por el Reino Unido, se aprobó puesto que tal palabra no añadía nada, ya que una persona puede estar cualificada para actuar en el ámbito de la adopción internacional por su integridad moral y por su formación o por su integridad moral y su experiencia.

259 El apartado b establece unas condiciones personales mínimas en relación a la composición de los organismos acreditados, prescribiendo que " ha de ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad moral". Deben cumplir esta condición todas las personas que trabajen para los organismos acreditados, tanto los directores como los demás miembros del personal.

260 Las palabras "para actuar" se añadieron para especificar que los directores y demás miembros del personal, que trabajen personalmente en el ámbito de la adopción internacional, han de estar cualificados por su formación y experiencia para hacerlo. Los dirigentes y empleados que no trabajen personalmente en este ámbito, no han de estar cualificados por su formación o su experiencia pero deben presentar todas las garantías de integridad moral.

261 El Documento de trabajo núm. 21, presentado por Defensa de los niños- internacional y el Servicio Social Internacional, pretendía asegurar que se ocuparan de las adopciones internacionales profesionales cualificados, proponiendo la modificación de la última frase de la apartado b de forma que dijera: " y por su formación y experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional". Sin embargo, esta propuesta no pudo ser considerada puesto que no fue apoyada por ninguna delegación.

Apartado c

262 El apartado c reproduce el texto del proyecto (artículo 12, apartado c) con una enmienda de carácter lingüístico: se utiliza el pronombre "su" en lugar de "sus" porque la frase introductoria se formula en singular ("Un organismo acreditado").

263 El apartado c también establece ciertas normas mínimas respecto al control de los organismos acreditados sometiéndolos a un control permanente. En consecuencia, la conservación de la acreditación a la que se refiere el

artículo 10, sólo será posible si los resultados de dicho control han sido satisfactorios.

264 El control no ha de ser realizado por la propia Autoridad central, sino por una "autoridad competente", determinada por la ley de cada Estado contratante, que establecerá también el procedimiento a seguir y las condiciones de fondo que serán controladas adicionalmente a las establecidas por el Convenio.

265 El artículo 11 ha de relacionarse con el apartado c del artículo 36, para determinar cuales son las autoridades públicas competentes en los Estados que tengan, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

266 El control permanente se referirá, al menos, a la composición, funcionamiento y situación financiera de los organismos acreditados: (1) la composición, para asegurar que se han observado las condiciones establecidas en el apartado b del artículo 11; (2) el funcionamiento, para asegurar el respeto al apartado a del artículo 11 y a las disposiciones del artículo 32; y (3) la situación financiera, para evitar toda irregularidad en el funcionamiento efectivo de estos organismos.

Artículo 12

267 El texto reproduce la idea contenida en el artículo 13 del proyecto; la única enmienda que se introdujo fue la propuesta por el Documento de trabajo núm. 5, presentado por Bélgica, consistente en modificar en el siguiente sentido la última frase: "si ha sido autorizado por las autoridades competentes de ambos Estados". La propuesta fue aprobada sin ulteriores objeciones: se trataba de resolver algunos problemas que podían suscitarse en los Estados con más de un sistema jurídico o compuestos de unidades territoriales autónomas.

268 El artículo 12 permite la intervención de organismos acreditados, pero, como se ha señalado anteriormente, su actuación en materia de adopción internacional es una cuestión muy delicada para muchos países y, por esta razón, el artículo 12 reconoce que todo Estado contratante es libre de permitir o prohibir sus actividades dentro de su territorio, sin perjuicio de que se les haya permitido actuar en otro. En consecuencia, cuando un organismo ya acreditado en un Estado contratante desee actuar en otro Estado contratante, deberá obtener la autorización de este último, que puede serle denegada si este Estado es contrario a la intervención, en materia de adopción internacional, de organismos privados en su territorio.

269 El artículo 12 se formula en términos generales. Al no efectuarse distinción alguna, ha de obtenerse la

autorización de ambos Estados, tanto para actuar "directamente", como para hacerlo "indirectamente".

270 El artículo 12 ha de relacionarse con el apartado c del artículo 36 para determinar las autoridades competentes en un Estado contratante que, en materia de adopción tenga dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades territoriales distintas.

Artículo 13

271 El proyecto no incluía un artículo de este tipo. Éste fue añadido por la Conferencia diplomática al aprobar sin ninguna enmienda, la propuesta formulada en el Documento de trabajo núm. 177, presentado por Suiza, en relación a que la cooperación es un elemento fundamental del proyecto y uno de sus principales objetivos. La propuesta, una vez aprobada, fue complementada por Canadá que exigió que se especificara que cada Estado contratante ha de proceder a la designación de su Autoridad central.

272 En anteriores Convenios de La Haya se hallan disposiciones similares, por ejemplo en el *Convenio sobre notificaciones en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o mercantil* (artículo 21), en el *Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil* (artículo 35) y en el *Convenio sobre el acceso internacional a la justicia* (artículo 29). No obstante, dichos Convenios establecen que cada Estado contratante ha de realizar la notificación al depositario, el Ministerio de Asuntos exteriores de los Países Bajos.

273 El sistema previsto por el artículo 13 es menos formal, puesto que la notificación se dirige únicamente a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, a fin de evitar los retrasos innecesarios que pueden resultar de una notificación formal al depositario del Convenio a través de la vía diplomática, como exigen los demás Convenios de La Haya:

274 El artículo 13 no establece de manera expresa la comunicación de los nombres y direcciones de las autoridades públicas y la extensión de las funciones atribuidas a la Autoridad central, que éstos pueden ejercitar de acuerdo con lo previsto en los artículos 8 y 9. Es, sin embargo, aconsejable que se comunique también dicha información para su ulterior difusión.

275 El artículo 22, párrafo 3, prescribe una notificación similar, cuando exige que los Estados contratantes, que realicen la declaración prevista por el párrafo 2 del mismo artículo, mantengan informada a la Oficina Permanente de la Conferencia de la Haya de Derecho internacional privado de los nombre y direcciones de los organismos y

personas no acreditados autorizados a ejercer las funciones de la Autoridad central previstas en los artículos 15 a 21.

276 A pesar de que no se establezca de manera expresa, el artículo 13 ha de relacionarse con el artículo 22, párrafo 3, que exige que cada Estado contratante comunique cualquier cambio referido, especialmente, a la extensión de las funciones de las Autoridades centrales o de las demás autoridades públicas, o que se refiera a la acreditación afectada por causas de revocación, suspensión o de otro tipo.

277 El incumplimiento de la obligación de remitir dicha información autorizaría a los demás Estados contratantes a actuar de acuerdo con el artículo 33, pero no afecta a la adopción ya constituida, que se considera, a todos los efectos jurídicos y, en especial, respecto a su reconocimiento en los demás Estados contratantes, una adopción en el sentido del Convenio.

278 El artículo 13 no indica cuál es el objetivo perseguido por la notificación requerida, pero es evidente que la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado difundirá la información recibida en los Estados interesados, esto es, en los Estados miembros de la Conferencia de La Haya y en los demás Estados contratantes.

279 A pesar de que el artículo 48 no mencione expresamente al artículo 13, no hay objeción alguna a que dicha información sea igualmente transmitida al depositario del Convenio.

CAPITULO IV- CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES

280 El título del proyecto para el Capítulo IV fue criticado en los Documentos de trabajo núms. 36 y 133, presentados por Bélgica, puesto que la denominación "Procedimiento" podía entenderse referida al procedimiento ante los tribunales judiciales, lo cual sería una conclusión errónea puesto que el Convenio regula la cooperación entre las Autoridades centrales de los Estados contratantes. Debía, por tanto, sustituirse por "Cooperación entre Autoridades centrales" y, de acuerdo con dicha propuesta el Documento de trabajo núm. 179, presentado por el Comité de redacción dio al Capítulo IV el siguiente Título: "Procedimiento de cooperación entre Autoridades centrales".

281 Esta propuesta suscitó objeciones, en primer lugar, porque las reglas generales en relación a la cooperación entre las Autoridades centrales se establecen en el Capítulo III y, en segundo término, porque el Capítulo IV contiene un muy importante número de artículos

sobre cuestiones procedimentales no referidas a la cooperación entre las Autoridades centrales. Estas razones explican que el Documento de trabajo núm. 181, presentado por el Reino Unido, Colombia, Irlanda, Australia y México propusiera su sustitución por "Condiciones de procedimiento en las adopciones internacionales", aprobándose esta propuesta en segunda lectura.

282 El Capítulo IV pretende establecer un procedimiento para la protección de los intereses fundamentales de todas las partes que intervienen en una adopción internacional, en particular, del niño, sus padres biológicos y los futuros padres adoptivos. Consiguientemente, establece importantes garantías para la protección de dichos intereses, pero se hizo asimismo un gran esfuerzo para simplificar los procedimientos y aumentar al máximo las oportunidades de que niños sin hogar puedan ser acogidos por familias adecuadas en otros Estados contratantes.

283 Tras discutirlo en la Comisión especial, se alcanzó un consenso en relación al carácter vinculante de las normas del Capítulo IV, que se mantuvo en el Convenio sin ulteriores objeciones. No se trata, por tanto, de un procedimiento facultativo, sino que debe aplicarse en todos los casos.

284 El Capítulo IV ha de relacionarse con el artículo 39, párrafo 2, que permite a todo Estado contratante concluir acuerdos con uno o más Estados contratantes a fin de mejorar la aplicación del Convenio en sus relaciones mutuas. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que el artículo 25 permite a todo Estado contratante declarar ante el depositario del Convenio que no reconocerá en virtud del Convenio las adopciones realizadas conforme a tales acuerdos. Además, el párrafo 2 del artículo 39 establece otra restricción, al disponer que "estos acuerdos sólo podrán derogar las disposiciones contenidas en los artículos 14 a 16 y 18 a 21", con lo cual se mantiene el carácter vinculante del artículo 17 en relación a todos los casos de adopción a los que se aplica el Convenio.

285 A pesar de que todos los artículos del Capítulo IV se formulen en plural y se refieran, por ejemplo, a personas y futuros padres adoptivos, se aplican también a los casos en que es una persona individual quien solicita y a quien se le concede la adopción, como permite el artículo 2 del Convenio.

286 El Documento de trabajo núm. 187, presentado en segunda lectura por Australia, propuso modificar el orden de los artículos de manera que el artículo 16 fuera primero, el artículo 14 segundo y el artículo 15 tercero puesto que "se ofrecería una mejor imagen ante todo el mundo si el texto del Convenio se ocupara primero de las cuestiones relacionadas con el niño, tales como el consen-

timiento de sus padres, y considerara luego la adecuación de los futuros padres adoptivos, teniendo en cuenta que la adopción internacional pretende hallar padres para niños y no niños para padres". No obstante, la propuesta no obtuvo los apoyos necesarios para ser considerada.

287 El Documento de trabajo núm. 176, presentado por Bélgica, propuso reordenar los artículos de manera que en primer lugar se regulara la decisión de confiar al niño a los padres adoptivos (artículo 17), en segundo término se hiciera referencia a las autorizaciones necesarias para el desplazamiento del niño (artículo 18) y en tercer lugar se establecieran las condiciones de dicho desplazamiento (artículo 19, párrafo 1). La modificación propuesta se aprobó en segunda lectura a fin de facilitar la tarea de las personas que, sin haber participado en la elaboración de dichos artículos, deban aplicar el Convenio a casos concretos.

Artículo 14

288 El artículo 14 reproduce el texto del proyecto (artículo 14) y establece, a fin de evitar abusos, que el procedimiento de adopción se inicie con una solicitud dirigida a la Autoridad central del Estado de la residencia habitual de los futuros padres adoptivos.

289 El artículo 14 no regula de manera expresa los requisitos formales de tal solicitud. Éstos se determinarán, por tanto, por la ley de la residencia habitual de los futuros padres adoptivos, si bien ha de entenderse que es necesario que los solicitantes se identifiquen y proporcionen toda la información necesaria para posibilitar la preparación del informe previsto en el artículo 15.

290 La regla establecida en el artículo 14 es obligatoria, pero ha de relacionarse con el párrafo 1 del artículo 22. En consecuencia, la solicitud podrá dirigirse a otras autoridades públicas distintas de la Autoridad central o a un organismo acreditado, si así lo permite la ley de la residencia habitual de los futuros padres adoptivos.

291 Del artículo 14 se deduce que no se permite a los futuros padres adoptivos dirigir su solicitud directamente a la Autoridad central o a una autoridad pública u organismo acreditado del Estado de origen. Esta posibilidad fue propuesta, sin que prosperara, a la Comisión especial y reiterada ante la Conferencia diplomática. El Documento de trabajo núm. 75, presentado por los Estados Unidos, propuso que los futuros padres adoptivos pudieran dirigir su solicitud directamente a la Autoridad central del Estado de origen, cuando lo permitieran ambos Estados y en las condiciones que éstos establecieran, con lo cual se satisficieran los intereses de los Estado afectados. El Documento de trabajo núm. 93, presentado por Japón, propuso

que se añadieran las siguientes palabras:" o en el Estado de la residencia habitual del niño", argumentando que el texto del proyecto era demasiado restrictivo puesto que no permitía la solicitud directa a la Autoridad central del Estado de origen, incluso en el caso de que el niño y sus futuros padres adoptivos tuvieran la misma nacionalidad.

292 No obstante, estas propuestas hallaron algunas objeciones: (1) las dificultades que para el Estado de recepción supondría el control de todas las solicitudes provenientes de las autoridades delegadas del Estado de origen; (2) el hecho de que el respeto a los derechos del niño y de la familia de origen estaría más garantizado si la solicitud se hiciera a través de la Autoridad central del Estado de recepción; (3) las recientes y duras experiencias de determinados países resultantes del contacto directo entre los futuros padres adoptivos y los países de origen. Se han producido abusos que el Convenio debería intentar prevenir mejorando las normas internacionales; (4) las desventajas que podrían derivar para aquellos Estados que mantuvieran un procedimiento más formal y seguro, si se autorizara a otros Estados a permitir un contacto directo con las autoridades del Estado de origen; (5) el hecho de que el Convenio no debería promover, regulándolas de manera expresa, prácticas que entrañen este peligro.

Artículo 15

Párrafo 1

293 El primer párrafo reproduce el texto del proyecto (artículo 15, primer párrafo) con ligeras modificaciones lingüísticas, puesto que se aprobó que se sustituyeran las palabras " y sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo" por " así como los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo". Conviene interpretar la palabra francesa "*considère*" de la primera línea del texto francés de los artículos 15 y 16 teniendo en cuenta la versión inglesa "*is satisfied*". En ciertos países la tarea de la Autoridad central se limitará a verificar las condiciones psicológicas, sociales y legales determinadas por otras autoridades competentes, en especial por los tribunales. El texto francés no prejuzga en absoluto las atribuciones de estas autoridades competentes.

294 De acuerdo con el sistema de cooperación y distribución de responsabilidades establecido por el Convenio, el artículo 15 prescribe que, una vez se haya presentado ante la Autoridad central del Estado de recepción la correspondiente solicitud, esta autoridad ha de verificar si los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar, como exige de manera expresa el artículo 5, apartado a del Convenio. Velará, por tanto, por el cumplimiento no tan sólo de las condiciones jurídicas establecidas por la ley aplicable determinada por el Estado de recepción, sino también por que los solicitantes reúnan

los requisitos socio-psicológicos que garanticen el éxito de la adopción.

295 Como, a pesar de que no se mencione expresamente, ha de verificarse que se cumplen todas las condiciones jurídicas, la Autoridad central del Estado de recepción habrá de asegurarse, en especial, acerca de la obtención, conforme al Convenio, del consentimiento del cónyuge, siempre que una persona casada haya solicitado individualmente una adopción, si ésto fuera posible de acuerdo con la ley aplicable.

296 Inmediatamente después, la Autoridad central preparará un informe sobre los futuros padres adoptivos, que contenga toda la información necesaria, en particular sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional, así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo.

297 Las últimas líneas del artículo 15 (1) establecen que el informe ha de incluir información "sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo". Esta formulación expresa la idea de que puede ser aconsejable averiguar las preferencias de los futuros padres adoptivos como garantía adicional para asegurar el éxito de la adopción, entendiéndose que éstas han de expresarse en términos generales, por ejemplo, edad, religión, necesidades particulares (discapacidades, etc) de acuerdo con su capacidad para ser padres y sus experiencias, sin hacer referencia a un concreto niño.

298 La enumeración hecha en el artículo 15 no es exhaustiva y el informe puede incluir cualquier otra información que la Autoridad central del Estado de recepción considere pertinente, puesto que lo que se pretende es transmitir los suficientes datos personales sobre los futuros padres adoptivos a la Autoridad central del Estado de origen para que ésta pueda determinar cuál es el niño más adecuado para dichos padres.

299 Por ello, aunque no prosperara, por falta de apoyos el Documento de trabajo núm. 166, presentado por Argentina, no hay inconveniente, sino todo lo contrario, en que se añada una referencia adicional a "la religión" en el informe previsto por los artículos 15 y 16, puesto que se trata de un elemento distinto de los "antecedentes" y de la "situación familiar y médica" del niño.

300 Las observaciones hechas al respecto por la Santa Sede son muy importantes puesto que hacen hincapié en que "la religión juega un papel muy importante en relación a la estabilidad del matrimonio y al sentimiento de responsabilidad necesario para criar a un niño. La pérdida de los valores tradicionales ha minado las convicciones religio-

sas, que de manera más o menos consciente, sostenían antaño al matrimonio. Por estas razones, la actitud religiosa de los futuros padres adoptivos debería ser tenida en cuenta de manera expresa, junto a los antecedentes religiosos del niño. Si el interés del niño radica en formar parte de una familia estable y dedicada, es necesario que la seriedad de las actitudes religiosas, en el sentido amplio del término, se considere una de las condiciones esenciales para que una adopción tenga éxito. Esta dimensión no debiera ser olvidada al contemplar una adopción."

301 El primer párrafo del artículo 15 ha de relacionarse con el artículo 22, párrafo 1 y, en consecuencia, el informe podrá ser preparado por otras autoridades públicas y por organismos acreditados, si así lo permite la ley de la residencia habitual de los futuros padres adoptivos. No obstante, sin perjuicio de que se haya o no otorgado tal autorización, la Autoridad central del Estado de recepción podrá confiar a otras autoridades u organismos especializados la verificación de la información a incluir en el informe.

302 Ha de tenerse en cuenta que, a pesar de que un Estado contratante declare, conforme al párrafo 2 del artículo 22, que las funciones atribuidas a la Autoridad central por los artículos 15 a 21 serán ejercitadas por organismos y personas no acreditados, los informes previstos en los artículos 15 y 16 se prepararán en todo caso bajo la responsabilidad de la Autoridad central o de otras autoridades, de acuerdo con lo que dispone el párrafo 5 del mismo artículo 22.

Párrafo 2

303 El párrafo 2 del artículo 15 reproduce el texto del proyecto y establece que la Autoridad central del Estado de recepción transmitirá el informe a la Autoridad central del Estado de origen. Se trata de una regla de carácter obligatorio, que ha de relacionarse con los dos primeros párrafos del artículo 22, de forma que la transmisión y recepción del informe puede efectuarse a través de otras autoridades públicas u organismos acreditados. Puede incluso tener lugar a través de organismos y personas no acreditados, si se han cumplido las disposiciones del Convenio y ha sido autorizado, respectivamente, por el Estado de recepción y el Estado de origen.

304 Este segundo párrafo debería relacionarse también con el tercer párrafo del artículo 19, de forma que, si no tiene lugar el desplazamiento del niño, el informe habrá de ser devuelto a las autoridades que lo transmitieron.

305 En segunda lectura, el Documento de trabajo 37, presentado por Italia, propuso que se modificara el párrafo 2 del artículo 15 de la siguiente forma: "Este informe será transmitido a la Autoridad central del Estado de origen o

bien directamente por la Autoridad central del Estado de recepción, o bien por los futuros padres adoptivos, si la Autoridad central del Estado de recepción los ha autorizado por escrito y esta posibilidad ha sido aceptada por la Autoridad central del Estado de origen". Se diferenciaba, por tanto, entre la presentación de la solicitud, que ha de producirse en el Estado de recepción, y la transmisión de la misma, que puede ser efectuada o bien por la Autoridad central del Estado de origen o bien directamente por los futuros padres adoptivos, si se los ha autorizado debidamente por escrito.

306 Esta propuesta obtuvo suficiente apoyo, señalándose que permitiría a los futuros padres adoptivos velar por una efectiva transmisión del informe al Estado de recepción y que ambas Autoridades centrales seguirían estando involucradas, a pesar del hecho de que el informe fuera transmitido directamente por los futuros padres adoptivos, puesto que se exige su autorización. No obstante, la propuesta no prosperó, siendo necesaria una segunda votación para tomar la decisión final.

Artículo 16

Párrafo 1

Frase introductoria

307 La frase introductoria reproduce el texto del proyecto (frase introductoria del artículo 16) y establece una de las funciones que han de ser ejercidas por la Autoridad central del Estado de origen, de acuerdo con el sistema de distribución de responsabilidades y de cooperación previsto por el Convenio. Como en el artículo 15, la palabra " *considère*" de la primera línea del primer párrafo del artículo 16 ha de interpretarse teniendo en cuenta el texto inglés "...is satisfied" (núm. 293, *supra*).

Apartado a

308 La preparación de un informe acerca del niño es necesaria para establecer sus condiciones psico-sociales. Sólo a través del mismo puede tomarse una decisión adecuada respecto a la atribución de un niño a una familia, protegiendo de esta forma los intereses de todas las personas afectadas, el niño y los futuros padres adoptivos.

309 El apartado a reproduce el texto del proyecto (artículo 16, apartado a) pero en lugar de exigir únicamente información acerca de "su historia médica y la de su familia", especifica que el informe ha de contener información acerca de "su evolución personal y familiar, su historia médica y la de su familia". Esta formulación es la del artículo 7 del Convenio interamericano de 1984 sobre

los conflictos de leyes relativos a la adopción de menores y se incluyó en respuesta a la propuesta efectuada por el Reino Unido en el Documento de trabajo núm. 83, puesto que es mejor obtener el máximo de información se obtenga en esta etapa y porque la información médica puede ser relevante para un posterior tratamiento. Este apartado ha de relacionarse con el artículo 30, que asegura la conservación de la información acerca de los orígenes del niño, en particular respecto a la identidad de sus padres así como la historia médica del niño y de su familia y el acceso, en determinadas condiciones, del niño a dicha información.

310 El Documento de trabajo núm. 166, presentado por Argentina, que preveía información en relación a la religión no obtuvo el apoyo suficiente, pero ha de tenerse en cuenta que los elementos enumerados en el apartado a del artículo 16 son análogos a los que menciona el artículo 15 respecto a los futuros padres adoptivos. No se trata, por tanto, tampoco de una enumeración exhaustiva y el informe podrá contener toda otra información considerada pertinente por la Autoridad central del Estado de origen. En el nuevo apartado b se hace alusión al "origen religioso" y las últimas palabras del apartado a se refieren a "las necesidades particulares del niño", de forma que debieran mencionarse todas las características que lo diferencien, tales como la religión, la existencia de hermanos, cualquier minusvalía (psíquica o física) o la edad (Veáanse los comentarios sobre el párrafo i del artículo 15).

311 La preparación del informe prescrito por el apartado a no depende de la recepción de la solicitud presentada por los futuros padres adoptivos en el Estado de recepción. Se trata de una tarea que ha de realizarse, no porque haya determinados solicitantes esperando adoptar un niño, sino tan pronto como la Autoridad central del Estado de origen determine la existencia de un niño al que se protegería mejor mediante una adopción internacional. Ha de elaborarse una lista de niños adoptables a fin de permitir una atribución rápida del niño a sus futuros padres adoptivos y para asegurar que las colocaciones se efectúen lo antes posible y evitar todo retraso perjudicial al bienestar del niño.

312 El apartado a del artículo 16 ha de relacionarse con el artículo 22, párrafo 1 y, por tanto, el informe puede ser preparado por otras autoridades públicas u organismos acreditados, si así lo permite la ley de la residencia habitual del niño. No obstante, se haya o no otorgado tal autorización, ha de entenderse que la Autoridad central del Estado de origen puede recurrir a otras autoridades u organismos especializados para la verificación de la información que ha de contener el informe.

313 Además, se ha de tener en cuenta que, aunque un Estado contratante declare, de acuerdo con el párrafo 2 del

artículo 22, que las funciones que corresponden a la Autoridad central en virtud de los artículos 15 a 21 pueden ser ejercidas por organismos o personas no acreditados, los informes previstos en los artículos 15 y 16 se prepararán, en todo caso, bajo la responsabilidad de la Autoridad central o de otras autoridades, como establece el párrafo 1 del artículo 22.

Apartado b

314 El apartado *b* es nuevo y responde a la propuesta hecha por Egipto en el Documento de trabajo núm. 53, que expresó la necesidad de que el niño adoptado mantenga vínculos con su pasado y conozca sus orígenes, así como que se tengan en cuenta todos los elementos culturales, religiosos y étnicos, de acuerdo con lo que dispone el CDN. La propuesta gozó de un apoyo generalizado y se resaltó la importancia que reviste tratar este específico aspecto, a fin de evitar los problemas que, cuando están en juego aspectos culturales y étnicos, se han suscitado en relación a la aplicación del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. El Documento de trabajo núm. 179, presentado por el Comité de redacción, reprodujo la propuesta sin tomar partido acerca de si el precepto debía ubicarse en el Capítulo IV, que esencialmente se refiere a cuestiones procedimentales, o en el Capítulo II, como proponía Egipto.

315 No obstante el consenso entre los delegados, se señaló que la frase "se han tenido debidamente en cuenta" podía ser interpretada de forma tal que se produjera una discriminación del niño y se violara el Convenio de Naciones Unidas. El Presidente del Comité de redacción explicó, sin embargo, que la formulación se había tomado del Documento de trabajo núm. 53 y que tan solo se había añadido la palabra "debidamente", a fin de seguir en lo posible la redacción del artículo 29 CDN.

316 El apartado *b* ha de relacionarse con el párrafo 1 del artículo 22, de manera que la verificación de los consentimientos puede ser efectuada por otras autoridades públicas u organismos acreditados si así lo permite la ley del Estado de origen e incluso por organismos o personas no acreditados, de acuerdo con el párrafo 2 del propio artículo 22, pero siempre bajo la responsabilidad de la Autoridad central.

Apartado c

317 El apartado *c* reproduce el texto del proyecto (artículo 16, apartado *b*) y ha de relacionarse con el párrafo 1 del artículo 22 (*cfra.* núm. 316, *supra*).

Apartado d

318 El apartado d reproduce el texto del proyecto (artículo 16, apartado c) y, por tanto, exige tan solo que la Autoridad central determine si la colocación prevista, no la adopción, responde al interés superior del niño. Esto se produce después de la atribución del niño a sus futuros padres adoptivos (*matching*). Este procedimiento permite identificar entre los solicitantes aprobados, en virtud de los informes relativos al niño y a los futuros padres adoptivos, a los padres adoptivos que mejor pueden responder a las necesidades del niño. La importancia de este procedimiento de "atribución" (el término inglés "*matching*" no aparece en el Convenio porque no tiene equivalente en francés) se puso de relieve a lo largo de las negociaciones del Convenio. Naturalmente conviene resaltar que en esta etapa del procedimiento el Estado de origen no puede garantizar que los futuros padres adoptivos acepten la colocación puesto que el informe sobre el niño no ha sido todavía enviado al Estado de recepción. Tan solo después de que se reciba tal informe podrá tener lugar la verificación de tal extremo y de la capacidad y aptitud para adoptar de los futuros padres adoptivos en relación al niño que se les ha atribuido.

319 El apartado d ha de relacionarse con el párrafo 1 del artículo 22 (cfra. núm. 316, supra).

Párrafo 2

320 El inicio del párrafo 2 reproduce el texto del proyecto (artículo 16, segundo párrafo) al estipular que la Autoridad central del Estado de origen transmitirá a la Autoridad central del Estado de recepción su informe sobre el niño. Esta disposición ha de relacionarse con el párrafo 1 del artículo 22 (cfra. núm. 316, supra).

321 El párrafo 2 del artículo 16 ha de relacionarse con el artículo 19, párrafo 3, puesto que, si el desplazamiento no tiene lugar, el informe se devolverá a la autoridad que lo hayan expedido. Ha de relacionarse también con el artículo 30 sobre la conservación de datos y el acceso a los mismos, así como con el artículo 31 sobre la protección de datos.

322 De acuerdo con el texto del proyecto, la Autoridad central del Estado de origen debía también transmitir a la Autoridad central del Estado de origen "la motivación de la decisión tomada conforme al apartado c", es decir respecto a que la colocación prevista responde al interés superior del niño. Para aclarar esta disposición, el Documento de trabajo núm. 68, presentado por Austria, propuso que se añadiera que "los consentimientos obtenidos de acuerdo con el artículo 5 [4 del Convenio] se comunica-

rían también a la Autoridad central"; Alemania en el Documento de trabajo núm. 70 especificaba que se comunicaría " la prueba del consentimiento" (apartado b); y el Documento de trabajo núm. 97, presentado por Francia, proponía que se exigiera la transmisión de "los documentos relativos a los consentimientos previstos en apartado c y los motivos de la decisión acerca de la colocación a los que se refiere el apartado d". Teniendo en cuenta estas propuestas se enmendó el segundo párrafo del artículo 16 exigiendo " la prueba de que se han obtenido los consentimientos y la motivación de la decisión relativa a la colocación". Ha de entenderse que cuando se alude a la obtención de los consentimientos, ello quiere también decir, de manera implícita que éstos no han sido revocados de forma válida. Se prefirió la palabra "prueba" a "certificación" o al término inglés "evidence", porque este último tiene un significado técnico en los países de *Common Law*.

323 En el Documento de trabajo núm. 11, presentado por Bélgica, se propuso la adición al artículo 16 de la siguiente frase: " si en el Estado de origen la identidad del padre o la madre del niño no pueden revelarse, este informe no mencionará su identidad". Esta propuesta se aprobó. Si ha de protegerse la identidad de los padres no será posible remitir una copia del consentimiento paternal. En ese caso, la ley del Estado de recepción, en el cual haya de constituirse la adopción, decidirá si es o no suficiente una certificación de los consentimientos otorgada por la Autoridad Central del Estado de origen, que no identifique a los padres.

Artículo 17

Frase introductoria

324 La regulación establecida por el Convenio responde a la propuesta formulada en el Documento de trabajo núm. 39, presentado por la delegación de Irlanda, que resaltaba la importancia de mantener una distinción clara entre (a) las condiciones para la constitución de la adopción, (b) las condiciones para la colocación del niño, y (c) las condiciones para el desplazamiento del niño desde el Estado de origen al Estado de recepción. El artículo 17 determina de manera expresa las condiciones para la colocación; los requisitos de la adopción se regulan implícitamente en el párrafo c, y el párrafo 1 del artículo 19 prevé las condiciones necesarias para el desplazamiento, sin perjuicio de que se produzca antes o después de la atribución del niño a sus futuros padres adoptivos.

325 Las principales características del artículo 17 se expresaban en el Documento de trabajo núm. 162 presentado por el grupo *ad hoc* constituido para examinar los artículos 6, 7 y 17 del proyecto. La regulación propuesta

intenta tener en cuenta y proteger, de manera realista y flexible, los intereses fundamentales del niño y de los Estados principalmente afectados, el Estado de origen y el Estado de recepción. Se tuvieron, por tanto, en cuenta las diferencias que pueden existir entre las distintas modalidades de colocación, puesto que en determinados países, como la India, la decisión acerca de la colocación del niño tiene un carácter muy formal, mientras que otros Estados no exigen una decisión formal y dicha decisión corresponde a una agencia. El grupo reconoció, asimismo, que en los casos en los que la colocación precede a la adopción (el caso más común) en el momento de la colocación sólo se llega a un arreglo provisional, puesto la decisión final sólo se produce al final del procedimiento de adopción. Por esta razón, puede suscitarse un problema, que el Convenio no resuelve, cuando las autoridades administrativas consideran que no existe ningún obstáculo a la adopción y el tribunal juzga la cuestión de manera distinta.

326 El delegado de Irlanda explicó, en nombre del grupo *ad hoc*, el funcionamiento de la regulación propuesta en el Documento de trabajo núm. 162 de la manera siguiente: " Los procedimientos relativos a la colocación del niño con los futuros padres adoptivos y las condiciones que han de cumplirse entran en juego necesariamente antes de que se produzca la decisión de adopción, excepto en el supuesto de que ambos sean simultáneos. Todas las condiciones de la colocación han de cumplirse, por tanto, o bien antes, o bien en el momento de la adopción. De forma análoga, todas las condiciones para el desplazamiento del niño han de satisfacerse antes del desplazamiento, antes o en el momento de la adopción". Añadió que por "condiciones" entendía las condiciones de procedimiento que han de cumplirse y no las condiciones de forma que vinculan al juez que ha de constituir la adopción (Actas núm. 14).

327 La frase introductoria del artículo 17 difiere del texto que figura en el proyecto (frase introductoria del artículo 17), no sólo porque se trata de "confiar" al niño a sus futuros padres adoptivos en lugar de proceder a su "colocación", sino también porque se aplica a toda decisión relativa a esta cuestión, porque tan sólo se refiere a las decisiones tomadas en el Estado de origen y, adicionalmente, porque se ha suprimido la referencia expresa a "su adopción".

328 El grupo *ad hoc* decidió sustituir la palabra "colocación" utilizada en el artículo 17 del proyecto para evitar toda posible confusión, habida cuenta de sus diferentes significados: en inglés "*placement*" se refiere a la entrega física del niño a una persona, mientras que en francés "*placement*" puede entenderse en sentido tanto fáctico como jurídico, es decir, como transferencia de la custodia del niño a los futuros padres adoptivos. A pesar de que, a lo largo de toda la Conferencia, determinadas delegaciones insistieron en insertar la palabra "coloca-

ción" en el artículo 17 y en otros lugares del Convenio, se mantuvo la redacción actual ("confiar al niño a los futuros padres adoptivos") en aras de la claridad y porque ofrece la ventaja de que quien no entienda su significado exacto se informará y obtendrá así una explicación satisfactoria.

329 La decisión a la que se refiere la frase introductoria del artículo 17 ha de ser tomada por las autoridades del Estado de origen, no necesariamente por la Autoridad central, puesto que puede corresponder a una autoridad administrativa o judicial. Por tanto esta disposición ha de relacionarse con el apartado c del artículo 36, en caso de un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

Apartado a

330 El apartado a del artículo 17 reproduce el texto del proyecto (artículo 17, apartado a) y no precisa de ningún comentario ulterior, puesto que el niño sólo puede ser confiado a los futuros padres adoptivos con su acuerdo. La verificación que se exige ha de abarcar también al consentimiento del cónyuge, en el supuesto de que una persona casada sea la adoptante, y puede ser efectuada por autoridades públicas u organismos acreditados distintos de la Autoridad central, e incluso por organismos o personas no acreditados, si, de acuerdo con lo previsto en los párrafos 1 y 2 de artículo 22, la ley del Estado de origen lo permite.

Apartado b

331 El artículo 17, apartado b, del proyecto exige que la colocación del niño con sus futuros padres adoptivos no tenga lugar sin el acuerdo de las Autoridades centrales de ambos Estados, el Estado de origen y el Estado de recepción. Esta duplicidad fue criticada por los Estados Unidos y en el Documento de trabajo núm. 10 se propuso su modificación para exigir el consentimiento de la Autoridad central del Estado de recepción, únicamente si éste lo requiere, puesto que, en la redacción del proyecto, dicho consentimiento es necesario "no tan solo cuando la adopción ha de tener lugar en el Estado de recepción, sino también cuando la adopción se produce en el Estado de origen e incluso cuando el Estado de recepción no tiene interés alguno en revisar la decisión de las autoridades del Estado de origen".

332 La propuesta de Estados Unidos halló apoyo, pero también suscitó una fuerte oposición. Los argumentos a favor y en contra provenían tanto de delegaciones de Estados de origen como de Estados de recepción. Por un lado, se dijo que era poco "inteligente" obligar al Estado

de recepción a participar en el procedimiento de atribución del niño a los futuros padres adoptivos; se negó, asimismo, que el Estado de recepción no ejerciera control alguno sobre la colocación, si se atribuyera a su acuerdo un carácter facultativo. Por otro lado, se resaltó la importancia de la participación del Estado de recepción en el proceso de atribución del niño a sus futuros padres adoptivos, aunque dicha tarea pueda resultar pesada, argumentándose que permitir al Estado de recepción liberarse de la misma favorecería el mantenimiento de los abusos existentes.

333 Como no pudo llegarse a acuerdo alguno, se propusieron distintas soluciones de compromiso consistentes en exigir, como norma, el acuerdo del Estado de recepción, pero con las siguientes excepciones: (a) "salvo que la ley del Estado de recepción no lo requiera" (Documento de trabajo núm. 162, presentado por el grupo *ad hoc*); (b) salvo que las leyes de ambos Estados no exijan tal acuerdo (Documento de trabajo núm. 175 presentado por Colombia, Australia, el Reino Unido y Filipinas); y (c) salvo que las autoridades competentes de ambos Estados hubieran declarado ante el depositario del Convenio que tal acuerdo es innecesario (Documento de trabajo núm. 182, presentado por el Reino Unido, Colombia, Filipinas, México, Australia y Uruguay).

334 Poco antes de finalizar la segunda lectura, se hizo un gran esfuerzo y se llegó a un compromiso, basado en la propuesta realizada en el Documento de trabajo núm. 198, presentado por el Reino Unido, Colombia, Perú, Australia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos de América, Irlanda, Países Bajos, Canadá, Dinamarca, Bulgaria, México, Rumanía, Suecia y Uruguay, que proponía la siguiente redacción del apartado b: "si la Autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si tal aprobación es exigida: (i) por la ley de dicho Estado, o (ii) por la Autoridad central del Estado de origen". Finalmente, tras efectuar el Comité de redacción ciertos retoques lingüísticos, se aprobó el apartado b, lo que, sin duda, refleja un fortísimo deseo de llegar a un compromiso razonable.

Apartado c

335 El apartado c exige el acuerdo de las Autoridades centrales de ambos Estados para que "se siga el procedimiento de adopción". El término "seguir" significa que la adopción podrá entrar en la etapa siguiente del procedimiento hacia su finalización. Se trata, por tanto, de una noción más amplia que la expresada por las palabras "confiar", "colocación" o "desplazamiento", pero que no abarca a la decisión final de constitución de la adopción.

336 El acuerdo previsto en el apartado c no garantiza la constitución de la adopción puesto que ésta depende de que se reúnan todas las condiciones exigidas por la ley aplicable, determinada por las normas de conflicto del Estado de origen y del Estado de recepción, dependiendo de dónde tenga lugar la adopción.

337 El artículo 7, apartado a del proyecto requiere que las autoridades competentes de ambos Estados verifiquen que no existe ningún "impedimento" para la adopción, pero el grupo *ad hoc* consideró que esta formulación iba demasiado lejos, habida cuenta de las dificultades prácticas que entraña tal determinación y porque ésta no vincula al tribunal que ha de pronunciar la decisión final sobre la adopción. No obstante, el grupo *ad hoc* consideró necesaria la inclusión de una disposición que permitiera a ambos Estados, el Estado de origen y el Estado de recepción, detener una adopción si a ambos les parece que existen obstáculos jurídicos de peso. Por esta razón, se incluyó el apartado c: éste regula implícitamente las condiciones de la adopción, puesto que si uno de ambos Estados considera que existe un impedimento, la Autoridad central del Estado de origen o del Estado de recepción tendrá la facultad de negar su acuerdo a que se siga el procedimiento de adopción y el procedimiento se interrumpirá.

338 El grupo *ad hoc* ejemplificó de la siguiente forma la idea que inspira el apartado c: "si una adopción prevista se considerará aceptable en el Estado de origen, pero existieran dificultades jurídicas en el Estado de recepción, en relación a la edad del niño o a la diferencia de edad entre el niño y los futuros padres adoptivos, el Estado de recepción podría intervenir en este momento y manifestar su oposición a que se siga el procedimiento" (Actas núm. 14). El mismo razonamiento se aplica si el Estado de recepción impone un período probatorio posterior a la adopción realizada en el Estado de origen antes de reconocerla; el apartado c se ocupa, por tanto, del problema al que se refería el artículo 23 del proyecto y que con la supresión de dicho precepto no es resuelto directamente por el Convenio.

339 El apartado c ha de relacionarse con el artículo 23, párrafo 1, segunda frase.

Apartado d

340 El apartado d sólo exige al Estado de origen que constate que las autoridades del Estado de recepción han determinado, de acuerdo con el artículo 5, que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción. No obstante, el Estado de origen también puede controlar esta determinación y asegurarse de que los futuros padres adoptivos han sido

convenientemente asesorados, de acuerdo con lo previsto en el apartado b del artículo 5. antes de dar su acuerdo a la continuación de la adopción conforme a lo dispuesto en el apartado c.

341 La constatación que exige el apartado d tan solo remite al apartado a del artículo 5, que establece, en términos abstractos, las condiciones que han de reunir los futuros padres adoptivos. Sin embargo, a pesar de que no se diga de manera expresa, se habrá de tener presente la adopción concreta antes de tomar la decisión de confiar a un niño a sus futuros padres adoptivos.

342 El apartado d no prevé expresamente que la comprobación corresponda a la Autoridad central y, por ello, esta tarea podrá ser realizada por las autoridades competentes del Estado de origen. En consecuencia esta disposición ha de relacionarse con el apartado c del artículo 36 en caso de un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

Artículo 18

343 El artículo 18 reproduce el texto del proyecto (artículo 18, frase introductoria), aunque algunos participantes en la Comisión especial lo consideraron innecesario porque reitera el requisito establecido en el apartado c del artículo 5. El artículo 18 es, sin embargo, de mayor amplitud, puesto que también regula la obtención del permiso para que el niño salga del Estado de origen de forma que el niño no permanezca en un "tierra de nadie".

344 Aunque no se diga expresamente, ha de interpretarse que el artículo 18 no entrará en juego cuando no sean necesarios dichos permisos, como ocurre entre los Estados de la Unión europea.

345 El artículo 18 ha de relacionarse con el artículo 22, párrafos 1 y 2. Pueden, por tanto, tomar las medidas necesarias otras autoridades públicas u organismos acreditados e incluso organismos y personas no acreditados, si así lo permiten las reglas del Convenio y lo autoriza la ley de cada Estado contratante.

346 El Documento de trabajo núm 85, presentado por Costa Rica y El Salvador, propuso que se añadiera después de "Estado de origen" la frase siguiente: "si lo permite la ley del Estado de origen". Se consideró, sin embargo, innecesario porque esta idea ya se encuentra en el artículo 18.

Artículo 19

Párrafo 1

347 El artículo 7 del proyecto exigía que antes de cualquier desplazamiento del niño, las autoridades competentes del Estado de origen y del Estado de recepción: (a) "certificaran que no existe impedimento alguno a la adopción según las leyes de sus respectivos Estados", y (b) [aceptaran] que el niño fuera confiado a los futuros padres adoptivos". Dada la importancia del tema, se creó un grupo de trabajo especial para examinar las diversas propuestas en relación a los artículos 6, 7 y 17 del proyecto y tras un examen exhaustivo de la cuestión se llegó a la conclusión de que los requisitos del desplazamiento del niño deberían ser los mismos que se prevén para su atribución a los futuros padres adoptivos. El Documento de trabajo núm. 162 presentó formalmente esta propuesta, que fue aprobada sin ulterior discusión, puesto que se estimó que el desplazamiento del niño puede tener lugar antes o después de la adopción y también cierto tiempo antes o después de la atribución del niño a sus futuros padres adoptivos.

Párrafo 2

348 El segundo párrafo del artículo 19 reproduce el texto del proyecto (artículo 18, segunda frase) y se mantuvo por su importancia práctica, a pesar de que puede considerarse implícito en el artículo 21, apartado e del CDN, que dispone que los Estados parte "se esforzaran ...por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes". El Convenio de Naciones Unidas impone, por tanto, a los Estados parte la obligación de tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar que el desplazamiento del niño al Estado de recepción tenga lugar en circunstancias seguras y adecuadas.

349 Se propusieron algunas enmiendas para reemplazar la expresión "cuando sea posible" del párrafo 2 del artículo 19. El Documento de trabajo núm. 80, presentado por Madagascar, propuso que se utilizará la fórmula "si lo prevé la ley del Estado de origen" y recordó las diversas normas recientemente promulgadas en respuesta a las denuncias hechas en los medios de comunicación internacionales en relación a la salida ilegal de niños de Madagascar. El Documento de trabajo núm. 87, presentado por Bolivia, propuso que se dijera: "necesariamente en compañía de los padres adoptivos".

350 La cuestión volvió, por tanto, a suscitarse, a pesar de que en la Comisión especial se había llegado a un compromiso basado en una amplia mayoría que estimó que el desplazamiento del niño se efectúa en mejores condiciones si es acompañado por sus padres adoptivos en caso de que

la adopción haya de tener lugar, bien en el Estado de origen bien en el Estado de recepción, tras el desplazamiento. No obstante, se añadieron, por consenso, las palabras "cuando sea posible" teniendo en cuenta que, en determinados casos, este requisito puede ser de difícil cumplimiento, porque resulta demasiado caro o por alguna otra razón de hecho o de Derecho.

351 Las propuestas de Madagascar y Bolivia no fueron aprobadas en virtud de la solución de compromiso a la que se había llegado previamente y para no modificar prácticas existentes y el derecho de numerosos Estados de origen y de recepción. La cuestión se suscitó, sin embargo, de nuevo en segunda lectura. El Documento de trabajo núm. 127, presentado por Italia, propuso que los futuros padres adoptivos acompañaran al niño "si la Autoridad central de uno de ambos Estados lo requiere" y en el Documento de trabajo núm. 152, presentado por Madagascar, se preveía "si la Autoridad central del Estado de origen lo exige". No hubo, sin embargo, el apoyo suficiente para que se reconsiderara este artículo.

Párrafo 3

352 El tercer párrafo se incluyó en el Convenio para dar respuesta a la idea que inspiró el Documento de trabajo núm. 70, presentado por Alemania, que propuso la adición de un nuevo párrafo para tener en cuenta la nueva legislación alemana sobre protección de datos: "Si la adopción no tiene lugar, los informes a los que se refieren los artículos 15 y 16 serán devueltos a la otra autoridad que los destruirá al cabo de (tres) años". Las palabras " si la adopción no tiene lugar" se consideraron demasiado vagas y se reemplazaron por "si no se produce el desplazamiento". Además, se criticaron las palabras " que los destruirá al cabo de (tres) años" y finalmente se decidió suprimirlas.

Artículo 20

353 El artículo 20 reproduce el texto del proyecto (artículo 19) y, aunque puede ser considerado una repetición del apartado *b* del artículo 9, se incluyó como disposición independiente porque la información recíproca es muy importante, en especial porque permite al Estado de origen estar al corriente acerca del progreso del procedimiento de adopción. Esta misma razón explica las disposiciones análogas que pueden hallarse en ciertos acuerdos bilaterales acerca de la adopción internacional.

354 El artículo 20 está formulado en términos generales y se refiere, por tanto, al conjunto de las informaciones, que son necesarias con anterioridad a la concesión de la adopción, bien en el Estado de origen bien en el Estado de recepción.

355 El Documento de trabajo núm. 85, presentado por Colombia, Costa Rica y El Salvador, propuso, sin que prosperara, que se suprimiera la frase "así como sobre el desarrollo del periodo probatorio, si fuera requerido" y se sustituyera por " así como sobre el desarrollo del periodo probatorio, si éste es permitido por la ley del Estado de origen". Se rechazó la supresión propuesta, porque obligaría al Estado de recepción a reconocer una adopción concedida en el Estado de origen, aunque no hubiera transcurrido el periodo probatorio. Se resaltó además la importancia del periodo probatorio y se consideró contraria a los objetivos del Convenio, es decir, a "la instauración de un sistema de cooperación entre los Estados contratantes" y a la armonización de las condiciones prescritas por cada uno de los Estados interesados, la ausencia de toda referencia al mismo.

356 A solicitud del delegado australiano, debe precisarse que el "periodo probatorio" al que se refiere el artículo 20 no es el previsto en el artículo 23 del proyecto, que se refería a una situación distinta, cual es la del periodo probatorio posterior a la adopción que se desarrollaría en el Estado de recepción como condición para el reconocimiento de la adopción, una posibilidad que el Convenio no admite. Por el contrario, el periodo probatorio del artículo 20 se refiere a un periodo posterior a la colocación del niño, pero anterior a su adopción, en el que se prevén servicios para asegurar la adaptación y la integración del niño con sus futuros padres adoptivos así como la comprobación de que las relaciones emocionales permiten una unión legal. Este periodo probatorio ha de entenderse con referencia al artículo 21, cuando el niño se desplace al Estado de recepción en vistas de la adopción.

Artículo 21

Párrafo 1

Frase introductoria

357 La frase introductoria del párrafo 1 reproduce el texto del proyecto (artículo 20, primer párrafo); se refiere a la situación creada cuando, a pesar de las precauciones previstas en el propio Convenio antes de confiar al niño a sus futuros padres adoptivos y desplazarlo al Estado de recepción para un periodo probatorio anterior a la adopción, resulta que el mantenimiento del niño con los futuros padres adoptivos en dicho Estado no responde a su interés superior. El artículo 21 prevé ciertas medidas destinadas a proteger al niño, tanto si la adopción ha de constituirse en el Estado de recepción como si, excepcionalmente, ha de realizarse en el Estado de origen.

358 El artículo 21 no regula expresamente el supuesto en el cual el niño permanece en el Estado de origen. No obstante, ha de entenderse que, si las autoridades competentes de dicho Estado concluyen que el mantenimiento del niño con los futuros padres adoptivos es manifiestamente contrario a su interés superior, tomarán todas las medidas necesarias para protegerlo.

359 El párrafo 1 del artículo 21 ha de relacionarse con el párrafo 1 del artículo 22 y, por tanto, esta función puede ser desempeñada por autoridades públicas distintas de la Autoridad central o por organismos o personas no acreditados, si así lo permite la ley del Estado de residencia habitual de los futuros padres adoptivos.

360 El artículo 21 sólo se aplica si no se ha constituido todavía la adopción, pero el niño ha sido confiado a sus futuros padres adoptivos y desplazado al Estado de recepción. No se aplica, por tanto, a los supuestos en los que el Estado de origen no permite el traslado del niño al Estado de recepción antes de que tenga lugar la adopción.

Apartado a

361 El apartado a del párrafo 1 del artículo 21 reproduce el texto del proyecto (apartado a del artículo 20), introduciéndose modificaciones lingüísticas consistentes en añadir la palabra "to" antes de la palabra "arrange" en el texto inglés.

362 No hay duda alguna acerca de que la primera medida a tomar para proteger al niño en el Estado de recepción cuando fracasa la colocación es la de retirarlo de las personas que desean adoptarlo. La formulación del apartado a es de carácter descriptivo e intenta precisar la finalidad que se persigue, es decir, la de poner fin a la situación, evitando toda referencia a nociones legales, como "custodia", que pueden suscitar serios problemas interpretativos en ciertos países.

363 El apartado a especifica que la Autoridad central del Estado de recepción tomará las medidas necesarias para ocuparse de su "cuidado provisional", subrayando así la emergencia de la situación y dejando abierta la cuestión de cómo se organizará dicho cuidado provisional. El Documento de trabajo núm. 103, presentado por España, propuso que se confiara al niño al "cuidado de una autoridad u organismo público del Estado de recepción", pero dicha propuesta no prosperó, puesto que se puso de relieve que se suele confiar al niño a una familia de acogida no necesariamente interesada en la adopción.

Apartado b

364 La primera parte del apartado b reproduce el texto del proyecto (artículo 20, apartado b) y establece que la Autoridad central del Estado de recepción tomará las medidas necesarias para proteger al niño "en consulta con la Autoridad central del Estado de origen (para) asegurar sin dilación una nueva colocación del niño en vistas a su adopción".

365 La palabra "colocación" utilizada por el apartado b significa lo mismo que "confiar al niño" en el artículo 17 (Veáse *supra*, núm. 328)

366 La redacción de las primeras líneas del apartado b es algo contradictoria y suscita los mismos comentarios que el texto del proyecto (Informe de la Comisión especial, núm. 242), puesto que prevé que la colocación ha de arreglarse "sin dilación" pero en consulta con la Autoridad central del Estado de origen. Esta última condición puede tener efectos dilatorios y entrañar una situación de incertidumbre para el niño así como significar el retraso de las medidas necesarias para proteger el interés superior del niño. Pero como el niño todavía no ha sido adoptado, se creyó necesario consultar con el Estado de origen, evitando, gracias al sistema de cooperación ya instaurado, que el niño se halle en "tierra de nadie".

367 Problemas análogos se suscitan en relación a la segunda parte del apartado b, que prevé que la adopción sólo podrá tener lugar si la Autoridad central del Estado de origen ha sido debidamente informada sobre los nuevos padres adoptivos. No se zanjó, sin embargo, la cuestión de si el Estado de origen ha de dar su acuerdo expreso a la nueva atribución y colocación, como prevé el artículo 17.

368 Según la delegación española, las condiciones y garantías de la segunda colocación deberían ser las mismas que las existentes en relación a la primera. Para evitar una situación de "tierra de nadie" debería ser posible la adopción en el Estado de recepción, si en un plazo determinado el Estado de origen no manifiesta ninguna oposición. Por tanto, los Documentos de trabajo núms. 103 y 168, presentados por dicha delegación, propusieron el siguiente texto: "informar debidamente a la Autoridad central del Estado de origen sobre los nuevos padres adoptivos para permitirles manifestar su consentimiento en un plazo de tiempo razonable (un plazo que no supere los tres meses). (Si no hay oposición durante este periodo, podrá tener lugar la adopción en el Estado de recepción)." Esta propuesta no fue, sin embargo, adoptada.

369 La delegación de Polonia defendió un punto de vista distinto, entendiendo que las formalidades de la segunda adopción deberían simplificarse, y, por tanto,

propuso, en el Documento de trabajo núm. 107, sin que prosperara su propuesta, que al final del apartado b se añadieran las siguientes palabras " y ha constatado que no hay impedimento a la adopción del niño por parte de los nuevos padres adoptivos".

370 El Documento de trabajo núm. 21, presentado por Defensa de los Niños- internacional y el Servicio Social internacional, con el apoyo de los Países Bajos, propuso añadir al final del apartado b las siguientes palabras "o, en su defecto, una colocación alternativa de carácter duradero". La idea que inspira esta propuesta, que fue aceptada por la reunión, fue extender el ámbito de aplicación del artículo 21 a fin de incluir aquellas situaciones en las que es inadecuada, tanto una colocación en vistas a la adopción, como el retorno, de acuerdo con lo previsto en el apartado c, del niño al Estado de origen, porque el niño precisa, por ejemplo, de tratamientos o atención especializada.

Apartado c

371 El artículo 21, apartado c, reproduce el texto del proyecto (artículo 20, primer párrafo, apartado c) con la precisión de que la decisión de retornar al niño a su Estado de origen sólo puede ser tomada " si su interés lo exige", tal y como propuso el Documento de trabajo núm. 98, presentado por Francia. Han de agotarse todas las medidas para encontrar una solución alternativa en el Estado de recepción y la permanencia del niño en ese Estado no ha de responder ya a su bienestar e interés.

Párrafo 2

372 El párrafo 2 del artículo 21 reproduce el texto del proyecto (artículo 20, segundo párrafo) y tiene en cuenta el contenido del artículo 12 CDN, repitiendo por tanto las ideas expresadas en el apartado d del artículo 4.

Artículo 22

373 Las denominadas adopciones "privadas" o "independientes" se discutieron extensamente en la Comisión especial, cuando se examinaron en profundidad los argumentos en favor y en contra (Informe de la Comisión especial, núms. 249-256). La solución que se aprobó representa un compromiso razonable entre posiciones antagónicas. Por un lado, permite que ciertos organismos e individuos no acreditados ejerzan las funciones atribuidas a la Autoridad central por los artículos 15 a 21 (y confirmadas por el Convenio), si cumplen ciertas normas mínimas antes de ser autorizados a intervenir, pero, por otro lado, los Estados

contratantes no están obligados a aceptar la participación de organismos y personas no acreditados, si hacen una declaración expresa en tal sentido. Los Estados contratantes pueden, por tanto, adoptar la postura que consideren mejor o bien permaneciendo en silencio (lo cual indica su aceptación) o bien declarando su oposición a tal participación.

Párrafo 1

374 El párrafo 1 del artículo 22 reproduce el texto del proyecto (artículo 21, primer párrafo) y expresa la idea de que las reglas de procedimiento deben ser lo suficientemente flexibles como para asegurar el mejor funcionamiento posible del Convenio. Por ello no se consideró aconsejable imponer a las Autoridades centrales la obligación de desarrollar las diversas tareas que les atribuye el Capítulo IV y se decidió dejar a los Estados contratantes la decisión sobre esta tan importante cuestión. Por esta razón, el párrafo 1 del artículo 22 acepta la posibilidad de que el Estado contratante delegue, en la medida permitida por la ley aplicable, el cumplimiento de sus obligaciones a otras autoridades públicas u organismos acreditados según las normas del Capítulo III.

375 Esta disposición no es estrictamente necesaria si se tiene en cuenta que las funciones relativas a cuestiones procedimentales asignadas a las Autoridades centrales de acuerdo con el Capítulo IV no se incluyen entre las mencionadas en el artículo 7, que han ser ejercitadas directamente por la Autoridad central, ni entre las que, según el artículo 8, tan solo pueden ser delegadas a otras autoridades públicas. Estas funciones pertenecen, por tanto, al ámbito de aplicación del artículo 9, que permite a la Autoridad central actuar, bien directamente, bien a través de otras autoridades públicas u otros organismos acreditados, en la medida permitida por la ley aplicable. No obstante, se incluyó el párrafo 1 del artículo 22 a fin de evitar malentendidos, en particular porque los párrafos segundo, cuarto y quinto establecen una regulación especial acerca de determinadas actividades que pueden ser desarrolladas por determinados organismos o personas no acreditados.

376 El delegado de Italia hizo notar que el texto de los artículos 8, 9 y 22 no es el mismo. De hecho, el artículo 8 permite a las autoridades centrales tomar las medidas necesarias con la cooperación de autoridades públicas y el artículo 9 con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos acreditados, lo que pone de manifiesto que la Autoridad central es responsable de las medidas tomadas por los organismos delegados. El artículo 22, párrafo 1, por el contrario, dice que las funciones asignadas a la Autoridad central por el Capítulo IV pueden ser ejercitadas por autoridades públicas o por organismos

acreditados, utilizándose la misma expresión en el párrafo 2 en relación a organismos y personas no acreditados. A pesar de esta diferencia formal, el texto del artículo 22 debe ser entendido de la misma forma, es decir, que ha de haberse producido una delegación.

377 El párrafo 1 del artículo 22 ha de relacionarse con los apartados c y d del artículo 36 para determinar las autoridades competentes, las autoridades públicas u organismos acreditados en caso de que un Estado contratante tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

Párrafo 2

378 El párrafo 2 del artículo 22 reproduce el texto del proyecto (artículo 21, primera parte del segundo párrafo); admite una posibilidad restringida de adopciones "independientes" o "privadas" y autoriza a cada Estado contratante a declarar que las funciones procedimentales asignadas a la Autoridad central por los artículos 15 a 21 pueden también ser ejercidas, pero sólo en ese Estado, por personas u organismos distintos a las autoridades públicas y los organismos acreditados conforme al Capítulo III. El párrafo 2 es, por tanto, más restrictivo que el proyecto, porque se excluye de manera expresa al artículo 14, de acuerdo con lo propuesto en el Documento de trabajo núm. 170, presentado por Italia y los Estados Unidos de América.

379 Además, el párrafo 2 se ve igualmente restringido por el párrafo 5 del propio artículo 22 que establece que "los informes previstos en los artículos 15 y 16 se prepararán, en todo caso, bajo la responsabilidad de la Autoridad Central o de otras autoridades u organismos de acuerdo con el párrafo 1".

380 El párrafo 2 del artículo 22 ha de relacionarse con el apartado d del artículo 48, lo que significa que los Estados contratantes deben notificar al depositario la delegación hecha a organismos y personas no acreditados para su ulterior difusión entre los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, los demás Estados participantes en la Decimoséptima Sesión y los Estados que se hayan adherido al Convenio.

381 El párrafo 2 no establece ningún límite de tiempo para la declaración. Puede, por tanto, realizarse en cualquier momento y, aunque no se diga expresamente, puede ser también retirada, mediante notificación al depositario, en cualquier momento.

382 El párrafo 2 exige una declaración expresa del Estado contratante para que los organismos y personas no acreditados puedan ejercitar las funciones atribuidas a las Autoridades centrales en virtud de los artículos 15 a 21.

El silencio del Estado contratante ha de interpretarse como una negativa de dicho Estado a la intervención de estos organismos y personas no acreditados en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Autoridad central.

383 Los apartados a y b imponen determinados requisitos que necesariamente han de cumplir los organismos y personas no acreditados para ser autorizados a ejercitar las funciones asignadas a las Autoridades centrales por los artículos 15 a 21; al tratarse tan solo de requisitos mínimos, todo Estado contratante está autorizado a establecer condiciones adicionales, a controlar las actividades de dichos organismos y personas y a determinar la extensión de las funciones que pueden ejercitar.

384 Los organismos y personas no acreditados están "bajo el control de las Autoridades competentes" del Estado que hace la declaración del párrafo 2. Este control comprenderá el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Convenio, en particular, la prohibición de derivar beneficios financieros u de otro tipo de las actividades relacionadas con la adopción internacional, así como el respeto a las condiciones establecidas por los párrafos a y b del artículo 22.

385 Los Documentos de trabajo núms. 82 y 83, presentados por Australia y el Reino Unido, respectivamente, propusieron la supresión de las palabras "bajo el control de las Autoridades competentes de dicho Estado" y su sustitución por la frase "bajo el control de las autoridades competentes del Estado en el que se desarrolle cualquier actividad relativa a la adopción internacional". Esta propuesta no tuvo, sin embargo, éxito, si bien la idea que la inspira está ya implícita en el texto que fue finalmente aprobado.

Apartado a

386 El apartado a reproduce el texto del proyecto (artículo 21, final del segundo párrafo) y establece que los organismos y personas no acreditados deben cumplir las condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia y responsabilidad exigidas por el Estado que efectúa la declaración. Como ya hemos visto, se trata de requisitos mínimos y todo Estado contratante está, por tanto, autorizado a establecer condiciones adicionales.

Apartado b

387 El apartado b es nuevo y responde a la propuesta hecha por Australia, los Estados Unidos y el Reino Unido en los Documentos de trabajo núms. 82, 121 y 136 que pretendían asegurar la coherencia entre la regulación sobre los organismos acreditados (apartado b del artículo 11) y la regulación sobre los organismos y personas no acredita-

dos. No se consideró suficiente exigir que estén "especializados", porque en muchos países las profesiones tienen su propia reglamentación, en especial por lo que respecta a la práctica y a la deontología.

388 El Documento de trabajo núm. 196, presentado por Nepal, propuso añadir la noción de "moralidad" entre los requisitos del artículo 22, pero la propuesta no obtuvo el suficiente apoyo para ser considerada de acuerdo con lo establecido en las reglas de procedimiento. Sin embargo, como ya hemos señalado anteriormente, las condiciones establecidas en el apartado b son requisitos mínimos por lo que cada Estado contratante está autorizado a establecer condiciones adicionales.

389 No obstante la preocupación por la coherencia, hay que señalar que las reglas establecidas por el Convenio en relación a los organismos acreditados no son exactamente las mismas que las relativas a organismos y personas no acreditados, porque estos últimos no tienen que cumplir la condición establecida por el apartado a del artículo 11, que consiste en "perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los límites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado".

Párrafo 3

390 El párrafo 3 del artículo 22 se introdujo como consecuencia de una propuesta hecha por Francia en el Documento de trabajo núm. 99, enmendado en el sentido de que la información no ha de ser comunicada al depositario sino a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, a fin de conseguir una mayor flexibilidad y para no hacer más pesado el texto del Convenio. Esta regla es análoga a la prevista por el artículo 13 en relación a los organismos acreditados.

391 A pesar de que no se establece de manera expresa, la finalidad de dicha notificación es permitir a la Oficina Permanente difundir la información recibida a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya y a los Estados parte del Convenio.

392 No obstante la regla establecida en el párrafo 3 del artículo 22, ha de entenderse que la violación de la obligación de informar a la Oficina Permanente no afecta a la adopción, pero puede dar lugar a una queja conforme al artículo 33.

Párrafo 4

393 El párrafo 4 del artículo 22 reproduce el texto del proyecto (artículo 21, tercer párrafo) de manera que la declaración exigida ha de efectuarse ante el depositario del Convenio.

394 A pesar de que no se prevea de manera expresa, no debería existir ninguna duda en relación a la posibilidad de retirar, en cualquier momento, la declaración hecha de acuerdo con el párrafo 4. La retirada se notificará al depositario.

395 El Documento de trabajo núm. 99, presentado por Francia, propuso invertir el orden de las soluciones establecidas en los párrafos 2 y 4, enmendando el párrafo 2 como sigue: "Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las adopciones de niños cuya residencia habitual esté establecida en su territorio podrá también tener lugar si las funciones de la Autoridad central se ejercen de acuerdo con el segundo párrafo". La idea que inspira esta propuesta es resaltar que han de preferirse las adopciones efectuadas con el concurso de la Autoridad central. Los Estados contratantes sólo realizarían una declaración positiva si estuvieran de acuerdo con la delegación permitida en el segundo párrafo, interpretándose el silencio como una oposición a dicha delegación. No obstante, como el compromiso conseguido se refería a una cuestión delicada, la propuesta no obtuvo el apoyo suficiente para ser tomada en consideración en segunda lectura.

396 Por esta razón, de acuerdo con el párrafo 4, el silencio de un Estado contratante ha de interpretarse como aceptación de que las adopciones internacionales de niños, cuya residencia habitual esté situada en su territorio, puedan también tener lugar si las funciones atribuidas a la Autoridad central del Estado de recepción son ejercitadas por organismos y personas no acreditados, como permite el párrafo 2 del mismo artículo, si se ha hecho una declaración en este sentido en virtud de dicho párrafo.

397 Una cuestión distinta es si estos organismos y personas no acreditados autorizados a actuar en un Estado contratante pueden realizar actividades relacionadas con la adopción internacional en el territorio de otro Estado contratante. Hay que responder a esta cuestión de la misma forma que en el caso de los organismos acreditados. El artículo 12 exige la autorización de ambos Estados.

Párrafo 5

398 El párrafo 5 es una disposición nueva, que se introdujo como respuesta a la propuesta efectuada por los Estados Unidos e Italia en el Documento de trabajo núm. 170, que pretendía precisar que los organismos y personas no acreditados pueden participar en la preparación de los informes previstos en los artículos 15 y 16. Simultáneamente se subrayó, no obstante, que la responsabilidad respecto a los informes continua siendo de la Autoridad central o de otras autoridades públicas u organismos acreditados en virtud del Capítulo III, en la medida prevista por la ley

del Estado del que se trate, tal y como establece el párrafo 1 del propio artículo 22.

CAPITULO V- RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE LA ADOPCION

399 Los artículos 23, 24 y 25 tratan del reconocimiento de la adopción constituida en un Estado contratante y desarrollan uno de los objetivos del Convenio consistente, como establece el apartado c del artículo 1, en "asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio". El Capítulo V incluye el artículo 26, que se refiere, en parte, a los efectos de la adopción y el artículo 27 que regula un supuesto específico de conversión de la adopción.

400 Como sugirió el Informe de la Comisión especial, el Documento de trabajo núm. 133, presentado por Bélgica propuso modificar el título del Capítulo V y darle la siguiente redacción: "Reconocimiento y efectos de las adopciones internacionales". La propuesta fue aprobada con ciertos retoques finales del Comité de redacción.

401 El Comité de redacción recomendó la supresión del artículo 23 del proyecto. Este artículo permitía al Estado de recepción subordinar el reconocimiento pleno de la adopción constituida en un Estado contratante de acuerdo con el Convenio a la condición de que transcurriera satisfactoriamente un período probatorio adicional posterior a la adopción- en el Estado de recepción. Se consideró que esta posibilidad no respondía al interés superior del niño, porque la adopción estaría territorialmente limitada, no obstante haberse cumplido con el Convenio; se puso de relieve, además, que el Convenio protege las preocupaciones de los Estados que exigen un período probatorio posterior a la adopción, puesto que, de acuerdo al apartado c del artículo 17, tienen derecho a no otorgar su consentimiento a la continuación del procedimiento de adopción.

Artículo 23

Párrafo 1

Primera frase

402 La primera frase del párrafo 1 reproduce el texto del proyecto (artículo 22, primer párrafo) y su finalidad es facilitar el reconocimiento, en todos los Estados contratantes, de la adopción constituida de acuerdo con el Convenio. Se prevé, por tanto, el reconocimiento de pleno derecho, modificando la práctica existente de que una adopción, ya constituida en el Estado de origen, haya de ser repetida en el Estado de recepción para producir sus efectos; impide también que se revise el contenido de una

adopción extranjera. Por este motivo tan solo se exige una certificación, otorgada por las autoridades competentes del Estado donde tuvo lugar la adopción, conforme se han cumplido las reglas del Convenio y se otorgaron las aceptaciones a las que se refiere el apartado c del artículo 17, especificando cuándo y por quién.

403 La primera frase del párrafo 1 se refiere al Estado "donde ha tenido lugar (la adopción)", entendiéndose que éste puede ser el Estado de origen o el Estado de recepción, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

404 La certificación exigida por el artículo 23 ha de ser emitida por "la autoridad competente". Todo Estado contratante es, por tanto, libre de determinar si se trata de una autoridad administrativa o judicial. Las informaciones pertinentes habrán de comunicarse al depositario del Convenio, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 23.

405 La primera frase del párrafo 1 ha de relacionarse con el apartado c del artículo 36 para determinar las autoridades competentes en caso de un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

406 El Documento de trabajo núm. 72 presentado por Francia propuso, sin que prosperara, que fuera la Autoridad central quien otorgara la certificación, porque se consideró que era la que estaba en mejor posición para ejercer esta función. Se objetó, sin embargo, que esto podía provocar conflictos entre poderes independientes dentro de un mismo Estado, puesto que una autoridad administrativa no ha de controlar el trabajo realizado por los tribunales.

407 El Convenio no regula los requisitos formales de la certificación, a pesar de que hubo un consenso en torno a la ventaja de hacerlo de acuerdo con un formulario tipo. Por ello, el artículo 23 ha de relacionarse con el deseo expresado en el Acta final de la Decimoséptima Sesión de que los expertos participantes en la primera reunión de la Comisión especial, que ha de convocarse en virtud del artículo 42 del Convenio, establezcan un formulario modelo para el documento que certifique que una adopción ha tenido lugar de acuerdo con el Convenio (Acta Final, apartado E).

408 Una vez se presenta la certificación, la adopción se reconoce automáticamente de pleno derecho. El Estado que reconoce la adopción tiene la facultad de controlar la regularidad formal del documento. Sólo puede denegar el reconocimiento en virtud de lo establecido en el artículo 24 (o 25). Esta solución va ciertamente muy lejos, puesto que puede significar el reconocimiento de una adopción a pesar de que haya tenido lugar ignorando las reglas del Convenio. No obstante, la segunda frase del

párrafo 1 tiene como objetivo prevenir tales casos extremos (Véase, *infra* Núms. 414-415).

409 La frase "de pleno derecho" no es muy exacta, pero se mantuvo porque no pudo hallarse una mejor fórmula para expresar que el reconocimiento ha de tener lugar automáticamente, es decir, sin un procedimiento de reconocimiento, ejecución o registro. En segunda lectura, la delegación del Nepal presentó el Documento de trabajo núm. 196, señalando que esto impone a los Estados contratantes la obligación de modificar su Derecho interno y, por esta razón, propuso, sin que prosperara, su sustitución por las palabras "debidamente reconocida". No es, por tanto, necesario un exequatur previo para el reconocimiento de la adopción. Ciertamente el Convenio no prohíbe la obtención del mismo, en cuyo caso el procedimiento de exequatur se regira por la *lex loci*.

410 El artículo 23 no prevé el reconocimiento automático de la decisión de denegación del reconocimiento de la adopción, propuesto por el Reino Unido en el Documento de trabajo núm. 83. Se consideró que una norma de este tipo excedería los objetivos perseguidos por el Convenio, que pretende promover la cooperación entre los Estados contratantes para proteger a los niños en las adopciones internacionales (artículo 1, apartado b).

411 El Convenio no responde específicamente a la cuestión de si una adopción que se constituye en un Estado contratante y que entra dentro de su ámbito de aplicación, pero que no ha sido concedida conforme a las reglas del Convenio, puede ser reconocida en otro Estado contratante, cuyo Derecho interno permite dicho reconocimiento. Indudablemente, en dicho caso, el Estado contratante que concediera la adopción estaría violando el Convenio, puesto que sus disposiciones son vinculantes y tal conducta podría dar lugar a una queja en virtud del artículo 33, pero la cuestión del reconocimiento de dicha adopción quedaría al margen del Convenio y la respuesta dependería de la ley aplicable del Estado que reconociera la adopción y debería tener siempre en cuenta el interés superior del niño.

412 El Documento de trabajo núm. 104 presentado por España durante la discusión del artículo 22, propuso que se añadiera un nuevo párrafo que dijera: " De la misma manera todo Estado contratante puede declarar al depositario del Convenio que las adopciones de niños no serán reconocidas en dicho Estado salvo si las funciones atribuidas a las Autoridades centrales se ejercen conforme a lo previsto en el primer párrafo de este artículo". Esta propuesta se inspira en la idea de que el Estado de la residencia habitual, que concede la adopción, ha de dar una garantía y de que debe prevenirse el riesgo de un fraude. Sin embargo, se puso de relieve que tal denegación del reconocimiento puede ser contraria a los intereses del niño, como ejemplificó Canadá, citando el caso de un

profesor español con residencia habitual en los Estados Unidos que hubiera obtenido una adopción internacional, jurídicamente válida, sin que hubieran intervenido las Autoridades centrales y que, tras residir en los Estados Unidos durante un periodo de diez años e incluso superior, retornara a España. La propuesta fue pues rechazada. Sin lugar a dudas, es difícilmente aceptable que el reconocimiento de la adopción pueda ser denegado por el solo motivo de que no intervinieron las Autoridades centrales.

413 El Documento de trabajo núm. 106, presentado por España, también propuso la adición de un nuevo párrafo al artículo 23, que estableciera que la violación del artículo 32 no puede constituir una causa de denegación del reconocimiento de la adopción. Aunque la idea fue generalmente aceptada, la propuesta fue retirada puesto que se consideró inoportuno hacer distinciones entre las reglas del Convenio, y porque sería poco razonable denegar el reconocimiento de una adopción ya constituida simplemente porque se ha violado el artículo 32.

Segunda frase

414 La segunda frase del párrafo 1 se incluyó en el Convenio como consecuencia de una propuesta hecha por el Comité de redacción en el Documento de trabajo de trabajo núm. 142, que pretendía que se incluyera el siguiente texto: "La certificación mencionará de forma expresa que se han cumplido los requisitos del Capítulo II". El Documento de trabajo núm. 145, presentado por Dinamarca, perseguía un objetivo análogo; proponía añadir las siguientes palabras al artículo 23: "proporcionando detalles acerca de la aprobación por parte de las autoridades competentes del otro Estado afectado". Los Países Bajos habían igualmente propuesto en el Documento de trabajo núm. 163 que la certificación hiciera "referencia expresa a las declaraciones de las Autoridades centrales certificando, cada una en relación al Estado afectado, que se han cumplido los requisitos a los que se refiere el artículo 6 y 17". No obstante, una mayoría clara rechazó tales propuestas, que fueron criticadas por debilitar el Convenio; en especial se consideró muy insatisfactoria la referencia al Capítulo II, porque daba la impresión de que no todas las reglas del Convenio tenían que respetarse. Sería, por otra parte, inaceptable dividir las reglas en dos categorías: las fundamentales y las no fundamentales.

415 La cuestión fue, no obstante, nuevamente discutida en tercera lectura, porque las delegaciones de Bulgaria, Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos, Filipinas, Rumanía, la Federación rusa, Eslovenia, España y el Reino Unido presentaron el Documento de trabajo núm. 183, proponiendo la adición de la siguiente frase al párrafo 1: "La certificación indicará la fecha en la cual la autoridad competente del otro Estado afectado consintió en que se siguiera el procedimiento de adopción e identificarán a dicha autori-

dad". Como explicaron los autores de la propuesta, el cumplimiento de la condición establecida por el artículo 17, apartado c, "reviste una importancia crucial para el resultado de toda adopción y para el éxito del Convenio". Por ello, sería especialmente grave cualquier error sobre este punto. La información requerida no debería tan sólo identificar el caso, sino también impedir que el Estado de la adopción otorgara la certificación si, de hecho, el otro Estado no hubiera manifestado su acuerdo. La inclusión de esta información no significa, por otro lado, un aumento de trabajo puesto que, antes de otorgar dicho certificado, la autoridad del Estado de origen tendrá que haber leído el expediente y haber determinado el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Convenio. La propuesta fue aprobada porque permite disponer de pruebas más satisfactorias y de mayor utilidad, si bien se recordó nuevamente que todas las condiciones establecidas por el Convenio revisten la misma importancia y que no es oportuno privilegiar una de ellas.

Párrafo 2

416 Puesto que el párrafo 1 del artículo 23 tan sólo hace referencia a "la autoridad competente" del Estado de adopción, conviene, por razones prácticas difundir entre los Estados contratantes la información relevante. Por ello el Documento de trabajo núm. 142, presentado por el Comité de redacción propuso el texto del párrafo 2. El acuerdo fue general, si bien se expresó alguna preferencia por una certificación centralizada. En segunda lectura, el Documento de trabajo núm. 196, presentado por Nepal, propuso que se insertaran las palabras "la extensión de la competencia" antes de " y las funciones de la autoridad".

417 De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 23, se tendrá que notificar igualmente "cualquier modificación en la designación de estas autoridades". Hay que entender que esta disposición se refiere tanto a la identidad como a las funciones de dichas autoridades.

418 La notificación exigida por el párrafo 2 del artículo 23 ha de hacerse al depositario del Convenio, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, que transmitirá la información a los Estados mencionados en el artículo 48.

419 El párrafo 2 del artículo 23 ha de relacionarse con los apartados c y d del artículo 36 para determinar a las autoridades competentes, la autoridad pública o los organismos acreditados, en el caso de un Estado contratante que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

420 No se entiende porqué la notificación requerida ha de ser efectuada por "todo Estado contratante" en el momento de la "firma" del Convenio puesto que un Estado no

pasa a ser un Estado contratante en virtud de la simple firma del Convenio. Además, la entrada en vigor del Convenio se regula en el artículo 43 y a estos efectos la firma no tiene relevancia alguna, sino que es necesario que transcurran tres meses tras el depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

Artículo 24

421 El artículo 24 es una disposición independiente relativa a la excepción de orden público al reconocimiento de las adopciones extranjeras, que en el proyecto constituía el objeto del artículo 22, segundo párrafo. La cuestión se debatió a fondo en el Comité de reconocimiento y la inicial falta de consenso explica las diversas propuestas formuladas en el Documento de trabajo núm. 142 presentado a la Segunda Comisión de la Conferencia.

422 La propuesta más radical fue la expresada en la variante III del artículo 22 A que propuso la supresión de la excepción de orden público, porque puede debilitar el reconocimiento de pleno derecho de las adopciones extranjeras. En apoyo de esta propuesta, se recordó que el Convenio de La Haya de sustracción de menores no incluye una cláusula de este tipo. La enmienda fue, no obstante, rechazada por una amplia mayoría.

423 Los Estados Unidos de América intentaron restringir la aplicación de la excepción de orden público y propusieron la redacción siguiente: "El reconocimiento de una adopción extranjera en un Estado contratante tan solo puede ser denegado si el niño fue secuestrado o si los consentimientos a su adopción fueron falsos, fraudulentos u obtenidos por coerción o si esta medida responde al interés superior del niño" (Documento de trabajo núm. 77, como fue reproducido en el Documento de trabajo núm. 142, artículo 22 A, variante II). El texto siguiente se añadió como subvariante: "El reconocimiento tan solo podrá ser denegado por las autoridades competentes del Estado de recepción. La decisión de denegación del reconocimiento será reconocida de pleno derecho en los demás Estados contratantes (Documento de trabajo núm. 142, artículo 22 A, variante II, subvariante) La propuesta fracasó, no obstante, al ponerse de relieve que "el orden público es un principio general que no puede ser reducido a ciertas reglas particulares".

424 La variante I del artículo 22 A, presentada en el Documento de trabajo núm. 142, reproducía el texto del proyecto (artículo 22, segundo párrafo) y preveía que "El reconocimiento de una adopción tan solo puede ser denegado en un Estado contratante si la adopción es manifiestamente contraria al orden público y al interés superior del niño". Esta redacción implicaba que ambas causas de denegación se aplicarían cumulativamente. El reconocimiento de pleno

derecho de una adopción extranjera no podría, por tanto, ser denegado si la adopción produjera un resultado manifiestamente contrario al orden público pero respondiera al interés superior del niño y viceversa. Sin embargo, como puso de relieve el Informe de la Comisión especial, ésta última es una situación excepcional que sólo se producirá en muy contadas ocasiones.

425 El artículo 22 A, subvariante 2 de la variante I, propuso que el reconocimiento de una adopción sólo pudiera ser denegado en un Estado contratante " si la adopción es manifiestamente contraria a los principios fundamentales del orden público y al interés superior del niño". En consecuencia, en este caso ambas causas deben también acumularse.

426 El texto final aprobado como subvariante I del artículo 22 A, presentado por el Comité de reconocimiento en el Documento de trabajo núm. 142, prevé que " Sólo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado contratante si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño". No prescribe, por tanto, la aplicación cumulativa de ambas causas, puesto que tan sólo ha de tenerse en cuenta el interés superior del niño. La noción de orden público ha de interpretarse de manera muy restrictiva, es decir, con referencia a los "principios fundamentales" del Estado que reconoce la adopción.

427 El Documento de trabajo núm. 106 presentado por España propuso la adición de un tercer párrafo que prescribiera expresamente que la violación del artículo 32 "no puede fundamentar la denegación del reconocimiento de una adopción". Esta propuesta no prosperó, sin embargo, puesto que se entendió que está cubierta por la excepción de orden público.

428 Ni el artículo 24 ni los demás artículos del Convenio prevén la excepción denominada de la institución desconocida como causa de denegación del reconocimiento de una adopción realizada en un Estado contratante, una posibilidad rechazada de manera expresa en el artículo 5 del Convenio interamericano (La Paz, 1984). La solución es, sin embargo, la misma en ambos Tratados y el hecho de que el Estado, en el que debe tener lugar el reconocimiento no conozca la institución de la adopción o una determinada forma de adopción no puede ser invocado como causa de denegación del reconocimiento de adopciones extranjeras.

Artículo 25

429 El artículo 25 es una disposición nueva que ha de relacionarse con el párrafo 2 del artículo 39, porque ambas disposiciones traducen conjuntamente el compromiso alcanzado entre los partidarios y adversarios de la posibilidad de acuerdos futuros entre Estados contratantes sobre materias reguladas por el Convenio. El párrafo 2 del artículo 39 autoriza estos acuerdos, dentro de ciertos límites, pero los demás Estados contratantes tienen derecho a declarar ante el depositario que no reconocerán en virtud del Convenio las adopciones hechas en virtud de tales acuerdos.

430 El artículo 25 exige una actuación positiva por parte del tercer Estado contratante. Por tanto, en caso de que no se efectúe ninguna declaración, existirá una obligación convencional de reconocer las adopciones hechas conforme a los acuerdos autorizados por el párrafo 2 del artículo 39.

431 El artículo 25 dispone que la declaración ha de dirigirse al depositario del Convenio, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, que informará a los Estados mencionados en el artículo 48.

432 El artículo 25 no especifica cuando ha de hacerse la declaración, lo que obliga a distinguir dos situaciones. La primera se presenta cuando un Estado llega a ser parte del Convenio y los demás Estados contratantes han concluido ya los acuerdos permitidos por el párrafo 2 del artículo 39. En tal caso, la declaración ha de hacerse en el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Convenio. Es, no obstante, también posible hacerlo después, pero entonces la declaración tan solo tendrá efectos para el futuro y el tercer Estado contratante estará obligado a reconocer, en virtud del Convenio, las adopciones hechas, conforme a estos acuerdos, posteriores al momento en el que el nuevo Estado contratante ha llegado a ser parte del Convenio y anteriores a la realización de la declaración.

433 La segunda posibilidad se produce cuando un Estado ya es parte del Convenio cuando se concluyen entre un Estado contratante y uno o más Estados contratantes los acuerdos autorizados por el párrafo 2 del artículo 39. En ese caso, ha de hacerse la declaración tan pronto como sea posible, a partir del momento en que el Estado contratante tercero recibe del depositario la notificación prescrita por el artículo 48, apartado d, sin que el Convenio establezca ningún plazo. La declaración puede, no obstante, efectuarse después, pero en tal caso el tercer Estado contratante estará obligado, en virtud del Convenio, a reconocer las adopciones hechas anteriormente conforme a dichos acuerdos.

434 El efecto de la declaración prevista en el artículo 25 consiste en que el tercer Estado contratante no estará obligado a reconocer las adopciones hechas conforme a los acuerdos concluidos en aplicación del artículo 39, párrafo 2. No está, no obstante, prohibido reconocerlas de acuerdo con el Derecho interno del Estado contratante que ha hecho la declaración.

435 Aunque no se prevé de manera expresa, la declaración puede ser retirada en cualquier momento por el tercer Estado contratante que la efectuó, comunicándolo al depositario del Convenio para que éste proceda a la notificación prevista en el apartado d del artículo 48. Desde ese momento, el tercer Estado contratante estará obligado, en virtud del Convenio, a reconocer las futuras adopciones hechas conforme a estos acuerdos, pero el Convenio no dice nada respecto a las adopciones anteriores.

Artículo 26

Párrafo 1

Frase introductoria

436 La Comisión especial no pudo llegar a ningún acuerdo acerca de los derechos del hijo adoptivo en el Estado que reconoce la adopción y en los demás Estados contratantes, porque algunos de los participantes argumentaron que el Convenio no pretende regular el estatuto jurídico de los hijos adoptivos, sino promover y facilitar la cooperación entre los Estados contratantes para asegurar que la adopción internacional tenga lugar en interés superior del niño.

437 La cuestión de los derechos y deberes de los hijos adoptivos se relaciona con el ámbito del Convenio, como se explica en el Informe de la Comisión especial (Núms. 282-295). Se hubieran podido evitar numerosos problemas si el Convenio se hubiera limitado a las adopciones que suponen la ruptura del vínculo jurídico entre el niño y su familia de origen. Esta es la solución que se ha retenido, en principio, en el Convenio interamericano de 1984, cuyo artículo primero establece que " se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida".

438 No obstante, la mayoría de participantes, no tan solo en la Comisión especial sino también de la Conferencia diplomática, fueron del parecer de que era preferible no restringir el ámbito de aplicación del Convenio a las adopciones que rompen el vínculo jurídico entre el niño y su familia de origen y que había que incluir todo tipo de adopciones internacionales. Por esta razón, se creyó

necesario considerar los diferentes tipos de adopción que, *grosso modo*, pueden ser clasificados en los tres grupos principales siguientes: (1) el primer grupo sólo admite un tipo radical de adopción que significa la ruptura total de la relación jurídica entre el niño y su familia de origen (adopción plena); (2) el segundo tipo sólo admite un tipo menos radical de adopción que no supone una ruptura total de dicha relación jurídica (adopción simple o limitada); (3) el tercer grupo admite ambos tipos de adopción, la más y la menos radical, aceptando, por tanto que el vínculo jurídico entre el niño y su familia de origen pueda o no romperse en función del tipo de adopción concedida en cada caso.

439 Tras grandes esfuerzos y dentro de un sincero espíritu de compromiso se pudo conseguir un consenso mínimo en relación a los efectos derivados de todas las adopciones convencionales. Se aprobó el artículo 26, cuya finalidad es tan solo proporcionar una respuesta parcial a la cuestión de los efectos de la adopción y ello de la forma siguiente: (1) el párrafo 1 establece determinados efectos mínimos de todas las adopciones efectuadas según el Convenio, independientemente de la ley aplicable en virtud de las normas de conflicto del Estado que reconoce la adopción; (2) el párrafo 2 rige los efectos de la adopción, en el Estado de recepción o en cualquier otro Estado contratante que reconozca la adopción, en caso de que ésta suponga la ruptura (total) del vínculo jurídico preexistente entre el niño y su padre o su madre, si tal es el efecto derivado de la ley del Estado que constituyó la adopción; y (3) el párrafo 3 permite la aplicación de cualquier disposición más favorable al niño en vigor en el Estado contratante que reconoce la adopción.

Apartado a

440 El apartado a reproduce la idea básica del Documento de trabajo núm. 142 presentado por el Comité de reconocimiento, idea que ya había sido aceptada por el proyecto (primer párrafo del artículo 24) y en virtud de la cual "un niño cuya adopción es reconocida en un Estado contratante, será considerado jurídicamente el hijo de los padres adoptivos".

441 El apartado a ha de relacionarse con el párrafo 2 del artículo 2 según el cual "el Convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación". El Convenio no se referirá, por tanto, a la adopción concedida si no se crea un vínculo de ese tipo, de acuerdo con la ley aplicable conforme a las normas de conflicto del Estado contratante en el que se constituyó.

442 Existe, sin embargo una diferencia en el texto inglés porque el párrafo 2 del artículo 2 se refiere a las "adoptions which create a permanent legal parent-child relationship", mientras que en el apartado a del artículo

26 no se alude al carácter "permanent". No obstante, se trata de la misma idea, como pone de relieve la versión francesa, que en ambos casos se refiere al "lien de filiation".

443 De acuerdo con el apartado a el vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos ha de ser reconocido en todo Estado contratante y eso tanto si como resultado de la adopción se produce la ruptura del vínculo de filiación entre el niño y su padre o su madre como si dicho vínculo se mantiene. Ello demuestra el amplio ámbito de aplicación del Convenio que se refiere a toda clase de adopción.

444 El apartado a incluye al apartado b puesto que el vínculo de filiación entre el niño y sus futuros padres adoptivos implica, como mínimo, la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo. No obstante, estas dos disposiciones no necesariamente coinciden porque, dependiendo de la ley aplicable, del vínculo de filiación derivan otros efectos distintos a la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al niño.

Apartado b

445 El apartado b reproduce la propuesta hecha por el Comité de redacción en el Documento de trabajo núm. 180 que pretendía tener en cuenta algunas observaciones hechas a lo largo de la discusión de la propuesta presentada por el Comité de redacción en el Documento de trabajo núm. 142 (artículo 24 (1) (b)).

446 La expresión "responsabilidad respecto al hijo" se aprobó en lugar de la de "autoridad paternal" que se utilizaba en el Documento de trabajo núm. 142, porque se trata de una expresión habitualmente utilizada en los documentos internacionales y para mostrar y poner de relieve, en la medida de lo posible, que del hecho de ser padre no tan solo derivan derechos sino también obligaciones.

447 Grecia propuso la supresión del apartado b porque la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo es consecuencia del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos, que ha de reconocerse de acuerdo con el apartado a. No obstante, como hemos visto (*supra*, núm. 444), se puso de relieve que ambos apartados no necesariamente tienen el mismo ámbito puesto que pueden derivar otros efectos del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos. Además se consideró aconsejable la expresa mención de este efecto teniendo en cuenta que, cuando el niño alcanza la mayoría de edad, el vínculo de filiación persiste y, en cambio, no lo hace la autoridad paternal y porque el interés superior del niño ha de ser la consideración suprema de toda adopción internacional.

Apartado c

448 El apartado c reproduce la propuesta hecha por el Comité de redacción en el Documento de trabajo núm. 180 (artículo 24, párrafo 1, apartado c) que tuvo en cuenta la discusión sobre el Documento de trabajo núm. 142 (artículo 24 (1) (c) presentado por el Comité de reconocimiento en base al texto del proyecto (artículo 24, segundo párrafo).

449 El Documento de trabajo núm. 142, presentado por el Comité de reconocimiento hacía referencia a "todo vínculo preexistente de filiación entre el niño y su padre y su madre" pero la palabra "todo" fue sustituido por la palabra "del" a fin de aceptar la posibilidad de que en determinados casos persistan determinados vínculos entre el niño y su padre y su madre. La enmienda tuvo en cuenta las observaciones hechas por Alemania y Austria, que recordaron que en el caso de una adopción entre parientes, pueden persistir determinadas relaciones jurídicas entre el niño y uno de sus padres en virtud de la ley aplicable del Estado en el que se realiza la adopción, y ello a pesar de que la concesión de la adopción ponga fin a los vínculos jurídicos entre el niño y el otro progenitor.

450 La enmienda se aprobó, a pesar de que determinados participantes objetaron que el mantenimiento de un vínculo jurídico entre el niño y su padre o su madre puede otorgar a ese padre el derecho a entrar y residir en el Estado de recepción, lo que sería contrario a las políticas de inmigración restrictivas practicadas hoy en día en los países europeos. Sin lugar a dudas, dicha posibilidad existe, pero no se consideró válido el argumento puesto que el Estado de recepción puede, en virtud del apartado c del artículo 17, negar su acuerdo a que se siga el procedimiento de adopción.

451 La referencia hecha en el texto inglés del apartado c a una "*pre-existing legal relationship between the child and his or her mother and father*" ha de entenderse referida al vínculo de filiación; por coherencia con el párrafo 2 del artículo 2 debería haber figurado la palabra "*permanent*".

452 El apartado c del artículo 26 puede tener como efecto imponer al Estado de recepción la obligación de reconocer la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su padre y su madre, incluso si tal efecto no se hubiera producido de haber sido concedida la adopción en el Estado de recepción.

453 Ciertamente, el Estado de origen y el Estado de recepción pueden evitar esta consecuencia simplemente no dando su acuerdo a que se siga el procedimiento de adopción como permite el artículo 17, apartado c, pero conviene

recordar que ésta no es una posibilidad abierta a los demás Estados contratantes puesto que el acuerdo de terceros Estados no es una condición de la adopción exigida por el Convenio. Los Estados terceros contratantes están, por tanto, obligados, en virtud del Convenio, a reconocer la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su padre, incluso si la ley aplicable en virtud de sus normas de conflicto no admitiera tal ruptura.

454 El Documento de trabajo núm. 193 presentado en segunda lectura por Francia, Uruguay, Bélgica, Madagascar, Benin y Burkina Faso, propuso armonizar la versión francesa del apartado c con la inglesa añadiendo la palabra "définitive" tras "rupture" porque hay que entender la expresión "terminate" utilizada en el texto inglés como "rupture définitive" y no como simple "rupture". No obstante, dicha propuesta suscitó fuertes objeciones por producir resultados insatisfactorios, como ponen de relieve recientes casos ocurridos en Francia, donde no se reconocen los efectos de una adopción revocable a pesar de que se produzca la ruptura de un vínculo de filiación preexistente puesto que la posibilidad de una revocación excluye una "rupture définitive".

455 La revocación de la adopción no es una cuestión tratada por el Convenio y, por tanto, no puede ser reconocida de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23, de forma que se trata de una cuestión que cada Estado contratante ha resolver conforme a su Derecho. Lo mismo ocurre con toda decisión que revoque la ruptura del vínculo de filiación preexistente después de que tenga lugar la adopción, se mantenga o no ésta.

456 El apartado c demuestra de nuevo el amplio ámbito de aplicación del Convenio, que se refiere a todo tipo de adopciones que establezcan un vínculo de filiación, como establece el párrafo 2 del artículo 2, y ello sin perjuicio de que permanezca en vigor o no la anterior relación del niño con su padre y madre.

457 El apartado c tan solo regula las adopciones concedidas en un Estado contratante, que puede ser el Estado de origen o el Estado de recepción, y no pretende establecer reglas para las adopciones hechas en Estados no contratantes. La ruptura del vínculo de filiación como consecuencia de la conversión de la adopción no se regula en el apartado c sino en el artículo 27.

458 La consideración del lugar en el que se efectuó la adopción para decidir si se ha roto el vínculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su padre suscitó críticas por considerarse incoherente con el criterio de la residencia habitual del niño que se utiliza en otros lugares del Convenio para determinar su ámbito de aplicación. Las dificultades desaparecen si se advierte que el artículo 26 ha de relacionarse con el artículo 23 que

se refiere a las adopciones certificadas como conformes al Convenio, incluyendo a su artículo 2. Se puso de relieve también la falta de referencia alguna a la ley del Estado origen, proponiéndose tener en cuenta los consentimientos otorgados de acuerdo con el artículo 4, apartados c y d antes de reconocer la adopción. Esta propuesta fue, no obstante, rechazada puesto que podría permitir la revisión de la adopción realizada, en contradicción con el respeto debido a la certificación otorgada conforme al artículo 23.

Párrafo 2

459 El Documento de trabajo núm. 142, presentado por el Comité de reconocimiento, propuso que la adopción tuviera como efecto la atribución del estatuto jurídico más favorable otorgado por el Estado que concede el reconocimiento al niño adoptivo, pero esta solución se modificó en el Documento de trabajo núm. 171, también presentado por el Comité de reconocimiento, que estableció que "el niño gozará, en el Estado contratante que reconozca la adopción, de derechos equivalentes a los que resultan de una adopción concedida en tal Estado".

460 Estas propuestas suscitaron diversas objeciones: (a) Francia insistió en el carácter irrevocable de la adopción de acuerdo con el Derecho francés y propuso que cada Estado contratante aplicara sus normas de conflicto para determinar los efectos de la adopción (Doc. trab. núm. 72); (b) Japón propuso la supresión del segundo párrafo porque es difícilmente comprensible por qué ha de aplicarse automáticamente la ley más favorable en caso de que tenga lugar un desplazamiento posterior a la adopción, mientras que los efectos de la adopción se determinan por la ley aplicable según las normas de conflicto del Estado en el que tiene lugar la adopción si el niño permanece en ese Estado (Doc. trab. núm. 161); (c) Alemania no quería que la ley aplicable variase en función de donde se hallara el hijo adoptivo y por ello se pronunció a favor de la ley del Estado de recepción (Doc. trab. núm. 173); (d) el Reino Unido señaló los inconvenientes de la solución propuesta desde el punto de vista de la ley británica de nacionalidad, porque los niños adoptados en virtud del Convenio adquirirían automáticamente, con el pronunciamiento de la adopción, la nacionalidad británica a pesar de no cumplir todos los requisitos legales mientras que los niños adoptados por cauces ajenos al Convenio no adquirirían obligatoriamente la nacionalidad británica (Doc. trab. núm. 155); (e) Irlanda observó que corresponde al Estado de recepción, en el que el niño reside habitualmente, y no al Estado que reconozca la adopción, asegurar el bienestar, la salud y la protección social del niño.

461 El Documento de trabajo núm. 180, presentado por el Comité de redacción, propuso resolver el problema en todos los Estados contratantes haciendo referencia al estatuto más favorable otorgado a los niños adoptivos en

el Estado de su residencia habitual, si se trata de un Estado contratante, como había propuesto Alemania y había aprobado la Segunda Comisión. No obstante las posibles ventajas que pudieran derivar del otorgamiento al niño de un estatuto permanente y de la garantía de una igualdad de trato en todos los Estados contratantes, el texto suscitó objeciones porque se trata de una norma de conflicto oculta que introduciría un elemento de confusión en el funcionamiento de los sistemas conflictuales de todos los Estados contratantes.

462 El Documento de trabajo núm. 188, presentado por Alemania e Irlanda, se limitó a determinar los efectos de la adopción exclusivamente en el Estado de recepción dejando por tanto abierta la cuestión de los derechos del niño en todos los demás Estados contratantes que reconocieran la adopción. La idea que inspiró la propuesta fue proporcionar una solución clara al problema principal, puesto que el niño suele tener su residencia habitual en el Estado de recepción, reconociendo que ello no garantiza la protección futura de los derechos del niño en el frecuente caso de migraciones internacionales, cuando el niño es desplazado desde el Estado de recepción a otro Estado contratante o hacia un Estado tercero.

463 La decisión se limitó a la elección entre los Documentos de trabajo núms. 171 y 188 pero ninguno prosperó puesto que el voto se dividió en partes iguales. La mayoría de los participantes rechazó también el texto propuesto por el Comité de redacción en el Documento de trabajo núm. 180. Por estas razones, Irlanda y Suiza buscaron y propusieron una solución de compromiso en el Documento de trabajo núm. 201 que fue aprobado en el bien entendido de que sería poco realista intentar resolver todas las cuestiones relativas a los efectos de la adopción en un Convenio que se ocupa esencialmente de la cooperación entre los Estados contratantes.

464 El párrafo 2 del artículo 26 tan solo regula el caso en el que se admite la ruptura del vínculo preexistente de filiación en el Estado en el que se concede la adopción, esto es en el Estado de origen o en el Estado de recepción. El niño gozará en el Estado de recepción en el que se reconoce o se constituye (si no se formalizó la adopción en el Estado de origen) la adopción y en cualquier otro Estado contratante en el que se reconozca la adopción, derechos equivalentes a los que resultarían de una adopción que produjera tal efecto en cada uno de los Estados contratantes. El párrafo 2 del artículo 26 no puede, por tanto, entrar en juego si el Estado en el que se constituye la adopción no acepta la ruptura del vínculo preexistente de filiación; en ese caso los derechos del niño adoptivo se determinarán conforme al artículo 26, párrafo 1, apartados a y b, y párrafo 3.

465 La finalidad perseguida por el párrafo 2 es garantizar que el niño adoptado a través de una adopción internacional conforme al Convenio goce de un estatuto jurídico equivalente al de cualquier otro niño adoptado, como establece el apartado c del artículo 21 CDN que impone a los Estados contratantes que admiten o autorizan la adopción la obligación de velar "por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardas y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen".

466 La importancia práctica del párrafo 2 se advierte fácilmente en el caso de que o bien el Estado de recepción (si es allí donde se constituye la adopción) o bien el Estado del reconocimiento acepten tanto las adopciones que producen la ruptura del vínculo preexistente de filiación como las adopciones que no producen tal ruptura. En dicho caso el niño gozará de los derechos derivados de la adopción que produce la ruptura del vínculo de filiación.

467 No obstante la generalidad de los términos que se utilizan, el párrafo 2 ha de relacionarse con el apartado c del artículo 26 que se refiere a la "ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su padre y su madre".

468 La ruptura del vínculo de filiación preexistente a la que se refiere el párrafo 2 del artículo 26 no ha de ser "definitiva" y por tanto tal precepto cubre también los casos excepcionales en que es posible la revocación de la adopción.

469 La referencia al "Estado de recepción" en el párrafo 2 pretende cubrir supuestos distintos al reconocimiento, en los que la adopción se constituye en el Estado de recepción. Aunque no se menciona de manera expresa, ha de aplicarse la misma regla en el caso excepcional de que la adopción se constituya no en el Estado de recepción sino en el Estado de origen, después del desplazamiento del niño al Estado de recepción.

Párrafo 3

470 El párrafo 3 es superfluo desde un punto de vista estricto, puesto que no hace falta decir que el Convenio no impide que un Estado contratante que reconozca una adopción otorgue al niño una mejor protección que la que resulta de los párrafos 1 y 2. Lo mismo ocurre con el Estado de recepción en el supuesto de que la adopción no se constituya en el Estado de origen sino en el Estado de recepción.

471 Para ilustrar la idea expresada en este párrafo tan sólo hay que pensar en el caso de un niño adoptado en el Estado de origen o en el Estado de recepción a través

de una "adopción simple", que, por ejemplo, no adquiera derechos sucesorios en relación a la familia adoptiva. En este caso no se aplican ni el párrafo 1 c ni el párrafo 2 puesto que no se ha producido la ruptura del vínculo preexistente de filiación entre el niño y su madre y su padre. En virtud del párrafo 3 el Derecho del Estado del reconocimiento puede, no obstante, otorgar al niño derechos sucesorios respecto a su familia adoptiva.

Observaciones finales

472 Tal y como ya hemos puesto de relieve, el artículo 26 no pretende resolver completamente la cuestión de los efectos de la adopción en el Estado contratante que la reconoce. Sin embargo, a pesar de la complejidad de la materia, el artículo 26 da una solución adecuada a muchas de las situaciones que pueden presentarse, teniendo en cuenta las diferentes regulaciones de la adopción en los Estados contratantes mencionadas anteriormente.

473 De hecho no surgirían problemas en los casos siguientes:

(a) si la adopción otorgada en un Estado contratante produce la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su familia de origen y el Estado del reconocimiento tan solo acepta el mismo tipo de adopción. Los efectos de la adopción serán los determinados por los apartados a, b y c del párrafo 1 y párrafo 2, de forma que el niño gozará de derechos equivalentes a los que se otorgan a los niños adoptados en el Estado de reconocimiento;

(b) si la adopción efectuada en un Estado contratante producen la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su familia de origen y el Estado del reconocimiento no admite sólo este tipo de adopción sino también la adopción que no produce la ruptura de ese vínculo preexistente. Los efectos de la adopción se determinarán también en virtud de los apartados a, b y c del párrafo 1 y el párrafo 2 y el niño gozará de derechos equivalentes a los de un niño adoptado en el Estado del reconocimiento con ruptura del vínculo preexistente de filiación;

(c) si la adopción efectuada en un Estado contratante no produce la ruptura del vínculo de filiación entre el niño y su familia de origen y el Estado del reconocimiento sólo acepta ese mismo tipo de adopción. Los efectos de la adopción serán entonces los determinados por los apartados a y b del párrafo 1 de forma que el niño gozará de derechos equivalentes a los de los niños adoptados en el Estado del reconocimiento;

(d) si la adopción concedida en un Estado contratante no produce la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su familia de origen y el Estado del reconocimiento acepta no tan solo ese tipo de adopción sino también la adopción que produce la ruptura de dicho vínculo jurídico. En dicho caso los efectos de la adopción serán los determinados por los apartados a y b del párrafo 1, de manera que el niño gozará en el Estado del reconocimiento de derechos equivalentes a los de los niños adoptados de la forma menos radical en relación a su familia de origen. Puede, no obstante, tener lugar una conversión de la adopción de acuerdo con lo estipulado en el artículo 27;

(e) si la adopción concedida en un Estado contratante no produce la ruptura de los vínculos preexistente de filiación entre el niño y su familia de origen y el Estado del reconocimiento sólo admite el tipo de adopción que rompe dicho vínculo. En ese caso los efectos de la adopción serán los determinados por los apartados a y b del párrafo 1 del artículo 26 (el párrafo 2 no puede aplicarse) de forma que el niño gozará de un estatuto particular en el Estado del reconocimiento;

(f) si la adopción concedida en un Estado contratante no produce la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su familia de origen y el Estado del reconocimiento sólo admite el tipo de adopción que produce la ruptura de dicho vínculo. En ese caso los efectos de la adopción serán los determinados por los apartados a y b del párrafo 1 y no se aplicará el párrafo 2. La adopción puede, sin embargo, ser convertida en una "adopción plena" conforme al artículo 27;

(g) en todos los casos mencionados, el Estado en el que se efectúa el reconocimiento puede aplicarle al niño reglas o un régimen más favorable en virtud del artículo 26, párrafo 3.

Artículo 27

Párrafo 1

474 El artículo 27 es nuevo y fue propuesto entre paréntesis en el Documento de trabajo núm. 142, presentado por el Comité de reconocimiento (artículo 24 A) a fin de regular los casos más frecuentes de conversión de la adopción.

475 El Documento de trabajo núm. 142 subordinó la conversión a tres condiciones: (a) que la ley del Estado de recepción la permita; (b) que los consentimientos a los que se refiere el artículo 4, apartados c y d se hayan otorgado en relación a una adopción que tenga por efecto la ruptura del vínculo preexistente de filiación, y (c) que tal adopción responda al interés superior del niño. Este último requisito fue suprimido porque se consideró una

repetición de la idea expresada en el cuarto párrafo del Preámbulo.

476 El artículo 27 solo regula la situación más frecuente, aquella en la cual la adopción formalizada en el Estado de origen ha de ser convertida en el Estado de recepción. Consiguientemente el Convenio no resuelve todos los casos y la posible conversión de la adopción en cualquier otro Estado contratante, incluso en el Estado de origen, ha de decidirse de acuerdo con las normas de conflicto del Estado contratante en el cual tiene lugar la conversión, no aplicandose las reglas del Convenio, en especial el artículo 23.

477 La posibilidad de conversión permitida por el artículo 27 se subordina a la condición de que la adopción tenga lugar en el Estado de origen. El ámbito de aplicación de este precepto es, por tanto, más restringido que el del apartado c, párrafo 1 del artículo 26 que se refiere al Estado contratante en el que se otorga la adopción, esto es el Estado de origen o el Estado de recepción. El Convenio no se aplica, por tanto, al caso en el cual se otorga una adopción en el Estado de recepción, se mantiene el vínculo preexistente de filiación y la adopción se convierte después en una adopción que produce la ruptura de dicho vínculo, por ejemplo, porque en el Estado de recepción la ley admite ambos tipos de adopción. A la conversión realizada de esta forma no se le aplican las reglas del Convenio, en especial el artículo 23.

478 El artículo 27 sólo se aplica cuando la adopción no produce la ruptura del vínculo preexistente de filiación entre el niño y su padre y su madre porque si tal ruptura es un efecto de la adopción en el Estado en el que ésta se efectúa ha de reconocerse de acuerdo con el artículo 26, apartado c.

479 A pesar de que el párrafo 1 utiliza los términos "por efecto la ruptura del vínculo de filiación preexistente", esta frase ha de relacionarse con el apartado c del artículo 26 de forma que equivale a "la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su padre".

Apartado a

480 De acuerdo con el apartado a, el Estado de recepción ha de aplicar su propia ley para determinar si es o no posible la conversión. Por tanto, no podrá tener lugar si la ley del Estado de recepción no acepta la conversión de la adopción o si la ley del Estado de recepción no acepta que la adopción pueda producir la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su padre.

481 Durante el debate se propuso sustituir "la ley del Estado de recepción" por " la ley del Estado de residencia habitual del niño" a fin de permitir la conversión en todo otro Estado contratante si es posible y conforme con la ley del Estado de recepción. Ambas propuestas fueron rechazadas.

Apartado b

482 La idea que inspira el apartado b es fácil de entender: se trata de impedir que la adopción produzca, en virtud de la conversión, la ruptura del vínculo preexistente de filiación a pesar de que los necesarios consentimientos, exigidos por el artículo 4, apartados c y d, se hayan otorgado respecto a una adopción que no produce tal efecto.

483 Como cuestión práctica, conviene observar que el funcionamiento del artículo 27 no presentará ningún problema si los consentimientos han sido otorgados para cubrir la posibilidad de conversión de la adopción pero que si éste no es el caso pueden surgir dificultades para obtener los consentimientos exigidos por el apartado c del artículo 4 una vez se ha desplazado al niño y éste tiene su residencia habitual en el Estado de recepción con sus padres adoptivos.

Párrafo 2

484 El párrafo 2 se incluyó para evitar dudas en torno a la obligación convencional de reconocer la conversión de pleno derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 23 y, por esta razón, los comentarios hechos en relación a dicho precepto son igualmente válidos aquí. Sin embargo, a pesar del hecho de que la autoridad competente del Estado de recepción deberá certificar su conformidad con el Convenio, no será necesaria la certificación exigida en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 23, puesto que no se trata de una condición necesaria para la conversión.

485 Durante la tercera lectura, el delegado griego insistió en que el párrafo 2 debería referirse a los artículos 23 y 24 puesto que se trata de preceptos inseparables dado que constituyen una "unidad jurídica y lógica ya que uno enuncia la regla (artículo 23) y el otro establece la excepción (artículo 24)". A pesar de que hubo acuerdo en cuanto al fondo, la propuesta fue considerada innecesaria puesto que la referencia al artículo 23 incluye también el artículo 24. De todas formas, como fue solicitado, la presente aclaración figura aquí a fin de evitar posibles malentendidos.

486 La conversión hecha de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 27 se reconocerá en todos los Estados contra-

tantes, incluyendo al Estado de origen, a pesar de que la adopción concedida no produjera la ruptura del vínculo preexistente de filiación.

CAPITULO VI- DISPOSICIONES GENERALES

487 El Capítulo VI contiene un cierto número de artículos, que figuran tradicionalmente en los Convenios de La Haya, como el que se ocupa del caso de los Estados contratantes que tienen dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales, la denominada "clausula federal" (artículo 36) o a diferentes categorías de personas (artículo 37); el artículo 38 excluye del ámbito de aplicación del Convenio los conflictos entre leyes internas aplicables en el mismo Estado; el artículo 39 regula las relaciones con otros Convenios y el artículo 40 se ocupa de las posibles reservas.

488 El Capítulo VI también incluye otras disposiciones generales específicamente referidas a la adopción internacional, a saber, el artículo 28, que establece que el Convenio no afecta a las prohibiciones derivadas de la ley de un Estado de origen puesto que su finalidad no es la unificación de las legislaciones internas de los Estados contratantes en materia de adopción; el artículo 29, que prohíbe el contacto entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda de éste; el artículo 30 sobre la conservación y el acceso a la información relativa a los orígenes del niño; el artículo 31 sobre la protección de datos, el artículo 32 que prohíbe los beneficios materiales indebidos derivados de actividades relativas a la adopción internacional, el artículo 33 sobre la obligación de las autoridades competentes de informar a la Autoridad central si constatan que no se ha respetado el Convenio, el artículo 34 sobre los costes de las traducciones y el artículo 35 que requiere a las autoridades competentes para que actúen con celeridad durante el procedimiento de adopción.

Artículo 28

489 El Documento de trabajo núm. 1, presentado por Colombia y que tenía como objetivo restringir el ámbito de aplicación del Convenio, propuso la adición de la siguiente frase al artículo 2: "si la legislación interna del Estado de origen permite el desplazamiento del niño al Estado de recepción antes de su adopción". Esta propuesta respondía al deseo de permitir a todos los Estados contratantes evitar el problema que podría surgir si el Convenio permitiera la salida del niño del Estado de origen puesto que de acuerdo con el Derecho colombiano "es ilegal autorizar la salida de Colombia del niño antes de que se haya finalizado el procedimiento de adopción". La adición

permitiría, por tanto a cada Estado contratante aplicar su propia ley a este respecto.

490 Hubo un apoyo claro al fondo de esta propuesta, en especial de los países latinoamericanos, como demuestra el Documento de trabajo núm. 28 presentado por El Salvador, si bien algunos participantes apuntaron la innecesariedad de tal adición puesto que el Convenio no pretende armonizar el Derecho material sobre la adopción vigente en los Estados contratantes sino crear un sistema flexible de cooperación para asegurar la observancia de determinadas garantías en las adopciones internacionales. Se entendió, sin embargo, que se trataba de una aclaración, constatándose también que la propuesta no hacía mal alguno y era muy importante para muchos países.

491 En relación con los objetivos del Convenio, Colombia presentó el Documento de trabajo núm. 29 en el que proponía una disposición suplementaria del siguiente tenor: "Los artículos del presente Convenio que determinan y regulan el desplazamiento del niño al Estado de recepción con anterioridad a la adopción y su colocación con los futuros padres adoptivos así como su adopción en el Estado de recepción no se aplican si la ley del Estado de origen no permite tal desplazamiento, colocación o adopción". Esta propuesta fue posteriormente reemplazada por el Documento de trabajo núm. 45, presentado por Colombia, Irlanda, los Estados Unidos de América y Bélgica, para que el nuevo artículo tuviera la siguiente redacción: "El Convenio no afecta a ley alguna de un Estado de origen que exija que la adopción de un niño con residencia habitual en ese Estado tenga lugar en ese Estado o que prohíba la colocación del niño en el Estado de recepción o su desplazamiento al Estado de recepción antes de la adopción".

492 A pesar de estar de acuerdo respecto al fondo, Italia puso de relieve que la propuesta era, cuando menos, ambigua porque permite argumentar a contrario que el Convenio deroga todas las demás disposiciones de los Estados contratantes relativas a la adopción. Por tanto, debería declararse de manera expresa que, como norma, el Convenio no pretende derogar la ley de los Estados contratantes, tratase de un Estado de origen, de un Estado de recepción o de cualquier otro Estado contratante. Para conseguir este propósito Italia presentó el Documento de trabajo núm. 123, proponiendo la adición del siguiente artículo: "El Convenio no afecta a ley alguna de un Estado de recepción que establezca la necesidad del transcurso de un período probatorio antes de la constitución de la adopción".

493 Japón hizo observaciones similares. A pesar de estar de acuerdo sobre el fondo, aconsejó formular la propuesta en términos más generales teniendo en cuenta que han de preservarse también otras regulaciones del Estado de origen que tienen la misma finalidad. Por ello, Japón

propuso que se dijera, de manera expresa, que el Convenio no ha de afectar "a ninguna ley del Estado de origen que establezca ulteriores requisitos o condiciones respecto a la adopción internacional de un niño con residencia habitual en ese Estado, respecto a su colocación o a su desplazamiento al Estado de recepción" (Doc. de trabajo núm. 143).

494 Los Documentos de trabajo núms. 123 y 143 presentados por Italia y Japón, respectivamente, no obtuvieron, de acuerdo con las reglas de procedimiento, un apoyo suficiente para ser considerados en segunda lectura y se aprobó el texto, como fue propuesto en el Documento de trabajo núm. 180. Sin embargo, en aras de la claridad conviene tener en cuenta al interpretar el artículo 28, que con la excepción de ciertas reglas contenidas en el Convenio, éste no afecta a la ley de los Estados contratantes, tratase del Estado de origen, del Estado de recepción o de cualquier otro Estado contratante.

Artículo 29

495 El artículo 29 reproduce sustancialmente el texto del proyecto (artículo 4), con ciertas modificaciones para concretar la prohibición de contactos entre las partes intervinientes en una adopción internacional, a fin de prevenir el tráfico o toda otra práctica eventualmente contraria a los objetivos del Convenio y, en particular, para evitar que los consentimientos requeridos para la adopción se obtengan mediante pago o compensación, cuestión que ya prohíbe de manera expresa el artículo 4, apartado c (3).

496 La prohibición formulada en el artículo 29 no es de carácter absoluto puesto que no se prohíben los contactos anteriores a que el niño exprese su consentimiento, sus deseos y opiniones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4, apartado d. Se permiten además los contactos cuando se trata de adopciones entre familiares así como en las condiciones establecidas por la ley del Estado de origen. Existen además límites temporales puesto que sólo se permiten dichos contactos una vez se ha establecido (1) que el niño es adoptable (artículo 4, apartado a), (2) que la adopción del niño responde al interés superior del niño (artículo 4, apartado b) y (3) que se han obtenido los consentimientos exigidos por el artículo 4, apartado c, y (4) que las autoridades competentes del Estado de recepción han determinado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar (artículo 5, apartado a).

497 Por esta razón, y porque la prohibición de contactos, pretende evitar las situaciones en las que hay mayores posibilidades de que se produzcan pagos o compensaciones indebidos en relación a los consentimientos, el Documento de trabajo núm. 6, presentado por los Estados Unidos, propuso desplazar el artículo al Capítulo de las

disposiciones generales, donde figura la prohibición de la obtención de beneficios materiales indebidos. La propuesta fue aceptada por consenso.

498 El artículo 29 establece, como norma, la prohibición de contactos y se refiere no tan solo a los "contactos directos y no controlados" sino también a los "contactos "indirectos" o "bajo control". Esta distinción fue expresamente rechazada por la Comisión especial (Informe de la Comisión especial núm. 67).

499 El artículo 4 del proyecto no autorizaba, en principio, ningún contacto entre los futuros padres adoptivos y el niño, pero el Documento de trabajo núm. 9, presentado por los Estados Unidos de América propuso que se suprimiera dicha prohibición en lo que concierne al niño, puesto que los contactos con éste no comportan los mismos riesgos de abuso que el contacto con los padres y normalmente son inevitables y pueden ser incluso deseables. La propuesta fue aceptada y carecieron de éxito intentos posteriores para reestablecer la prohibición de contactos con el niño (Doc. trab. núm. 150, presentado por Australia, Filipinas, Reino Unido, Colombia, Sri Lanka y Rumanía).

500 El artículo 29 también enmendó el texto del proyecto para tener en cuenta la propuesta formulada en el Documento de trabajo núm. 57, presentado por el Reino Unido y Bélgica, consistente en incluir en la prohibición a "otras personas que tengan la guarda (del niño)"; la propuesta fue aprobada sin objeción alguna. El término francés "garde" ha de interpretarse en el sentido de la palabra inglesa "care", es decir en un sentido más fáctico que jurídico puesto que el artículo 29 pretende evitar el contacto con las personas que se ocupen de manera efectiva del niño.

501 El Documento de trabajo núm. 151 presentado por Australia y Sri Lanka, propuso extender la prohibición al representante de los futuros padres adoptivos, incluso si se trata de una persona habilitada para ejercitar las funciones previstas por el Convenio en virtud del párrafo 2 del artículo 22. Esta propuesta no obtuvo, sin embargo, los apoyos suficientes para ser considerada en segunda lectura.

502 El artículo 29 también modifica el texto del proyecto al admitir como excepción el caso de las "adopciones entre familiares". Esta idea había sido propuesta, en particular, por los Documentos de trabajo núms. 2, 23 y 42, presentados por Colombia, Francia y Suiza, respectivamente, a fin de tener en cuenta las realidades de la vida, puesto que en las adopciones entre familiares es imposible evitar dichos contactos. No obstante, tal y como puso de relieve Sri Lanka no se establece qué es lo que hay que entender por "familia". La aprobación de esta enmienda satisfizo los deseos de otros países que estaban a favor de que las

adopciones entre parientes se excluyeran del ámbito de aplicación del Convenio (Japón, Doc. trab. núm. 65; Alemania, Doc. trab. núm. 146).

503 El Documento de trabajo núm. 42, presentado por Suiza, propuso la sustitución de la última parte del artículo 29 por la siguiente frase " bajo las condiciones establecidas por las autoridades competentes del Estado de origen". La idea que inspira esta enmienda es introducir cierta flexibilidad y permitir al Estado de origen el establecimiento de estas condiciones, ya sea por el legislador, en términos generales, ya sea caso por caso por la autoridad judicial o administrativa, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación.

504 La propuesta suiza fue aprobada y las demás propuestas fueron rechazadas, es decir: (a) la supresión de las últimas palabras, propuesta en Francia en el Documento de trabajo núm. 23 a fin de evitar el ejercicio de los poderes discrecionales por parte de las autoridades competentes del Estado de origen; (b) la sustitución propuesta por Colombia en el Documento de trabajo núm 2 por la siguiente frase: "o cuando el Estado de origen lo considere oportuno habida cuenta del interés superior del niño"; y (c) la propuesta hecha por Suecia (Doc, trab. núm 26) autorizando la excepción "si el Derecho nacional lo prevé" o la propuesta alternativa consistente en especificar que la prohibición de contactos tenía "por objeto obtener el abandono de los derechos paternales o una adopción", de manera que no se prohiba la adopción "por la única razón de que hayan habido contactos naturales e inocentes entre los futuros padres adoptivos y el niño".

505 La última parte del artículo 29 ha de relacionarse con el apartado c del artículo 36 para determinar cuáles son las autoridades competentes en caso de que un Estado contratante tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades territoriales distintas.

Artículo 30

Observaciones generales

506 El artículo 30 regula dos cuestiones distintas: (1) la recolección y conservación de información relativa al origen del niño, y (2) la disponibilidad de dichas informaciones y el acceso del niño a la misma. A pesar de que se trata de normas materiales, por lo cual puede parecer inapropiado que figuren en un Convenio de cooperación internacional, estas disposiciones se introdujeron por su importancia y por la posible necesidad de que los Estados contratantes colaboren cuando el niño intente obtener información relativa a sus raíces del Estado

contratante en el que tenga establecida su residencia habitual.

507 El artículo 30 ha de relacionarse con el artículo 16 puesto que la información a la que se refiere es principalmente la necesaria para la preparación del informe acerca del niño, que la Autoridad central del Estado de origen transmitirá a la Autoridad central del Estado de recepción.

Párrafo 1

508 El párrafo 1 reproduce sustancialmente el texto del proyecto (artículo 25) con la precisión propuesta en el Documento de trabajo núm. 125, presentado por Bélgica, respecto a la información "sobre la identidad de sus padres", y con la propuesta por México al examinarse el texto relativa a su "historia médica", que recuerda al artículo 7 del Convenio interamericano de 1984 sobre la adopción.

509 El artículo 30 se refiere a los Estados contratantes en general, incluyendo al Estado de origen, al Estado de recepción y a todo otro Estado contratante; ha de relacionarse con el apartado c del artículo 36 para determinar a la "autoridad competente" en caso de un Estado contratante tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

510 El artículo 30 ha de relacionarse con el artículo 9, de acuerdo con el cual "las Autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para a) reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción;".

511 A pesar de que hubo acuerdo en torno a la importancia de la conservación de la información sobre los orígenes del niño, se advirtieron los problemas prácticos de los Estados de origen para conservar, de manera indefinida, todas estas informaciones. El Documento de trabajo núm. 70, presentado por Alemania, propuso, sin que prosperara que se " conservara hasta que el niño alcanzara la edad de 25 años", pero se trataba solo de un período mínimo y no de un plazo máximo, ya que existen diferentes normas en vigor en los distintos países. Es, por tanto, el Estado que conserva la información quién ha de determinar cuál es la información que ha de conservarse y cuánto tiempo ha de conservarse.

Párrafo 2

512 El derecho del niño a obtener la información acerca de sus orígenes no fue objeto de discusión puesto que se reconoce en el Convenio de Naciones Unidas (artículo 7). Sin embargo un acceso ilimitado puede ser, en determinados casos, contrario al párrafo 2 del artículo 7 del propio Convenio de Naciones Unidas, que impone el respeto a los derechos y obligaciones de sus padres, entre otras personas. La cuestión se planteó desde los inicios de los trabajos en la Comisión especial, donde algunos participantes pusieron de relieve los inconvenientes que derivan de reconocer un derecho ilimitado de información en ciertas situaciones especiales, por ejemplo, cuando una madre soltera ha consentido a la adopción de su hijo y, años después, sufre graves perjuicios por la revelación de su pasado, en un momento en el que puede estar felizmente casada.

513 El artículo 30 restringe por ello el derecho del niño a acceder a informaciones relativas a sus orígenes, reproduciendo, de manera sustancial, el texto del proyecto (artículo 25). Se aprobaron, sin embargo, ciertas enmiendas.

514 La primera consiste en asegurar el acceso no sólo del niño sino también de "su representante" a fin de posibilitar dicho acceso, en particular, cuando el niño no ha alcanzado la mayoría. Los Documentos de trabajo núm. 78 y 134, presentados ambos por los Estados Unidos de América, propusieron que se especificara que las informaciones "serán comunicadas a los padres adoptivos o a las demás personas que tengan la guarda del niño hasta que éste haya alcanzado la mayoría y al propio niño, después de que haya alcanzado la mayoría". Se consideró, no obstante, que corresponde a la ley aplicable determinar no tan sólo esta cuestión sino también la propuesta por Alemania en el Documento de trabajo núm 70, que preconizó la adición de la siguiente frase: "Se tomarán las medidas adecuadas para impedir a terceros el acceso a dichos datos".

515 El proyecto concedía acceso a la información en la medida permitida por la ley del Estado de origen y la ley del Estado en que se conserva la información. En el texto final se suprimió la referencia a la ley del Estado de origen, teniendo en cuenta las dificultades de aplicación del Derecho extranjero y de información sobre su contenido cuando el niño vive muy lejos y sobre todo si la adopción se constituyó tiempo atrás. La ley del Estado de origen no se considera además la más adecuada para regir la disponibilidad o el acceso del niño a la información conservada en el Estado de recepción. Estas razones y la naturaleza de las normas que regulan el acceso a la información recopilada y conservada en un Estado, que se consideran habitualmente aplicables no obstante los

elementos de extranjería del caso concreto, explican que el artículo 30 autorice el acceso según la ley del Estado en el que se conserven dichas informaciones, tratase del Estado de origen o del Estado de recepción.

516 Los Documentos de trabajo núms. 83 y 83, presentados, respectivamente, por Australia y el Reino Unido, propusieron, sin que llegaran a prosperar, que el acceso a la información conservada en el Estado de recepción se rigiera por las leyes de ese Estado y, en cualquier caso, si el niño tuviera necesidad de "ulteriores informaciones del Estado de origen, toda información adicional acerca del paradero de sus padres biológicos sólo pudiera ser revelada por el Estado de origen conforme a su ley".

517 El Documento de trabajo núm. 134, presentado por los Estados Unidos de América, propuso la inclusión de la siguiente frase: "si dicha información no revela nombres o datos identificadores" a fin de regular de forma adecuada la cuestión extremadamente delicada de la identidad. La regla no debería ser ambigua, puesto que, de acuerdo con la experiencia, una vez se conocen el lugar de nacimiento, el hospital en que tuvo lugar dicho nacimiento, el sexo del niño etc., es sumamente fácil averiguar la identidad de los padres del niño. Sin embargo, varios participantes advirtieron que esta cuestión debería ser determinada por la ley del Estado en el que se conservara la información, sin olvidar que el Estado de origen puede evitar futuras dificultades no proporcionando dichas informaciones, de acuerdo con lo que permite el párrafo 2 del artículo 16.

518 Sea cual sea el contenido de la ley aplicable, el artículo 30 establece que el acceso a dicha información se proporcionará con el "debido asesoramiento", para evitar, en la medida de lo posible, resultados perjudiciales para el niño, ya sea por razones emocionales o de otro tipo. Sin embargo, por razones obvias, este requisito sólo se observará cuando es el niño y no su representante quien intenta informarse. Además, la información sólo se proporcionará tras tomar todas las medidas adecuadas, teniendo en cuenta la edad del niño adoptado y otras condiciones personales que hagan necesarias especiales precauciones.

Artículo 31

519 El artículo 31 reproduce el texto del proyecto (artículo 26) y se introdujo porque hubo consenso en torno al hecho de que si el Convenio no concede una protección adecuada, las partes interesadas proporcionarían una información menor y el resultado final perjudicaría el éxito de la adopción internacional. En consecuencia el artículo 30 reconoce el derecho del niño a conocer sus orígenes en determinadas condiciones, pero al mismo tiempo el Convenio intenta evitar excesos y abusos, por lo que establece, en su artículo 31, que los datos personales que

se obtengan o transmitan durante el procedimiento de adopción y que sean necesarios para la redacción de los informes sólo deben ser utilizados a estos fines.

520 Las mismas razones explican la solución aprobada por el Convenio interamericano de 1984 si bien su artículo 7 va aún más lejos puesto que establece: "Se garantizará el secreto de la adopción cuando correspondiere. No obstante, cuando ello fuere posible, se comunicarán a quien legalmente proceda los antecedentes clínicos del menor y de los progenitores si se los conociere, sin mencionar sus nombres ni otros datos que permitan su identificación"

521 La propuesta de que esta cuestión se rigiera por el Derecho interno de los Estados contratantes no prosperó puesto que la protección de datos no ha alcanzado en todas partes el mismo nivel de desarrollo. Se decidió, por tanto, que el Convenio estableciera ciertas garantías mínimas consistentes en estipular que la información sobre el niño y sus futuros padres adoptivos sólo puede utilizarse para los fines para los que se obtuvo o transmitió.

522 El artículo 31 es lo suficientemente amplio como para proteger no tan solo los datos personales recogidos en el Estado de origen y en el Estado de recepción sino también la información transmitida por el uno al otro con objeto de la adopción internacional.

523 La protección de datos prevista en el artículo 31 no impide, sin embargo, que la información obtenida o transmitida sea utilizada, en términos generales, sin hacer referencia a las personas implicadas, por ejemplo para la preparación de estadísticas anónimas o para ilustrar los problemas que suscita la adopción internacional. No debería haber duda alguna respecto a esta posibilidad, habida cuenta de lo dispuesto por el artículo 9, apartado d.

524 El Documento de trabajo núm. 70, presentado por Alemania, propuso que se añadieran reglas detalladas, pero esta propuesta fue retirada aún antes de ser examinada.

525 El Documento de trabajo núm. 89, presentado por Suecia, propuso que se suprimiera el artículo, argumentando que no se diferencia entre los datos que se conservan de manera automatizada y los datos recopilados de forma manual. Se podrían, por tanto, producir ciertos problemas puesto que la legislación sobre la protección de datos no es la misma en todos los países del mundo y además podrían surgir conflictos entre la necesidad de evitar abusos y el principio de publicidad de los documentos oficiales. Ha de tenerse, además, en cuenta que esta cuestión ya se trata en el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los individuos en relación al tratamiento automatizado de los datos personales (European Treaty Series (ETS) nº 108). La propuesta fue, no obstante, retirada antes de ser considerada.

Artículo 32

Párrafo 1

526 El párrafo 1 reproduce el texto del proyecto (primer párrafo del artículo 27) que confirmó, en términos generales en una disposición autónoma la obligación impuesta a los Estados contratantes en virtud del artículo 21, apartado d CDC de "adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de una adopción en otro país, la colocación no de lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella". Este mismo principio también se establece como condición de validez de la adopción en el artículo 4, apartados c (3) y d (4).

527 Se insistió mucho en la importancia de la cuestión en el seno de la Comisión especial, donde se recordó que la "situación actualmente existente revela que no son tan solo los organismos intermediarios los que se sienten atraídos por la posibilidad de obtener beneficios materiales indebidos" sino que "ha ocurrido que abogados, notarios, funcionarios públicos, incluidos jueces y profesores universitarios, han solicitado o aceptado cantidades excesivas de dinero o regalos suntuosos de los futuros padres adoptivos" (Informe de la Comisión especial, núm. 310).

528 El párrafo 1 del artículo 32 tan solo prohíbe los beneficios materiales "indebidos", ya sean económicos o de otro tipo. Se permiten, por tanto, todos los beneficios legítimos y, por ello, el párrafo 2 permite no tan sólo el reembolso de costes y gastos, directos e indirectos, sino también el pago de honorarios profesionales razonables a las personas que han intervenido en la adopción, incluyendo también a los juristas.

529 El artículo 32 no dice nada sobre las consecuencias de la violación de dicho precepto pero, sin lugar a dudas, la denegación del reconocimiento automático de la adopción sería, en la mayor parte de los casos, una consecuencia excesiva. Por esta razón, España presentó el Documento de trabajo núm. 106 (Veáanse los comentarios en relación al artículo 23, párrafo 1, primera frase); otros participantes consideraron que tenía poco sentido formular una prohibición de carácter general sin precisar cuales son los efectos de su violación.

Párrafo 2

530 El párrafo 2 reproduce sustancialmente el texto del proyecto (segundo párrafo) pero se suprimió la referencia expresa a costes "directos e indirectos" si bien esta decisión se tomó en varias etapas. En primer lugar, el Documento de trabajo núm. 131, presentado por Francia, propuso que se suprimiera la palabra "indirectos" porque no es muy precisa y porque puede llevar a confusión, aunque

se explicó que por "costes indirectos" ha de entenderse todo lo que exceda a los costes reales de una adopción, como por ejemplo una contribución a gastos imprevistos. Colombia se opuso, porque la supresión propuesta podría afectar a las donaciones que en favor de la infancia se suelen hacer en ese Estado con ocasión de las adopciones internacionales. En el Documento de trabajo núm. 147, presentado por el Reino Unido, Grecia, Irlanda, Suiza, Australia y los Estados Unidos de América, se propuso también suprimir la palabra "directos" porque la distinción entre costes y gastos directos e indirectos puede suscitar un debate respecto a principios de contabilidad, oscureciendo la intención de la prohibición que contiene el párrafo 2 del artículo 32. Así ocurre por ejemplo en relación a los impuestos municipales que se consideran gastos "directos" o "indirectos" en función de los principios de contabilidad aplicados en cada país. Por esta razón se suprimieron las palabras "directos" e "indirectos".

531 Según ciertos participantes la calificación de "razonables" que se añade a "honorarios profesionales" podría causar especiales problemas a los países del Common Law, puesto que se trata de un término de carácter técnico que permite a los tribunales enjuiciar si los honorarios solicitados están justificados. Esta cuestión puede depender, por ejemplo, del lugar en el que tiene su sede el tribunal: en una pequeña ciudad de provincias los honorarios razonables serían muy inferiores que en una ciudad grande como Nueva York donde se considerarían razonables unos honorarios mucho más elevados. Por este motivo, el Documento de trabajo núm. 141, presentado por los Estados Unidos de América, propuso que "las Autoridades centrales, las autoridades públicas, las autoridades competentes y los organismos acreditados fijaran honorarios adecuados para los costes y gastos directos e indirectos de una adopción internacional que tengan en cuenta la totalidad de actividades realizadas por dichas autoridades y organismos e incluyan los costes de administración y funcionamiento de servicios de protección de la infancia distintos a los servicios de adopción". De forma análoga, en el Documento de trabajo núm. 106, presentado por España, se hizo referencia a los "honorarios autorizados por el Estado en el cual dicha persona ejerce su profesión". Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas, puesto que se puso de relieve que en determinados países el Estado no fija los honorarios de los abogados y pueden producirse abusos si los honorarios fijados son demasiado bajos.

532 Hubo un acuerdo general respecto a que el párrafo 2 ha de ser interpretado de forma amplia e incluir los honorarios de cualquier persona involucrada en un procedimiento de adopción, por ejemplo, de abogados, psicólogos y médicos.

Párrafo 3

533 El párrafo 3 reproduce el texto del proyecto (tercer párrafo del artículo 27) y extiende la misma prohibición en relación a directores, administradores y empleados de organismos, acreditados o no (no se hace distinción alguna), que no pueden recibir remuneraciones desproporcionadas en relación a los servicios prestados.

534 En realidad depende de cada Estado contratante determinar cuando una remuneración es desproporcionada, de manera que las decisiones respecto a casos similares pueden diferir.

Artículo 33

535 La primera frase del artículo 33 ha de relacionarse con el apartado c del artículo 36 a fin de determinar cuáles son las autoridades competentes en caso de que un Estado contratante tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales.

A pesar de que la frase se refiere a "toda autoridad competente", sin duda alguna la información debería también ser transmitida por un organismo acreditado e incluso por un organismo o persona no acreditado.

536 La formulación de la primera frase es muy amplia y, en consecuencia, la obligación impuesta a las autoridades de los Estados contratantes no se refiere tan solo a casos individuales sino a cualquier forma sistemática de falta de respeto al Convenio. Además, los términos generales hacen aplicable el artículo a los casos en que tan solo hay un intento de eludir las reglas del Convenio.

537 La segunda frase ha de relacionarse con el artículo 7, apartado b, que impone a las Autoridades centrales la obligación de tomar directamente, sin que quepa delegación alguna, todas las medidas para informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y para suprimir, en la medida de lo posible, los obstáculos para su aplicación. La Autoridad central no debe, por consiguiente, esperar a que le llegue la información, sino que ha de actuar *ex officio* en todos los casos en los que descubra que existe un grave riesgo de que se violen las disposiciones del Convenio.

538 Las medidas que han de tomarse de acuerdo con la segunda frase del artículo 33 no impiden que el Estado pueda hacer valer otros derechos derivados del Derecho internacional público frente a la violación del Convenio.

539 El Documento de trabajo núm. 82, presentado por Australia, propuso la inclusión de un nuevo párrafo 33 con la redacción siguiente: "Si las Autoridades centrales no

pueden ponerse de acuerdo para regular las violaciones del Convenio, un Estado contratante puede suspender la aplicación del Convenio respecto a otro Estado contratante, si, según él, dicho Estado viola intencionadamente el Convenio o los principios sobre los cuales éste se basa. La duración de tal suspensión se limita a doce meses. Si se produce dicha suspensión, el Estado que la ordena está obligado a notificar inmediatamente a la Oficina Permanente la suspensión de la aplicación del Convenio entre ambos Estados y a comunicar la causa de la misma". El Reino Unido presentó en el Documento de trabajo núm. 83 una propuesta en el mismo sentido con la diferencia principal de que la suspensión ha de ser para un período específico y no para un máximo de doce meses.

540 La propuesta refleja la preocupación de Australia de que, no obstante los términos del Convenio y la buena voluntad de respetarlo, pueda producirse, en determinados casos, una falta de cumplimiento de algunos de sus requisitos. Si un Estado contratante estima que los consentimientos otorgados en otro Estado contratante no reúnen las condiciones del Convenio, sino que se trata únicamente de consentimientos nominal, el primer Estado en la práctica se estaría siendo cómplice en el tráfico de niños o en otra conducta contraria a sus intereses. En dichas circunstancias un Estado debería poder continuar aplicando el Convenio respecto a los demás Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido, sin que, por ello, tenga que tratar con el país con el que mantiene discrepancias. La única alternativa actualmente existente sería la denuncia del Convenio y de las obligaciones que de éste derivan, pero se trata de un precio demasiado elevado y es menos deseable que la suspensión de la aplicación del Convenio respecto a un determinado país por un determinado tiempo. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

Artículo 34

541 Este artículo es nuevo y tiene su origen en el Documento de trabajo núm. 100, presentado por la Oficina Permanente, donde se propuso el texto siguiente: "Los costes de todas las traducciones necesarias correrán a cargo de los futuros padres adoptivos"; esta enmienda fue completada por el Documento de trabajo núm. 130, presentado por Suiza, para limitar la aplicación de esta disposición a los supuestos en los que el Estado de destino requiere una traducción del documento.

542 No obstante la aprobación de estas propuestas, los Estados Unidos de América y el Reino Unido presentaron el Documento de trabajo núm. 156 proponiendo evitar que el Convenio establezca quien ha de correr con los costes de traducción, puesto que éstos pueden ser asumidos por el propio Estado, por los organismos acreditados o los futuros padres adoptivos. Propusieron, por tanto, la siguiente

redacción: "Todo Estado puede establecer que los costes de todas las traducciones necesarias correrán a cargo de los futuros padres adoptivos". Esta propuesta fue aprobada y se adoptó el artículo 34 con dicha enmienda. Ha de tenerse en cuenta que, en la práctica, los costes de las traducciones se incluyen en los costes de la adopción fijados por las autoridades y organismos acreditados afectados.

543 El artículo 34 se aprobó, a pesar de que ciertos participantes manifestaron que estas cuestiones deberían regirse por el Derecho nacional y no por el Convenio.

544 Sin lugar a dudas, la referencia a los "futuros padres adoptivos" tan sólo es adecuada antes de que se constituya la adopción puesto que después de la misma se trata de "padres adoptivos".

Artículo 35

545 Este artículo es nuevo y se basa en el Documento de trabajo núm. 89 presentado por Suecia que propuso la introducción de un precepto que dijera: "Las autoridades competentes de los Estados contratantes actuarán con celeridad en los procedimientos de adopción". A pesar de que, como establece el apartado b del artículo 9, las Autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado, todas las medidas apropiadas para "facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción" esta obligación se consideró insuficiente y por esta razón se consideró útil la inclusión de una disposición similar al artículo 9 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores. La propuesta obtuvo apoyos y el Reino Unido solicitó que se ampliara de manera que se aplicara también a los tribunales y a los demás organismos que intervienen en la adopción; esta modificación fue aceptada sin objeciones.

546 El Documento de trabajo núm. 184, presentado en segunda lectura por los Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Filipinas, Uruguay y Venezuela, propuso la supresión del artículo 35 y la reformulación del artículo 9, apartado b, para imponer a las Autoridades centrales la obligación de "activar los procedimientos, si es necesario incitando a las autoridades competentes a actuar rápidamente". La formulación del artículo 35 se consideró "demasiado general e impersonal", observándose además que los expedientes han de examinarse con cuidado antes de tomar una decisión sobre la adopción y que el acelerar los procedimientos de adopción podría ser contrario al interés superior del niño. Suecia se opuso, no obstante, a la nueva redacción puesto que no cubría todos los posibles retrasos en los procedimientos de adopción, y de seguimiento de la adopción. Como

sólo una minoría de delegados apoyó la propuesta, el Documento de trabajo núm. 184 fracasó.

Artículo 36

Frase introductoria

547 El artículo 36 tiene su origen en el Documento de trabajo núm. 100, presentado por la Oficina Permanente, que fue revisado por el Comité sobre cláusulas federales y presentado en el Documento de trabajo núm. 157. Se trata de un artículo clásico, que hallamos en todos los recientes Convenios de La Haya, y que regula la situación en la que un Estado contratante está compuesto de dos o más unidades territoriales que tienen cada una su propio sistema jurídico en relación a la adopción. A pesar del hecho de que suele conocerse como "cláusula federal" ha de tenerse presente que el artículo 36 se aplica no tan solo a Estados con una estructura federal como, por ejemplo, los Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Suiza sino también a Estados unitarios como el Reino Unido y España, en los que las diversas unidades territoriales tienen sus propios sistemas jurídicos.

548 El texto aprobado reproduce la frase introductoria del artículo 31 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores con los ajustes necesarios para su aplicación a cuestiones de adopción, tal y como propuso la delegación austríaca.

Apartado a

549 El apartado a reproduce, sin modificaciones, el texto del apartado a del artículo 31 del Convenio de la Haya de sustracción de menores y especifica que toda referencia a la residencia habitual en un Estado contratante que, en materia de adopción, tenga dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales se entenderá referida a la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado. La solución la proporciona, por tanto directamente el Convenio, sin que se tomen en consideración las reglas interterritoriales del Estado afectado.

Apartado b

550 La propuesta hecha por la Oficina Permanente en el Documento de trabajo núm. 100 fue modificada por el Comité sobre cláusulas federales para adecuarla al artículo 19 del Convenio de La Haya sobre la venta y, por tanto, no

hace referencia "a la ley de la unidad territorial correspondiente" sino "a la ley vigente en la correspondiente unidad territorial".

Apartado c

551 El apartado c reproduce el texto propuesto en el Documento de trabajo núm. 100 presentado por la Oficina Permanente con las enmiendas introducidas por el Comité sobre cláusulas federales en el Documento de trabajo núm. 157, a fin de mencionar no únicamente a las "autoridades competentes" sino también a las "autoridades públicas" a las que se refieren diversos artículos del Convenio. El Comité de redacción introdujo además algunas modificaciones lingüísticas a fin de simplificar la formulación del texto.

Apartado d

552 El Comité sobre cláusulas federales añadió el apartado d por las particularidades de este Convenio, que permite la intervención en el procedimiento de adopción de organismos acreditados. No se menciona a los organismos y personas no acreditados a los que se refiere el artículo 22, párrafos 2 y 3, pero toda referencia a los mismos ha de interpretarse de la misma manera.

Artículo 37

553 El Documento de trabajo núm. 100, presentado por la Oficina Permanente, reproduce el artículo 32 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores, que no fue modificado por el Comité sobre cláusulas federales. El Documento de trabajo núm. 197, presentado por Nepal, propuso añadir, en aras de la claridad, al final la siguiente frase "como aplicable a dichas personas", pero la propuesta no obtuvo el suficiente apoyo como para ser considerada en segunda lectura.

554 El artículo 37 es una disposición tradicional en los Convenios de La Haya y pretende resolver los problemas que se plantean a Estados con dos o más sistemas jurídicos aplicables a distintas categorías de personas. El delegado del Líbano hizo hincapié sobre la importancia práctica de la cuestión y puso de relieve que en su Estado no existe, debido a la coexistencia de distintas comunidades, en particular la islámica y la cristiana, un estatuto personal uniforme. La comunidad islámica no conoce la adopción y la inscripción del nuevo nombre del niño en el Registro civil; la comunidad cristiana admite distintas soluciones de acuerdo con los diferentes ritos religiosos y las cuestio-

nes relativas a la adopción corresponden a los tribunales eclesiásticos y no a los tribunales civiles.

Artículo 38

555 El artículo 38 reproduce, con ligeras variaciones lingüísticas, la propuesta formulada por la Oficina Permanente en el Documento de trabajo núm. 100, que se limitaba a reproducir el artículo 33 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores. Este texto no fue modificado por el Comité sobre cláusulas federales (Doc. Trab. núm. 157) y se trata de una disposición tradicional, que excluye del ámbito de aplicación del Convenio los conflictos entre las leyes internas en vigor en un mismo Estado contratante.

556 Como explicó el Secretario general la idea que inspira a esta disposición es evitar que el Convenio sea aplicable a los casos de adopción en los que un niño sea desplazado de una unidad de un Estado federal a otra. Se encargó al Comité de redacción que buscara la mejor formulación de la misma y finalmente se aprobó el texto presentado en el Documento de trabajo núm. 180.

Artículo 39

Observaciones generales

557 La Comisión especial examinó la cuestión de la relación del Convenio con otros convenios y solicitó a la Oficina Permanente que preparara un texto para su examen en la Decimoséptima Sesión, regulando las relaciones con otros instrumentos existentes mencionados de manera expresa en distintos Documentos de trabajo presentados (Informe de la Comisión especial, núm. 322).

558 Por esta razón, el Documento de trabajo núm. 100 presentado por la Oficina Permanente incluyó la siguiente disposición: "El Convenio no derogará la aplicación entre Estados parte de ambos Convenios del (1) Convenio sobre competencia judicial internacional, ley aplicable y reconocimiento de decisiones en materia de adopción, hecho en La Haya el 15 de noviembre de 1965; (2) del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980; o (3) del Convenio sobre los conflictos de leyes en materia de adopción de menores, hecho en La Paz el 24 de mayo de 1984".

559 El Primer Secretario de la Oficina Permanente explicó que, en caso de conflicto, estos instrumentos deberían prevalecer sobre el presente Convenio. Reconoció que el artículo propuesto podía no resolver definitivamente todos los posibles problemas "debido al elevado número de convenios en materia de protección de niños", como por

ejemplo el Convenio de La Haya de 1961 relativo a la competencia de autoridades y la ley aplicable en materia de protección de menores. Por esta razón, se había preferido "no considerar más que los convenios en relación a los cuales parecía haber mayor potencial de previsibles conflictos, dejando de lado otros convenios respecto a los cuales el potencial de conflictos parecía menor", como por ejemplo el Convenio de La Haya sobre la supresión de la legalización de documentos públicos extranjeros. En consecuencia, los conflictos que surgieran en relación a los convenios no mencionados habrían de ser resueltos por los Estados contratantes de acuerdo con las normas, si las hubiera, establecidas en estos otros convenios o conforme a las reglas generales del Derecho de los Tratados.

560 En el Documento de trabajo núm. 33 presentado por Bélgica se partió de un punto de vista distinto. Se trató de resolver de manera general el problema en los siguientes términos: "El presente Convenio sustituye en las relaciones entre Estados contratantes al *Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre competencia de autoridades, ley aplicable y reconocimiento de decisiones en materia de adopción*. Este Convenio no deroga a los demás instrumentos internacionales de los cuales los Estados parte sean o devengan parte y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por este Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos. En cualquier caso los Estados contratantes no podrán concluir con uno o más Estados contratantes acuerdos contrarios a las disposiciones de los Capítulos II y IV del Convenio."

561 El Documento de trabajo núm. 61, presentado por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, sólo se refería a una sola cuestión: "No obstante las disposiciones del Capítulo IV todo Estado contratante puede mantener o establecer con otro Estado contratante procedimientos simplificados respecto a la adopción internacional en los casos en que el niño y los futuros padres adoptivos sean nacionales o tengan su residencia habitual en dichos Estados, en la medida en la que estos acuerdos sean compatibles con las demás disposiciones de este Convenio". La propuesta fue completada en el Documento de trabajo núm. 140 con la frase siguiente: "Todo Estado contratante que sea parte de un acuerdo de los previstos en el párrafo 1 comunicará dicho acuerdo al depositario del presente Convenio".

562 Habida cuenta de las dificultades de la materia y a fin de lograr cierto equilibrio, ambas propuestas fueron refundidas en el Documento de trabajo núm. 153, presentado por Bélgica, Finlandia e Irlanda, en el que se proponía la siguiente redacción: "1. El Convenio no afecta a los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean parte y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos

instrumentos. 2. Todo Estado contratante podrá concluir con uno o más Estados contratantes acuerdos complementarios al presente Convenio para favorecer su aplicación en sus relaciones recíprocas. Estos acuerdos sólo podrán derogar las disposiciones contenidas en los artículos 14 a 20, inclusive. Los Estados que concluyan tales acuerdos transmitirán una copia autentica al depositario del presente Convenio."

563 El Documento de trabajo núm. 153, presentado por Bélgica, Finlandia e Irlanda, propuso además la inclusión del siguiente nuevo artículo: "Cualquier Estado contratante puede informar al depositario del Convenio de que no se reconocerán en dicho Estado las adopciones realizadas en virtud de un acuerdo concluido en aplicación del artículo 30, párrafo 2 si dicho acuerdo deroga las disposiciones de los artículos 14 a 20".

564 El delegado belga explicó que el compromiso, que buscaba el Documento de trabajo núm. 153, se estructuraba de la siguiente forma: el primer párrafo tiene en cuenta la situación de Estados ya vinculados por tratados en materia de adopción, como los países nórdicos, y reproduce la solución clásica, confirmada recientemente por el Convenio de la Haya de 1988 sobre la ley aplicable en materia de sucesiones por causa de muerte; el segundo párrafo admite la posibilidad de que se concluyan acuerdos complementarios, pero únicamente si no afectan a las disposiciones fundamentales del presente Convenio y el nuevo artículo permite a los Estados contratantes no reconocer las adopciones realizadas de acuerdo con los futuros acuerdos.

565 El compromiso representado por el Documento de trabajo núm. 153 fue considerado aceptable y se introdujeron tan solo ligeras enmiendas, como demuestra el Documento de trabajo núm. 180 presentado por el Comité de redacción. Los cambios son los siguientes: (1) los acuerdos futuros que pueden concluir los Estados contratantes no tienen por finalidad "complementar" el Convenio sino "favorecer su aplicación en las relaciones recíprocas"; (2) el artículo 17 se incluye entre las disposiciones que no pueden derogarse; y (3) los futuros acuerdos sólo pueden derogar las normas contenidas en los artículos 14 a 16 y 18 a 21.

Párrafo 1

566 El párrafo 1 del artículo 39 tiene en cuenta la situación de los Estados que ya están vinculados por tratados en materia de adopción, como los Estados nórdicos, y prevé que el Convenio no derogará a dichos instrumentos internacionales aunque contengan reglas distintas, salvo que los Estados parte en dichos instrumentos hagan una declaración en contrario. Sin embargo, los demás Estados

contratantes del presente Convenio no están obligados a reconocer las adopciones constituidas en virtud de dichos acuerdos.

567 Los Estados parte de los convenios existentes no están obligados ni a declarar ni a remitir una copia de los mismos al depositario del presente Convenio, como prescribe de manera expresa el párrafo 2 respecto a futuros acuerdos. A este respecto ha de tenerse en cuenta que la propuesta, que exigía dicha notificación, presentada por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en el Documento de trabajo núm. 140, no prosperó.

568 No se establece ningún plazo para realizar la declaración en contrario permitida por el párrafo 1 del artículo 39 y, por ello, puede realizarse en cualquier momento, sin que el Convenio contenga ninguna regla respecto a su eventual retirada.

569 El Documento de trabajo núm. 195, presentado por los Estados Unidos de América y el Reino Unido propuso la inclusión de un nuevo artículo que establecía que "el Convenio no prejuzga la aplicación, entre Estados parte de ambos Convenios, del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, firmado en La Haya el 25 de octubre de 1980". La propuesta no pudo ser considerada por falta de apoyo de acuerdo con lo establecido en las reglas de procedimiento, pero hubo consenso acerca de que ha de entenderse que las palabras "sobre materias reguladas por el presente Convenio" incluyen y permiten la aplicación, cuando haya algún conflicto con el presente Convenio, en particular, no tan solo del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores sino también del Convenio de 1965 sobre competencia de autoridades, ley aplicable y reconocimiento de decisiones en materia de adopción y del Convenio interamericano de 1984 sobre los conflictos de leyes en relación a la adopción de menores.

Párrafo 2

570 La posibilidad de concluir acuerdos futuros para favorecer la aplicación del Convenio permitida por el párrafo 2 del artículo 39 pretende respetar los vínculos tradicionales y los factores históricos, geográficos y de otro tipo que aproximan a determinados Estados contratantes, como es el caso de los países nórdicos, los Estados de la Unión europea y los nuevos Estados que han surgido a raíz de los acontecimientos recientes que han ocurrido en la antigua Unión de Repúblicas socialistas soviéticas (URSS), Checoslovaquia y Yugoslavia. Esta posibilidad se existe también cuando, como pusieron de relieve algunos participantes, los antecedentes históricos son menos importantes, como entre Canadá y los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de América y México.

571 A pesar del hecho de que el Documento de trabajo núm. 195, presentado por los Estados Unidos de América y el Reino Unido, no prosperó por causas formales, el párrafo 2 del artículo 39 no se refiere a acuerdos como el Convenio de La Haya sobre sustracción de menores, el Convenio de La Haya de 1965 en materia de adopción y el Convenio interamericano de 1984 sobre la adopción de menores. Si alguno de estos tratados entrara en vigor en uno de los Estados parte del presente Convenio, los demás Estados contratantes no estarían autorizados a realizar la declaración prevista en el artículo 25.

572 Consideraciones análogas se aplican también al Convenio de La Haya de 1961 sobre la supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, puesto que no puede ser considerado uno de los acuerdos a los que se refiere el párrafo 2 del artículo 39. Por tanto, su entrada en vigor en uno de los Estados partes del presente Convenio no autoriza a los demás Estados contratantes a realizar la declaración prevista en el artículo 25.

573 Los acuerdos permitidos por el párrafo 2 tan sólo pueden derogar las disposiciones contenidas en los artículos 14 a 16 y 18 a 21 y esta interdicción se explica porque los futuros instrumentos internacionales no deben afectar a las reglas fundamentales del Convenio. Austria propuso en tercera lectura que se mencionara expresamente el párrafo 1 del artículo 19 entre las disposiciones que no pueden derogarse. Esta mención fue considerada innecesaria porque el artículo 39, párrafo 2, se refiere al artículo 17 y el artículo 17 no puede ser derogado.

574 El segundo párrafo del artículo 39 implica una restricción importante de la regla del artículo 41, primer párrafo, primera frase, del Convenio de Viena sobre el Derecho de los tratados de Naciones Unidas, que reconoce, en principio, la libertad de los Estados para concluir tratados multilaterales o bilaterales derogando un convenio multilateral existente.

575 La última frase del párrafo 2 obliga a los Estados contratantes parte de dichos futuros acuerdos a transmitir una copia al depositario, para que éste pueda cumplir la tarea que le impone el apartado e del artículo 48. Esto es de particular importancia puesto que permite a los Estados contratantes terceros realizar la declaración prevista en el artículo 25, según la cual no estarán obligados por el Convenio a reconocer las adopciones hechas conforme a tales futuros acuerdos (Veáanse los comentarios acerca el artículo 25).

576 La última frase del segundo párrafo no establece, no obstante, un plazo para la transmisión de la copia ni tampoco prevé ninguna sanción para el supuesto de violación

de la obligación impuesta a los Estados contratantes que concluyan dichos futuros acuerdos.

577 El Convenio no contiene ninguna disposición respecto a la relación con tratados futuros sobre materias regidas por él, salvo por lo que respecta a los acuerdos para favorecer la aplicación del Convenio en sus relaciones recíprocas (por ejemplo, respecto a un nuevo Convenio general de protección de menores). En tales casos se aplicarán las reglas generales del Derecho de los tratados (Veáse el artículo 30 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los tratados de Naciones Unidas).

Artículo 40

578 Al finalizar la segunda lectura, el Secretario general adjunto puso de relieve la necesidad de incluir un artículo sobre las reservas, como en todos los anteriores Convenios de La Haya, y mencionó, como modelo a seguir, el artículo 27 del Convenio de La Haya sobre ley aplicable a los regímenes matrimoniales. Insistió en la necesidad de evitar interpretaciones a contrario a partir del silencio del Convenio sobre esta cuestión, en particular si se tiene en cuenta el carácter vinculante de las normas del Convenio. El Reino Unido suscribió dicha propuesta a pesar de que, como proponía el Documento de trabajo núm. 174, hubiera preferido poder hacer reservas en cuestiones como la nacionalidad del niño adoptado. Nepal e Indonesia propusieron que se siguiera el artículo 51 del Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, permitiendo las reservas que no fueran incompatibles con el objeto y la finalidad del Convenio. Filipinas, apoyada por El Salvador, México y Chile, propuso que se aplicaran las disposiciones del Convenio de Viena sobre el Derecho de los tratados de Naciones Unidas. India prefirió que no se incluyera un artículo de este tipo y el delegado brasileño se opuso a que se considerara la propuesta por razones formales basadas en las reglas de procedimiento. Sin embargo, una amplia mayoría aprobó el artículo 40, bajo el entendimiento de que las declaraciones permitidas por el artículo 25 no son reservas.

Artículo 41

579 El artículo 41 fue discutido sobre la base de la propuesta presentada por la Oficina permanente en el Documento de trabajo núm. 100, que establecía que "el Convenio sólo se aplica entre los Estados contratantes tras su entrada en vigor en dichos Estados". A pesar de estar de acuerdo en cuanto al fondo, Suiza señaló que la adopción puede ser concedida tras la entrada en vigor del Convenio en un Estado pero haber sido preparada no de acuerdo con las reglas del Convenio sino de acuerdo con el Derecho interno de dicho Estado. Por ello se consideró más apropia-

do tomar en consideración el momento en el que se inicia la adopción. Dicha idea fue aceptada.

580 El Documento de trabajo núm. 180, presentado por el Comité de redacción, especificaba el momento en el que ha de considerarse que se inician los procedimientos y propuso la siguiente redacción: "El Convenio se aplicará siempre que una solicitud formulada conforme al artículo 14 sea recibida después de la entrada en vigor del Convenio entre el Estado de origen y en el Estado de recepción". El delegado italiano señaló la ambigüedad de la propuesta pero ésta pasó a ser el texto final tras efectuarse ligeros ajustes lingüísticos.

581 El artículo 41 sólo establece las condiciones de aplicación del Convenio entre el Estado de origen y el Estado de recepción pero deja abierta, tal y como señaló Suiza, la cuestión de su aplicación en las relaciones con los demás Estados contratantes.

582 Bélgica suscitó el problema de la ubicación de esta disposición- en el Capítulo I donde se determina el ámbito de aplicación del Convenio o en el Capítulo VI con las demás disposiciones generales. La Conferencia se decidió en el último sentido, tal y como es habitual, tras tener en cuenta la explicación hecha por el Secretario General de la Oficina Permanente de que la finalidad del artículo 41 es restringir la aplicación del Convenio a las adopciones constituidas tras su entrada en vigor.

583 El artículo 41 no responde la cuestión de la entrada en vigor del Convenio en general, que se resuelve en el artículo 46, sino la de su aplicación a un caso particular, partiendo de la hipótesis de que el Convenio ya está en vigor en el Estado de origen y el Estado de recepción.

584 El Documento de trabajo núm. 100, presentado por la Oficina Permanente, propuso añadir un segundo párrafo al artículo con la siguiente redacción: " Un Estado contratante puede extender en cualquier momento mediante una declaración la aplicación del Capítulo V (Reconocimiento) a otras adopciones certificadas como conformes al Convenio por la autoridad competente del Estado donde han tenido lugar". La idea que inspiraba la propuesta fue dar respuesta a la cuestión de la validez de las adopciones ya realizadas en los Estados contratantes cuando un Estado pasa a ser parte del Convenio.

585 Algunos participantes consideraron que la propuesta era ambigua y propusieron o bien suprimirla o al menos precisarla, mientras que otros le dieron su apoyo. El Observador de la Comisión Internacional del Estado Civil puso de relieve que era innecesaria e incluso peligrosa porque de su formulación podría desprenderse, si se interpretara a contrario, una conclusión perversa, puesto

que la consecuencia natural del hecho de llegar a ser parte del Convenio debería ser el reconocimiento de las adopciones ya realizadas en los Estados contratantes. La "declaración" prevista en el segundo párrafo podría interpretarse, por tanto, como autorizando la denegación del reconocimiento de tales adopciones y, por esta razón, la propuesta fue rechazada.

Artículo 42

586 El artículo 42 reproduce el texto del proyecto (artículo 29) y tiene en cuenta la experiencia de los demás Convenios de La Haya, en particular del Convenio de sustracción de menores, para afirmar que el Convenio sobre la adopción internacional no debe ser un fin en sí mismo sino sentar las bases para una periódica revisión y mejora de su aplicación. Por ello, el Secretario general de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado deberá convocar, tras la entrada en vigor del Convenio, Comisiones especiales a intervalos regulares a fin de examinar su funcionamiento. Todos los Estados parte podrán participar en dichas reuniones y se invitará a participar a los Estados miembros y no miembros y a las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales que participaron en la Decimoséptima sesión.

587 El artículo 42 ha de relacionarse con la Decisión aprobada por la Decimoséptima Sesión expresando el deseo de que los expertos que participen en la primera reunión de la Comisión especial convocada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 establezcan formularios modelo a utilizar en relación a los consentimientos requeridos por el artículo 4, apartado c, y para el certificado previsto por el artículo 23, a fin de asegurar una aplicación correcta y uniforme de dichas disposiciones.

588 El Documento de trabajo núm. 16, presentado por España, propuso la inclusión de un primer párrafo del artículo 42 con el siguiente tenor: "Los Estados contratantes intentarán que en la aplicación del Convenio las autoridades competentes y las Autoridades centrales interpreten de manera uniforme los términos empleados en el Convenio". De acuerdo con esta propuesta, las reuniones de la Comisión especial deberían "facilitar la interpretación uniforme del Convenio", pero la adición propuesta no prosperó, puesto que se consideró innecesaria. A estos efectos, se puso de relieve que la interpretación uniforme es inherente a todos los Convenios y que la propuesta no se adecuaba al caso concreto del Convenio, habida cuenta de su naturaleza, ya que el Convenio pretende, sobre todo, promover la cooperación entre los Estados contratantes para asegurar el respeto de determinadas garantías en materia de adopción internacional previniendo así el secuestro, la venta y el tráfico de niños.

CAPITULO VII- CLAUSULAS FINALES

589 El Capítulo VII contiene artículos que se pueden encontrar en todos los Convenios de La Haya y, conforme a la práctica de la Conferencia, se ocupan de la firma, ratificación, aceptación o aprobación (artículo 43), de la adhesión (artículo 44), de los Estados que comprenden dos o más unidades territoriales en las que a las materias reguladas por el Convenio se aplican distintos sistemas jurídicos (artículo 45), acerca de su entrada en vigor (artículo 46), su denuncia (artículo 47) y la notificación que ha de dirigirse al depositario (artículo 48).

590 Alemania propuso que se incorporara una cláusula similar al artículo 29 del Convenio de La Haya de 1 de agosto de 1989 sobre la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte (en adelante Convenio sobre sucesiones), pero posteriormente retiró dicha propuesta debido a las dificultades que puede suscitar tal cláusula en el contexto de un convenio de cooperación internacional. La cuestión de la relación del Convenio y un eventual futuro Convenio revisado permanece por tanto abierta.

Artículo 43

591 El Convenio sobre la ley aplicable a los contratos de venta internacional de mercancías fue aprobado en la Sesión extraordinaria celebrada en 1985 con la participación de Estados miembros y no miembros y su artículo 25 "pretendía ofrecer a los Estados el mayor número posible de opciones para unirse al Tratado". Por dicha razón, tal y como explica el Informe relativo a dicha Sesión, "se asimiló al procedimiento tradicional de firma, seguida de ratificación, aceptación o aprobación (generalmente reservado a los miembros de la Conferencia) el método de la adhesión preferido por ciertos Estados en virtud de su simplicidad (Actas de la Sesión extraordinaria, 14 a 30 de octubre de 1985, La Haya, 1987, p. 757, núm. 194).

592 El *Convenio relativo a la protección de niños y a la cooperación en materia de adopción internacional* también fue aprobado con la participación de Estados miembros y no miembros y, a pesar de ello, como explicó el Secretario general al comentar el Documento de trabajo núm. 100, presentado por la Oficina Permanente, no sigue el ejemplo del Convenio de La Haya sobre la venta, sino el del artículo 31 del Convenio de La Haya sobre el acceso internacional a la justicia.

593 Por ello, de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 43, el Convenio está abierto a la firma de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado en el momento en el que se celebró la Decimoséptima Sesión y de los Estados no miembro que

participaron en la misma. Los Estados no miembros, que no participaron en la Decimoséptima Sesión, no pueden firmar el Convenio.

594 Los Estados firmantes podrán ratificar, aprobar o aceptar el Convenio y el instrumento de ratificación, aprobación o aceptación será depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Artículo 44

595 Como no se ha puesto a la adhesión en el mismo nivel que el tradicional método de la firma, seguida de ratificación, aceptación o aprobación, fue necesario establecer una disposición específica sobre la adhesión al Convenio. Según el Secretario general de la Conferencia de La Haya existían tres posibilidades: (1) la adhesión sin límites, lo cual no parecía aconsejable, habida cuenta de que el Convenio es un convenio de cooperación; (2) dificultar el proceso exigiendo que cada Estado contratante acepte la adhesión de otro Estado, una solución que no responde al interés del niño; y (3) permitir la adhesión salvo que, en un plazo de seis meses, se exprese una objeción a la misma. El Documento de trabajo núm. 100, presentado por la Oficina Permanente, se decantaba por esta tercera alternativa, que ya había sido preferida por el artículo 32 del Convenio de La Haya sobre el acceso internacional a la justicia.

596 Tras algunas discusiones, una amplia mayoría aprobó la propuesta efectuada por la Oficina Permanente, eligiéndose el plazo de seis meses en vez del de doce meses para poder objetar a la adhesión. Se especificó además que la adhesión tan solo será posible una vez el Convenio haya entrado en vigor.

Artículo 45

597 El artículo 45 se ocupa del caso de que un Estado con dos o más unidades territoriales tenga distintos sistemas jurídicos en materias relacionadas con el Convenio. El Documento de trabajo núm. 100, presentado por la Oficina Permanente, propuso, como explico el Secretario general, la fórmula clásica que se encuentra también en el artículo 27 del Convenio de La Haya sobre sucesiones, revisada por el Comité de cláusulas federales (Doc. trab. núm. 157) y aprobada sin ulteriores dificultades.

Artículo 46

598 El artículo 46 se incluyó en el Documento de trabajo núm. 100, presentado por la Oficina Permanente. La fórmula es la normalmente utilizada en los Convenios de la Haya y establece la entrada en vigor tras tres ratificaciones. Se aplica el mismo período a las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones posteriores a su entrada en vigor.

Artículo 47

599 El artículo 47 se ocupa de la posible denuncia al Convenio y se adecúa a la propuesta hecha por la Oficina Permanente en el Documento de trabajo núm. 100, que se asemeja, como explicó el Secretario general al artículo 30 del Convenio de La Haya sobre sucesiones.

600 Los Estados Unidos de America consideraron aconsejable prever un procedimiento relativo a a las adopciones que ya se hubieran iniciado y estuvieran todavía pendientes en el momento en el que se produjera la denuncia ante el depositario. Sin embargo, como quiera que las denuncias son poco frecuentes y se trata de problemas muy difíciles sobre la aplicación intertemporal, se decidió no incluir una disposición sobre esta cuestión en el Convenio y dejar su solución a los Estados contratantes.

Artículo 48

601 El artículo 48 fue propuesto por la Oficina Permanente en el Documento de trabajo núm. 100 y la Secretaría tan sólo puso de relieve que puesto que se trata de una cuestión "propia del depositario", no debería examinarse la disposición sin consultarle. México, señaló, sin embargo, la necesidad de incluir una referencia a los Estados participantes no miembros de la Conferencia de La Haya, cuestión ésta de la que se ocupó el Comité de redacción. Tras consultarlo con el depositario, el texto fue finalmente aprobado con ligeras modificaciones lingüísticas.

OBSERVACIONES FINALES

A Legalización

602 A pesar de que se propuso a la Comisión especial la supresión del requisito de la legalización, no se tomó, por falta de tiempo, ninguna decisión. Por esta razón, el Informe de la Comisión especial insistió en la importancia práctica de la cuestión a fin de evitar, en interés del niño, retrasos y gastos innecesarios, que a veces pueden ser muy importantes. Se mencionó que, puesto que muchos Estados no han ratificado el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 de supresión de la legalización de los

documentos públicos extranjeros, podría ser interesante retener la solución del artículo 23 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores (Informe de la Comisión especial, núm. 323).

603 El Documento de trabajo núm. 130, presentado por Suiza, propuso evitar todas las excesivas complicaciones administrativas y promover la confianza entre las autoridades de los Estados contratantes. Sugirió, por ello, la adición del siguiente artículo: "El consentimiento a la adopción y las decisiones adoptadas conforme al presente Convenio no estarán sujetas a ninguna legalización ni a otra formalidad similar". El Documento de trabajo núm. 138, presentado por Austria, extendió el ámbito de la regla y reprodujo el artículo 23 del Convenio de La Haya de sustracción de menores, que establece: "No se exigirá, en el contexto del presente Convenio, ninguna legalización ni formalidades análogas".

604 La propuesta no prosperó; puesto que ciertos Estados temieron que la disposición interfiriera con su Derecho interno, a pesar de que Austria explicó que la finalidad de la eliminación de la legalización no es interferir en el Derecho interno de los Estados contratantes en materia de adopción, sino tan sólo eliminar formalidades que se añaden a los procedimientos legales, tales como, por ejemplo, la legalización diplomática y consular de decisiones. Con esta finalidad, se recordó que el Convenio de La Haya sobre la legalización define a ésta como "la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en la que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente". Austria también aclaró que la frase "ni formalidades análogas" incluida en su Documento de trabajo núm. 138 se refería al certificado o "apostilla" exigido por el citado Convenio de la Haya.

605 Austria y Dinamarca reprodujeron la propuesta austriaca en el Documento de trabajo núm. 158 para su examen en segunda lectura y el Documento de trabajo núm. 200, presentado por la Oficina Permanente, propuso que fuera completada mediante un segundo párrafo que estableciera: "Todo Estado contratante puede declarar que no aplicará el párrafo precedente". El delegado brasileño se opuso en virtud de razones procedimentales y, desafortunadamente, la falta de apoyo impidió que se considerara la propuesta.

606 El Convenio no ha abolido, de manera formal, el requisito de la legalización, pero ésta no será necesaria ni entre los Estados parte en el Convenio de La Haya de legalización ni en caso de que los Estados contratantes acuerden suprimirlo en sus relaciones mutuas. Sería oportuno buscar una solución práctica, posiblemente en el

marco de las Comisiones especiales que deben ser convocadas por el Secretario general de acuerdo con el artículo 42, puesto que es difícil entender por qué documentos transmitidos a través de las Autoridades centrales han de someterse a la exigencia de la legalización, habida cuenta de la relación de confianza entre los Estados contratantes, que constituye la base de todo el Convenio.

B Niños refugiados

607 La posible aplicación del Convenio a niños refugiados fue examinada en la Comisión especial, pero se llegó a la conclusión de que, tal y como estaban redactadas, las reglas convencionales contenían las suficientes garantías y eran lo suficientemente flexibles como para regular los problemas que suscita la adopción de niños refugiados.

608 En la Conferencia diplomática se produjo una discusión similar. El Documento de trabajo núm. 12, presentado por los Estados Unidos de América, propuso que se añadiera un nuevo párrafo al artículo 2 que dijera: "El Convenio también se aplicará a niños que han sido desplazados de su Estado de origen. En caso de un niño desplazado, el Estado en el que el niño se encuentre actualmente asumirá las responsabilidades que el Convenio atribuye al Estado de origen". El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) propuso en el Documento de trabajo núm. 56 la adición de un segundo párrafo al artículo 2, con la siguiente redacción: "El Convenio también se aplicará a los niños que han sido desplazados de su Estado de origen, incluyendo a aquellos que pretenden obtener el estatuto de refugiados y a aquellos considerados refugiados de acuerdo con el Derecho internacional e interno aplicable. Si se trata de un niño desplazado de su país de origen, el Estado en el que se encuentre actualmente asumirá las responsabilidades que el Convenio atribuye al "Estado de origen", según los términos del Convenio."

609 El Documento de trabajo núm. 31, presentado por Bélgica, propuso que se aprobara una resolución convocando una Comisión especial para examinar los problemas que suscitan los niños refugiados. La propuesta fue aceptada y, en consecuencia, se aprobó la siguiente Decisión:

La Decimoséptima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado;

Considerando que el Convenio relativo a la protección de niños y a la cooperación en materia de adopción internacional se aplicará a niños con residencia habitual en un Estado contratante en las circunstancias previstas en el artículo 2 del Convenio;

Preocupada por que los niños refugiados y otros niños internacionalmente desplazados reciban dentro de este Convenio la atención especial que su especial y vulnerable situación requiere;

Considerando la necesidad de un examen más detallado de esta cuestión y eventualmente la posibilidad de que se elabore un instrumento especial suplementario a este Convenio;

Solicita del Secretario general de la Conferencia de la Haya que, en consulta con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, convoque en un futuro próximo un grupo de trabajo para examinar esta cuestión y elaborar propuestas específicas que se sometan a una Comisión especial de la Conferencia de la Haya a fin de asegurar a esta categoría de personas una protección adecuada.

C Formularios tipo

610 Como recordaba el Informe de la Comisión especial (Núm. 234), habida cuenta de la experiencia favorable con los demás Convenios de La Haya, la Comisión especial había considerado la oportunidad de preparar formularios tipo para simplificar y facilitar el cumplimiento de las normas del Convenio, si bien no como parte del Convenio sino como anexo al mismo, de manera que fuera posible modificarlos sin demasiadas dificultades formales. No obstante, esta cuestión no fue objeto de debate, a pesar de que se presentaron algunos Documentos de trabajo relativos a la elaboración de formularios.

611 La Conferencia diplomática admitió la importancia del establecimiento, como anexo del Convenio, de formularios tipo; sólo la falta de tiempo explica que no se examinaran los formularios propuestos en el Documento de trabajo núm. 32, presentado por Bélgica y en los Documentos de trabajo núms. 55 y 79, presentados ambos por España. No obstante, en el Documento de trabajo núm. 189, Bélgica, España y Suiza propusieron que se aprobara una Recomendación invitando a los Estados participantes en la primera Comisión especial, que tenga lugar de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42, a elaborar un formulario tipo a fin de favorecer una aplicación correcta y uniforme de las disposiciones relativas a los consentimientos exigidos por el artículo 4, apartado c y de la certificación prevista en el artículo 23.

612 La idea fue aceptada por consenso y la Decimoséptima Sesión aprobó el siguiente Deseo:

Considerando que el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional prevé

a en el artículo 4, apartado c, que las adopciones previstas en el Convenio sólo tendrán lugar si las autoridades competentes del Estado de origen se han asegurado de que se han otorgado los consentimientos exigidos respetando ciertas garantías,

b en el artículo 23, párrafo 1, que el reconocimiento de una adopción realizada conforme al Convenio exige un documento que certifique que la adopción ha sido efectivamente hecha de acuerdo con el Convenio,

Convencida de que el uso, por parte de las autoridades competentes de los Estados contratantes, de formularios basados en un modelo uniforme puede promover la aplicación correcta y uniforme de estas disposiciones;

Expresan el deseo de que los expertos que participen en la primera reunión de la Comisión especial, convocada en virtud del artículo 42, establezcan formularios tipo a estos efectos.

D Post-scriptum

613 Hasta el 31 de diciembre de 1993, el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional había sido firmado por los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Costa Rica, Israel, México, los Países Bajos, Rumanía y Uruguay.

614 De acuerdo con la Decisión adoptada por la Decimoséptima Sesión mencionada, la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado ha convocado a un grupo de expertos sobre los niños refugiados que se reunirá entre los días 12 y 14 de abril de 1994.

615 El interés existente en combatir, con carácter general, las infracciones relativas a los niños explica que la Organización internacional de la policía criminal (Interpol) se haya interesado vivamente, desde los inicios, por el trabajo de la Conferencia de La Haya y que en su Sexagesimosegunda Asamblea general, celebrada en Aruba (del 29 de septiembre al 5 de octubre de 1993) haya aprobado recomendar a los Estados parte en dicha Organización " que, sin perjuicio de los principios fundamentales relativos a la adopción en determinados países, examinaran sus legislaciones y prácticas en vista a poder llegar a ser parte, tan pronto como sea posible, del Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional y adoptaran, si se considerara necesario, disposiciones penales para completar las disposiciones contenidas en el Convenio de La Haya.

615 Pocos días después, un Comité de expertos convocado por la Organización de Estados americanos se reunió en Oaxtepec, Morelos (México) entre los días 13 y 17 de

octubre de 1993 y aprobó un "Proyecto de convenio sobre el tráfico internacional de menores" relativo a aspectos civiles y penales, que será examinado por la Quinta Conferencia especializada sobre el Derecho internacional privado (CIDIP-V) en México la próxima primavera.

Caracas, 31 de diciembre de 1993.